



## Segundo Concurso Universitario JEP 2024

### EXPEDIENTE

**Bogotá D.C., Colombia**

## HOJA DE RUTA

**Nota:** recuerden que los elementos formales del concurso se consignan en el [Reglamento](#) y en el [Cronograma](#).

- En esta segunda versión del concurso, el expediente se enfoca en un Auto de Determinación de Hechos y Conductas hipotético basado en un subcaso real conocido por la Jurisdicción, este documento incorpora elementos reales utilizados por la SRVR que abarcan: el contexto, casos ilustrativos, patrones de macrocriminalidad y la calificación jurídica. Así, estos componentes se han adaptado para analizar las ejecuciones extrajudiciales que tuvieron lugar en el departamento del Putumayo<sup>1</sup> durante el periodo de 2005 a 2009, con el propósito de facilitar la discusión jurídica en el marco del concurso.
- El trámite propuesto en esta **Segunda Edición del Concurso Universitario JEP 2024** consiste en la recepción de observaciones dentro del proceso dialógico de la Sala de Reconocimiento. Para profundizar acerca de dicho trámite, se recomienda revisar las Sentencias Interpretativas (SENIT) expedidas por la Sección de Apelación de la JEP.
- El presente Auto de Determinación de Hechos y Conductas presenta un contexto **basado en hechos ficticios**, los cuales fueron diseñados y estructurados exclusivamente para el desarrollo del Concurso. En este sentido, los hechos mencionados no serán objeto de discusión o controversia; sin embargo, pueden ser utilizados para la elaboración de argumentos relacionados con la imputación y calificación de conductas.
- La discusión versa únicamente sobre los tres sujetos imputados: “Armando Jesús Pastor López; María Bertilda Yanacona Olaya; Carlos Montaña Guamanga”.
- La defensa, representación de víctimas y el Ministerio Público deben construir su respectiva teoría del caso. Dentro de esta deben abarcar como mínimo los siguientes conceptos jurídicos: concurso entre crímenes internacionales, máxima responsabilidad, títulos de responsabilidad, calificación propia de la JEP, entre otros; aunque, esto no es óbice para que puedan haber más elementos a discutir.
- Los requisitos formales del sometimiento se tienen por probados.

---

<sup>1</sup> **Aclaración importante:** En la actualidad, no se ha instaurado un macrocaso de Putumayo en la Jurisdicción Especial para la Paz, los datos presentados en este expediente son ficticios y se han implementado con propósitos estrictamente pedagógicos con el fin de sostener discusiones jurídicas al interior del concurso.

- Las únicas pruebas que se tendrán en cuenta son las del expediente.
- La discusión deberá estar encaminada hacia los elementos sustanciales mas no procedimentales, es decir, no se tendrán en cuenta nulidades, solicitud de pruebas, prescripción, entre otros.
- Las decisiones de la JEP serán fuente primordial para el desarrollo del Concurso. Por ello, se recomienda el uso del buscador Relati (<https://relatoria.jep.gov.co/>).
- Las preguntas aclaratorias se recibirán del 8 al 29 de julio de 2024, cada equipo podrá remitir máximo cuatro (4) preguntas. Para más información, remitirse al Reglamento.
- Es importante para resolver este caso que los estudiantes revisen los elementos de los Autos de Determinación de los casos de hechos y conductas emitidos por la Jurisdicción



Bogotá D.C., 4 de julio de 2024  
202467891802

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ  
SALAS DE JUSTICIA  
SALA DE RECONOCIMIENTO DE VERDAD, DE RESPONSABILIDAD  
Y DE DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS Y CONDUCTAS

Auto No. 247 de 2024  
Bogotá D. C., 4 de julio de 2024

Caso:	Caso No. 03. Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado – Subcaso Putumayo
Asunto:	Determinar los hechos y conductas ocurridos en el Putumayo durante el 2005 y el 2009, atribuibles a miembros de la BIHVG, y ponerlos a su disposición a efectos del reconocimiento de su responsabilidad.

ASUNTO

La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (en adelante Sala de Reconocimiento, Sala o SRVR) de la Jurisdicción Especial para la Paz (en adelante JEP), en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, procede a determinar y calificar jurídicamente los hechos y las conductas respecto de las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate en el marco del subcaso Putumayo del Caso No. 03, atribuibles a miembros del Batallón de Infantería Héroes del Valle del Guamuez. La Sala pondrá a disposición de estos comparecientes los hechos y conductas aquí determinados, con el fin de que estos decidan si reconocen o no su responsabilidad en los términos del artículo 79 literal h) de la Ley 1957 de 2019, Ley Estatutaria de Administración de Justicia en la JEP (también LEAJEP)<sup>1</sup> y del artículo 27 B de la Ley 1922 de 2018 (también Ley de Procedimiento de la JEP)<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Ley 1957 de 2019, Art. 79. Literal h).

<sup>2</sup> Ley 1922 de 2018, Art. 27b.

CONTENIDO DE LA PROVIDENCIA

<b>I. ANTECEDENTES PROCESALES</b>	<b>5</b>
<b>II. CONSIDERACIONES</b>	<b>6</b>
<b>A. COMPETENCIA</b>	<b>6</b>
A.1. La competencia de la Sala para proferir el auto de determinación de hechos y conductas	6
<b>B. CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (2005-2009)</b>	<b>7</b>
B.1. Periodo del análisis	7
B.2. Dinámicas del conflicto armado en el Putumayo 1998-2009	9
B.3. El dispositivo militar en el Putumayo	10
B.4. El despliegue del Bloque Sur de las FARC-EP en el Putumayo	14
B.5. La Zona de Distensión y sus efectos en el conflicto en el Putumayo	17
B.6. La crisis de las FARC-EP en el Putumayo a partir de la implementación de la Política de Seguridad Democrática	19
B.7. Ambiente operacional en el departamento del Putumayo en las áreas de incidencia del Batallón de Infantería Héroes del Valle del Guamuez (BIHVG) durante el periodo 2005-2009	22
B.8. Ambiente operacional del BIHVG según los comparecientes ante la JEP	23
B.9. Ambiente operacional descrito por el Coronel Armando Jesús Pastor López	24
B.10. Ambiente operacional descrito por la TC María Bertilda Yanacona Olaya	27
B.11. Ubicación de los campamentos de las FARC-EP, operatividad mediante milicias y denuncias de violaciones de DD. HH. en la jurisdicción de la BIHVG	30
B.12. Los campamentos de las FARC-EP, operatividad mediante milicias y denuncias de violaciones de DDHH en la jurisdicción de la BIHVG	30
B.13. La estrategia guerrillera de ubicar los campamentos en partes altas del Putumato se mantuvo una vez se puso fin a la ZD y durante el periodo de interés de este Subcaso	31
B.14. La relación entre la ubicación de los campamentos de las FARC-EP y las formas de operar de la guerrilla y el Ejército Nacional	32
<b>C. HECHOS DETERMINADOS, CASOS ILUSTRATIVOS Y PATRONES DE MACROCRIMINALIDAD</b>	<b>34</b>
C.1. Del patrón macrocriminal	36
C.1.1. Síntesis del patrón macrocriminal general	41
C.2. Abordaje del patrón macrocriminal a través de casos ilustrativos	46
<b>D. CALIFICACIÓN JURÍDICA PROPIA DE LOS HECHOS Y CONDUCTAS</b>	<b>58</b>

D.1. Marco jurídico aplicable para la calificación jurídica propia de los hechos y conductas	60
D.2. Crímenes de Lesa Humanidad	66
D.3. Crímenes de Guerra	73
<b>E. DEL LLAMADO A RECONOCER RESPONSABILIDAD</b>	80
E.1. Responsabilidad del superior o responsabilidad de mando	80
E.2. Coautoría	80
E.3. Comparecientes del Batallón de Infantería Héroes del Valle del Guamuez (BIHVG)	87
<b>III. RESUELVE</b>	119

TABLA DE ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
CICR	Comité Internacional de la Cruz Roja
CNG	Conferencia Nacional Guerrillera
CP	Código Penal Colombiano
CPI	Corte Penal Internacional
DDHH	Derechos humanos
DIDH	Derecho Internacional de los Derechos Humanos
DIH	Derecho Internacional Humanitario
DPI	Derecho Penal Internacional
ER	Estatuto de Roma
FARC-EP	Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo
JEP	Jurisdicción Especial para la Paz
LEAJEP	Ley Estatutaria de Administración de Justicia de la JEP
MIPBC	Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate
OACP	Oficina del Alto Comisionado de Paz
PSD	Política de Seguridad Democrática
SRVR	Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas
VV	Versión voluntaria
ZD	Zona de Distensión
ADHC	Auto de Determinación de Hechos y Conductas
BR27	Brigada de Selva No. 27
BIHVG	Batallón de Infantería Héroes del Valle del Guamuez
FGN	Fiscalía General de la Nación
CO9	Comando Operativo No. 9
BIARG	Batallón de Infantería No. 26 Amadeo Rodríguez Guevara
ONG	Organizaciones No Gubernamentales
AUC	Autodefensas Unidas de Colombia
CMRL	Columna Móvil Rigoberto Lozada
CorteIDH	Corte Interamericana de Derechos Humanos
CTI	Cuerpo Técnico Investigativo



## I. ANTECEDENTES PROCESALES

1. Mediante auto No. 05 de 17 de julio de 2018 la Sala de Reconocimiento (SRVR, Sala de Reconocimiento o Sala) avocó conocimiento del Caso 03 a partir del Informe No. 5 presentado por la Fiscalía General de la Nación (FGN), denominado “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. La Sala de Reconocimiento ha priorizado el análisis de unidades militares y territorios en función del número de hechos, de víctimas y del potencial ilustrativo de lo ocurrido en estos territorios respecto del fenómeno nacional. Con los Autos No. 125 de 02 de julio de 2021 y 128 de 07 de julio de 2021 el caso fue renombrado como “Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.
2. A la fecha, la Sala de Reconocimiento ha recibido dos informes de entidades estatales (Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de la Nación), y el Informe de la Secretaría Ejecutiva de la JEP a las Salas de Justicia, que son relevantes para el Subcaso Putumayo. Por su parte, se obtuvieron 30 informes de organizaciones de víctimas relativas al Caso 03; de estos últimos, 2 se refieren a hechos ocurridos en el Departamento del Putumayo y mencionan acciones realizadas, entre otros, por integrantes del Batallón de Infantería Héroes del Valle del Guamuez entre el 2005 y 2009.
3. De conformidad con el artículo 79 (e) de la Ley 1957 de 2019 y el artículo 27 A de la Ley 1922 de 2018, en el marco del Caso No. 03, la Sala de Reconocimiento ha realizado 773 versiones voluntarias (VV) de comparecientes vinculados a las unidades priorizadas en un total de 990 sesiones. En relación con el Subcaso Putumayo, esta Sala convocó 70 versiones voluntarias y 4 testimonios de terceros e integrantes del BIHVG. Se escuchó a 60 exintegrantes del BIHGV, para esclarecer su involucramiento en muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate ocurridas en el periodo comprendido entre los años 2005 y 2009. De los 60 militares o exmilitares que atendieron el llamado de la Sala, 9 rindieron versión escrita y 71 fueron llamados a rendir su versión de manera presencial o virtual, sin perjuicio de la entrega posterior de complementos por escrito. Otra de las cifras a la fecha, es la acreditación de 3.625 víctimas, de las cuales 186 sufrieron hechos victimizantes en el Departamento del Putumayo.
4. Para cumplir los mandatos constitucionales y legales encomendados a la JEP en cuanto a la contrastación de información referente a las conductas criminales cometidas entre los límites de competencia de esta corte, la Sala se comunicó de manera articulada con los despachos de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) para obtener la información de los procesos que cursan allí; a la vez que ordenó la práctica de inspecciones judiciales a los expedientes que reposan en las Fiscalías 45 y 103 Especializadas contra las violaciones a los derechos humanos de la ciudad de Mocoa y 56 Especializada contra las violaciones a los derechos humanos de la ciudad de Bogotá.



## II. CONSIDERACIONES

### A. COMPETENCIA

#### A.1. La competencia de la Sala para proferir el auto de determinación de hechos y conductas.

5. En esta Sección se reiterarán los argumentos expuestos por la Sala en los Autos 019, 125 y 128 de 2021; los autos SUB-D- 055, Subsalas D y F- 01 de 2022 y SUB-D- 062 de 2023 que constituyen el precedente sobre la competencia de la Sala de Reconocimiento para proferir el Auto de Determinación de Hechos y Conductas (ADHC), incluida la naturaleza y alcance de esta decisión.

6. La Constitución Política le confiere competencia preferente a la JEP sobre los crímenes cometidos en el conflicto armado, así como la competencia específica a la Sala de Reconocimiento para identificar a los máximos y las máximas responsables de los hechos más graves y representativos<sup>3</sup>, tal como lo refleja al mencionar que la JEP “tendrá competencia sobre los delitos cometidos por causa<sup>4</sup>, con ocasión<sup>5</sup> o en relación directa<sup>6</sup> o indirecta con el conflicto armado y sin ánimo de obtener enriquecimiento personal ilícito, o en caso de que existiera, sin ser este la causa determinante de la conducta delictiva; ocurridos con anterioridad al 1º de diciembre de 2016. En especial si son considerados graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los Derechos Humanos”<sup>7</sup>.

7. La Corte Constitucional también prescribe para la JEP un modelo de investigación en contexto por medio de macroprocesos, que permiten concentrar la ocurrencia de delitos y los esfuerzos de la Jurisdicción en el esclarecimiento de quiénes fueron los máximos responsables, basada en un enfoque de crímenes de sistema, entendidos como manifestación de criminalidad organizada determinada por políticas, planes y prácticas que se caracterizan por involucrar un continuum de poderes e intereses<sup>8</sup>.

8. La Ley 1957 de 2019 desarrolló el alcance de la competencia prevalente sobre hechos relacionados con el conflicto armado, determinando que es función de la Sala de Reconocimiento recibir los informes que presentan las

<sup>3</sup> Sobre la definición y alcance de los conceptos, ver Sentencia TP-SA-RPP No. 230 de 2021.

<sup>4</sup> Al respecto, el Auto TP-SA 19 de 2018 señala lo siguiente: “En cuanto a la expresión por causa del conflicto armado, literalmente se traduce en un juicio de causalidad que establezca si la conducta tuvo origen o no en el conflicto”, párr. 11.13

<sup>5</sup> Al respecto, el Auto TP-SA 19 de 2018 señala lo siguiente: “cuando se analice el nexo de una conducta con el conflicto armado no internacional bajo el criterio con ocasión, debe comprenderse como una relación cercana y suficiente con su desarrollo”, párr. 11.12

<sup>6</sup> El Auto TP-SA 19 de 2018, citando la sentencia C-007 de 2018 de la Corte Constitucional, señaló que la relación directa “en su interpretación literal significaría, al igual que la expresión con causa, una evaluación de un juicio de causalidad entre la conducta y el conflicto para establecer fácticamente si tiene su origen en este y con ello la constatación del nexo”.

<sup>7</sup> Acto Legislativo 01 de 2017. Artículo transitorio 5.

<sup>8</sup> Corte Constitucional, Sentencia C-080 de 2018.

organizaciones de víctimas y las entidades del Estado<sup>9</sup>, ponerlos a disposición de las personas allí comprometidas con el fin de que puedan dar su versión sobre los hechos<sup>10</sup> y contrastar cada informe con otras fuentes de conocimiento y los medios de prueba obrantes en el expediente<sup>11</sup>.

9. Una vez se culmina la etapa de contrastación, la Sala debe elaborar el Auto de Determinación de Hechos y Conductas con el fin de ponerlo a disposición de las partes, dando a conocer la imputación proferida y aquellas personas señaladas como máximas responsables por los crímenes competencia de la JEP<sup>12</sup>, de modo que estas puedan tomar la decisión de “efectuar el reconocimiento -o no reconocimiento- de su responsabilidad”<sup>13</sup>.

10. En lo que atañe a ésta decisión, la Sala está en condiciones de afirmar que: (i) los hechos ocurridos en el Departamento del Putumayo durante los años 2005 a 2009 tuvieron relación directa o indirecta, se cometieron por causa o con ocasión del conflicto armado interno, (ii) fueron perpetrados por integrantes de la Fuerza Pública, (iii) que por esas conductas son considerados como máximos y máximas responsables y (iv) que los delitos pueden calificarse como crímenes de guerra y de lesa humanidad, de conformidad con las descripciones del Estatuto de Roma (ER).

11. Al encontrar que las conductas investigadas tienen relación con el conflicto armado, fueron cometidas por integrantes del Ejército Nacional, quienes son individualizados en esta providencia, y se encuentran en el periodo de competencia temporal de esta Jurisdicción, esta Sala concluye que tiene competencia para conocer del presente subcaso y por ende, está facultada para expedir este auto.

12. A continuación, se adelanta una descripción de la ruta de contrastación de los informes, versiones y demás elementos del acervo probatorio, en los que se fundamentan los hechos y conductas que se determinan en el presente auto.

## **B. CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (2005-2009)**

### **B.1. Periodo del análisis**

13. La Sala de Reconocimiento publicó los criterios y el resultado del ejercicio de priorización del Caso 03. En dicha decisión, se analizaron las tendencias cuantitativas y cualitativas de los casos de Muertes Ilegítimamente presentadas

<sup>9</sup> Ley 1957 de 2019, Artículo 79.B.

<sup>10</sup> Ley 1957 de 2019, Artículo 79.E y Ley 1922 de 2018, Artículo 27.

<sup>11</sup> Ley 1957 de 2019, Artículo 79.H y Ley 1922 de 2018, Artículo 27.B.

<sup>12</sup> Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Autos 019, 125 y 128 de 2021 y los autos SUB-D-055, Subsalas D y F-01 de 2022 y SUB-D-062 de 2023.

<sup>13</sup> Ley 1957 de 2019, Artículo 79.H.

como bajas en combate por agentes del Estado (MIPBC), según fueron informadas a la JEP. Los informes de las organizaciones de víctimas y el Informe No. 5 de la FGN coinciden en señalar que esta práctica aumenta en el departamento del Putumayo de forma sustancial a partir del año 2005 hasta el 2009.

14. Durante la labor de concentración, agrupación y determinación del universo provisional de hechos (UPH) que realizó el Grupo de Análisis de la Información de la JEP (GRAI) y presentó la Sala, se confirmó lo planteado en dichos informes. Como resultado, se llegó a una priorización temporal y espacial en la que se identificaron seis territorios donde se concentró el esfuerzo inicial de investigación del Macrocaso, lo anterior con el ánimo de ofrecer una mirada comprensiva de lo ocurrido a partir de un análisis de las tendencias nacionales y las características de los hechos en lo local.

15. Como consecuencia, esta Sala priorizó un período de análisis entre 2005 y 2009 e identificó al departamento del Putumayo como uno de los territorios dentro de la investigación del fenómeno macrocriminal de las MIPBC. Bajo este contexto, la Sala de Reconocimiento decidió dar apertura al Subcaso Putumayo.

16. En el análisis regional de lo ocurrido, esta Sala encontró que en el periodo priorizado ocurrieron en el departamento del Putumayo un total de 67 homicidios en persona protegida, 37 casos de desaparición forzada y 25 de tortura, para un registro desagregado de las MIPBC es: durante el año 2005 se produjeron 7 casos, en el 2006 se reportan 15 muertes en combate, a lo largo del 2007 se tiene el pico con 26, para luego, en el descender a 12 casos y en el 2009 disminuir a 7 casos.

17. Esta conducta criminal es consistente con lo que ha determinado la Sala en los otros territorios como Norte de Santander, Antioquia, Huila, Costa Caribe, Dabeiba y Casanare. Sin perjuicio de las hipótesis que pueden plantearse sobre estas similitudes, y lo que esto pueda significar para la evaluación del fenómeno en el ámbito nacional, para el contexto del presente auto, ateniendo al Subcaso Putumayo, el 79% de los casos de asesinatos y desapariciones cometidos por integrantes de la fuerza pública ocurrieron entre 2005 y 2009. Por ende, el análisis de las victimizaciones y la consecuente determinación de los hechos se concentrarán en dicho periodo.

18. Lo anterior no es óbice para que la Sala considere y afirme que el esclarecimiento logrado frente a los hechos en este marco temporal también puede servir como respuesta a las demandas de justicia, verdad, reparación y no

repetición de quienes sufrieron hechos victimizantes ocurridos fuera del mismo; esto por cuanto la investigación se aborda desde una perspectiva de casos ilustrativos que sirven para develar el funcionamiento de las estructuras criminales que los cometieron o las fallas institucionales que los permitieron, incluso antes o después del periodo específico de análisis.

19. Ahora bien, al igual que en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas del Subcaso conjunto del Cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia<sup>14</sup>, la Sala no se limitó a examinar hechos puntuales e inconexos que fueran imputables a integrantes de la Fuerza Pública. En cambio, se analizaron los hechos bajo el contexto, asociándolos por patrones macrocriminales y ubicándolos en un ambiente operacional específico.

20. En otras palabras, la manera como la Fuerza Pública cometió las ejecuciones extrajudiciales en el Putumayo, sus motivaciones, patrones, modus operandi y modalidades de encubrimiento no se entienden cabalmente si no se analiza, simultáneamente la evolución, las tácticas y las estrategias de las FARC-EP en la zona delimitada por este auto.

21. A continuación se abordarán las circunstancias, derivadas de la evolución del conflicto armado, que confluyen en la forma mediante la cual los diferentes actores armados hicieron presencia en el departamento del Putumayo y lo que esto implicó para la comisión de los crímenes que se investigan en este subcaso. Dicho análisis será la base para el posterior estudio relacional de los hechos con el conflicto como elemento estructural de la calificación de estas conductas como crímenes de guerra.

## **B.2. Dinámicas del conflicto armado en el Putumayo 1998-2009**

22. Este análisis hace referencia a los homicidios, desapariciones forzadas y torturas, cometidas entre 2005 y 2009, atribuidos al Batallón de Infantería Héroes del Valle del Guamuez, perteneciente a la Brigada Selva Mocoa No. 27 (BR27) del Ejército Nacional, ubicado en Putumayo, investigados por la Sala de Reconocimiento de la JEP en el marco del caso 03 subcaso Putumayo.

23. En la primera y segunda parte de este análisis se describirá la presencia del Ejército Nacional y las FARC-EP en el departamento del Putumayo, así como la

<sup>14</sup> Jurisdicción Especial para la Paz. Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Auto SUB-SALA D Y F 01 de 2022.



forma en que la amenaza de las FARC-EP evolucionó desde finales del siglo XX hasta el periodo investigado (2005-2009). En la segunda, tercera y cuarta parte se realizará un análisis que detallará el ambiente operacional en las jurisdicciones de la 27° Brigada Selva Mocoa, en específico del batallón territorial BIHVG.

24. En la quinta y sexta parte de este análisis se expondrá lo que los integrantes del Ejército Nacional declararon sobre la ubicación de los campamentos de las FARC-EP en sus áreas de responsabilidad así como las implicaciones de esta disposición. En la séptima parte se analizarán los diferentes aspectos de las organizaciones milicianas de las FARC-EP, incluyendo características y modos de operar en el departamento del Putumayo según las versiones voluntarias recopiladas.

25. Con relación a lo anterior, la Sala considera de suma importancia examinar el contexto en que acaecieron los hechos, dada la necesidad de entender la "racionalidad" tanto de los asesinatos, desapariciones forzadas y torturas como las lógicas del conflicto en las que se insertan los patrones criminales.

26. Por ello es pertinente analizar, de manera integral, las percepciones, vivencias, tácticas y estrategias de los comparecientes tanto de la Fuerza Pública como de las FARC-EP, junto con las pruebas y fuentes abiertas, para construir un contexto robusto y contrastado, proporcionando a las víctimas una visión más completa de los hechos, que trascienda los casos individuales y permita identificar asuntos representativos.

### **B.3. El dispositivo militar en el Putumayo**

27. El Departamento del Putumayo, junto con el departamento del Amazonas y Caquetá, forma parte de la Sexta División del Ejército Nacional (DIV6), creada en 1996 por el Ministerio de Defensa; esta controla el territorio asignado mediante cinco unidades operativas menores: las Brigadas 2°, 12°, 26°, 27° y el Comando Operativo de Estabilización y Consolidación, tal como lo confirma la FGN:

“(…) la Sexta División estaba compuesta por cuatro brigadas: la BR27 con sede en Mocoa, la BR26 con sede en Florencia, la BR12 con sede en Leticia y la BR2 con sede en Florencia. Desde 2013 la Sexta División cubre los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo, ya que por disposición del Plan Espada de Damocles le fue asignada en 2011 la Brigada 27, con sede en Mocoa. Esta Brigada se encargaba de las operaciones y seguridad en 9 municipios del Putumayo. El Señor Armando Jesús Pastor López, Coronel entre

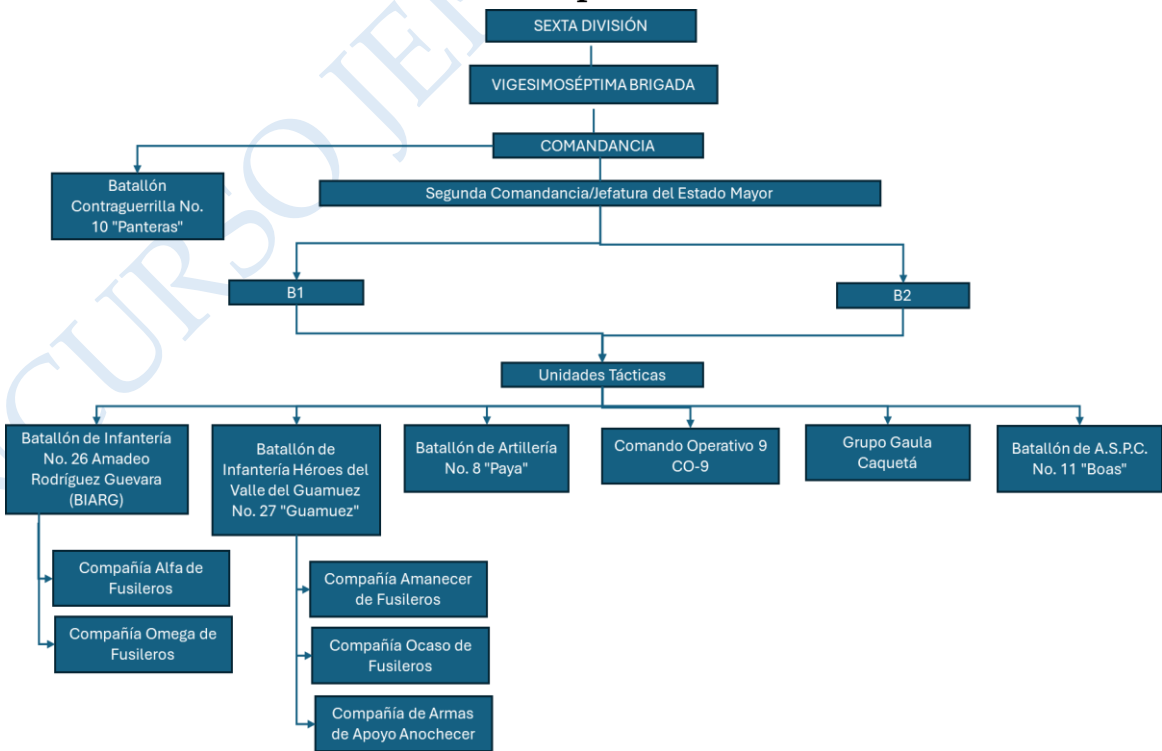
2007 y 2009, describió la jurisdicción de la BR27 como un aparato militar con la responsabilidad de proteger 40 municipios en Putumayo, Amazonas y Caquetá, con un total de 8,523 integrantes entre oficiales, suboficiales, soldados y civiles.<sup>15</sup>

28. En 2002, la Brigada estaba integrada por seis unidades tácticas: (i) el Batallón de Infantería No. 26 Amadeo Rodríguez Guevara (BIARG), ubicado en San Francisco, (ii) el Batallón de Infantería Héroes del Valle del Guamuez No. 27 "Guamuez" (BIHVG) en Mocoa, (iii) el Batallón de Artillería No. 8 "Paya" en Florencia, (iv) el Batallón Contraguerrilla No. 10 "Panteras", (v) el Batallón de A.S.P.C. No. 11 "Boas" en Florencia y (vi) el Grupo Gaula Caquetá en Florencia.

29. Esta configuración ha cambiado con el paso del tiempo, incluyendo unidades adicionales como el Batallón de Instrucción y Entrenamiento No. 7 Roncancio Ramírez Rocha, el Batallón Especial Energético y Vial No. 9 CR Manuel Ignacio Padilla Gutiérrez y el Batallón de Combate Terrestre No. 20 Cándido Leguizamo.

30. A continuación se incluye una gráfica que ilustra la estructura de la Brigada No 27 (BR27) 2005 y 2009:

**Gráfica No. 1. Composición de la BR27**



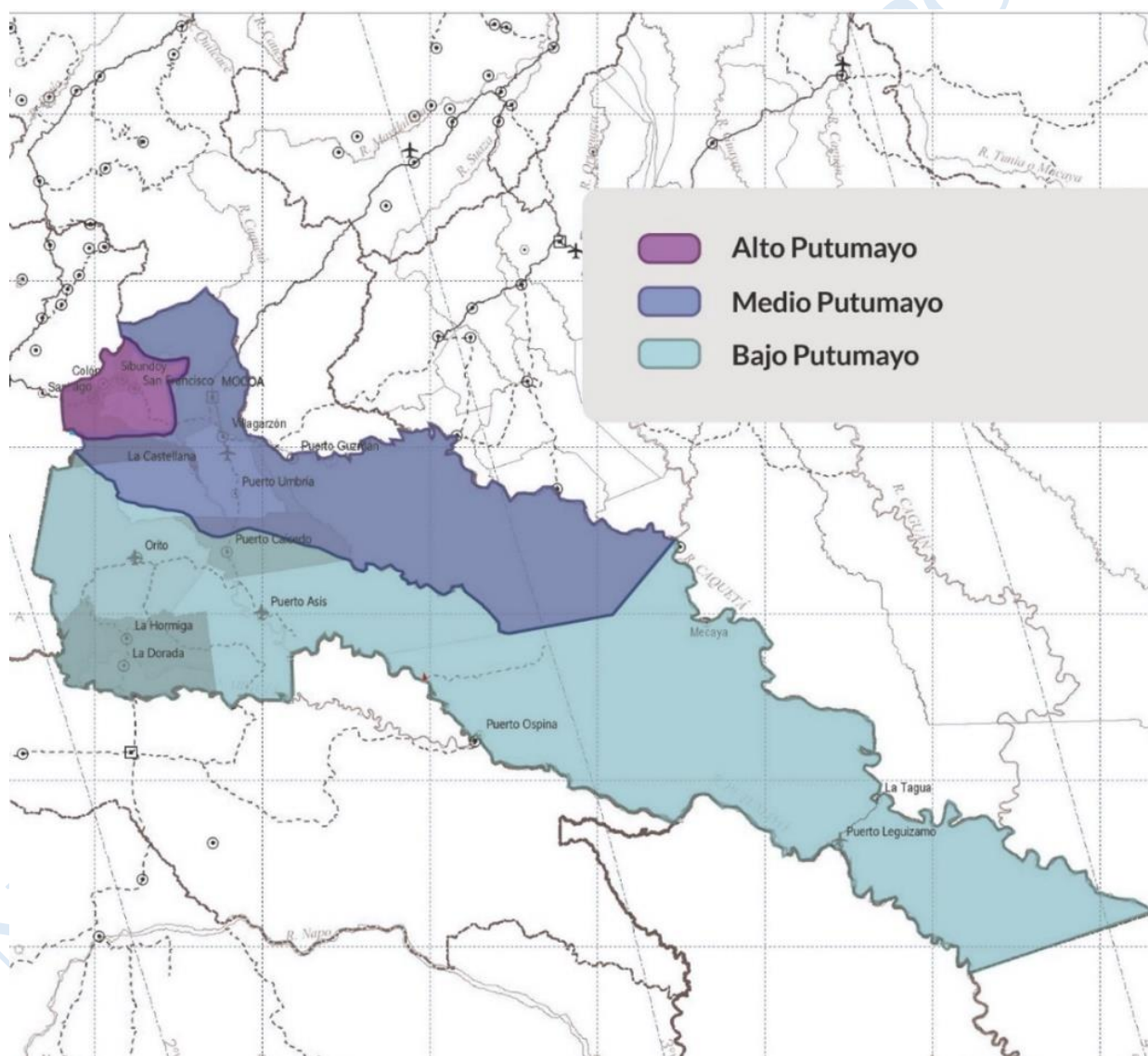
<sup>15</sup> Fiscalía General de la Nación. Informe Número 5 “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. Incorporado al expediente Legali Caso 03, Subcaso Putumayo



SALA DE RECONOCIMIENTO DE VERDAD,  
DE RESPONSABILIDAD Y DE DETERMINACIÓN  
DE LOS HECHOS Y CONDUCTAS

32. A modo de ilustración, se incluye un mapa del Putumayo con indicación de sus cabeceras municipales, las principales vías del departamento y el curso del río Caquetá así como algunos puntos referidos en los párrafos posteriores.

### Mapa No. 2. Ubicación del Alto y Bajo Putumayo

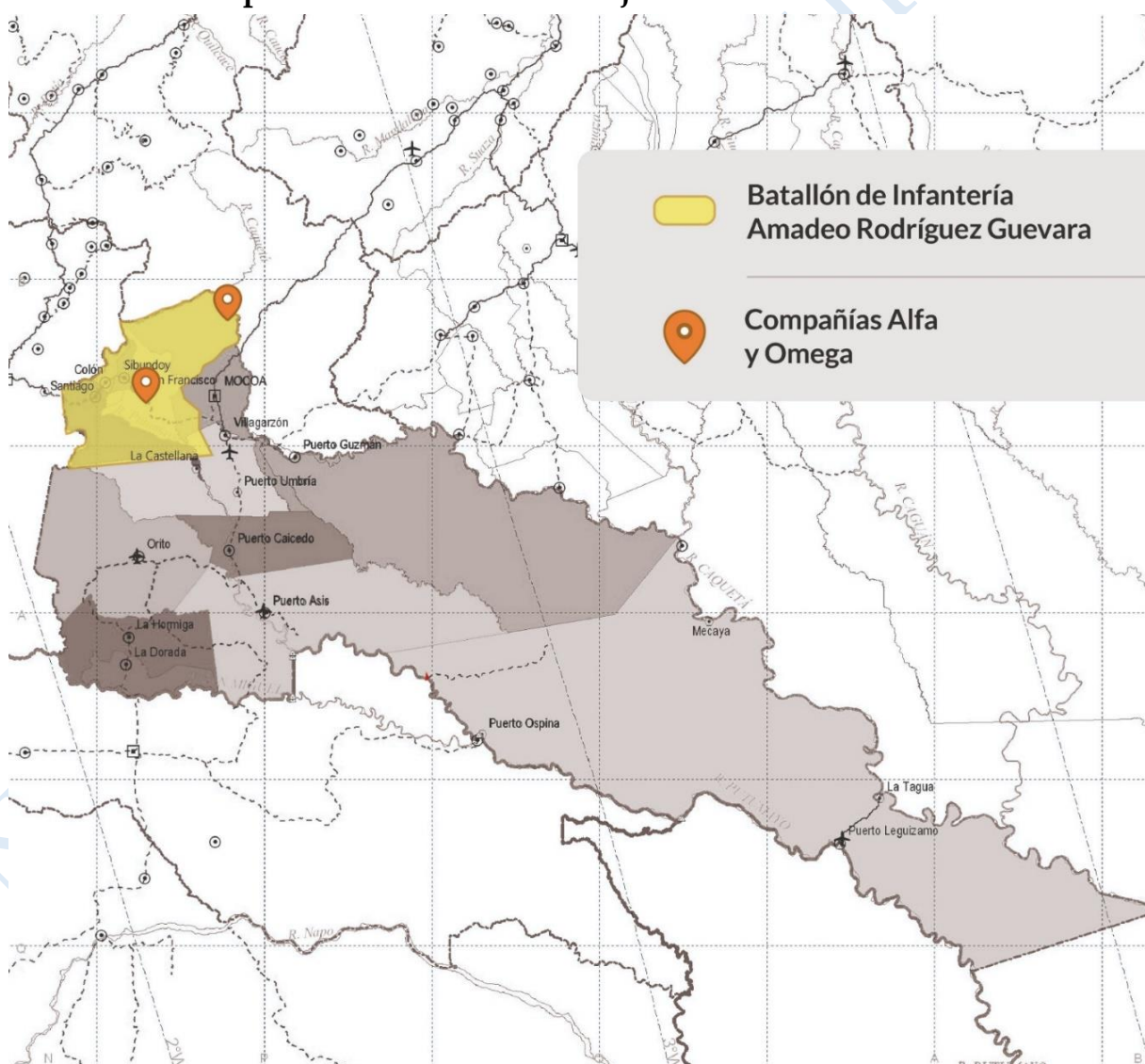


33. La ubicación de las unidades militares en el Putumayo tenía como objetivo asegurar que todo el departamento estuviera bajo el control del Ejército Nacional. El Batallón de Artillería Paya tradicionalmente ha controlado los municipios del norte de Putumayo, incluido el Valle de Sibundoy; el Batallón de Infantería Héroes del Valle del Guamuez (BIHVG), tenía jurisdicción sobre la región del

medio Putumayo, abarcando Mocoa, Villagarzón y Puerto Leguizamo. Entre 2005 y 2009, el norte del Putumayo estuvo bajo la responsabilidad del Batallón de Infantería Amadeo Rodríguez Guevara (BIARG), asentado en el municipio de San Francisco.

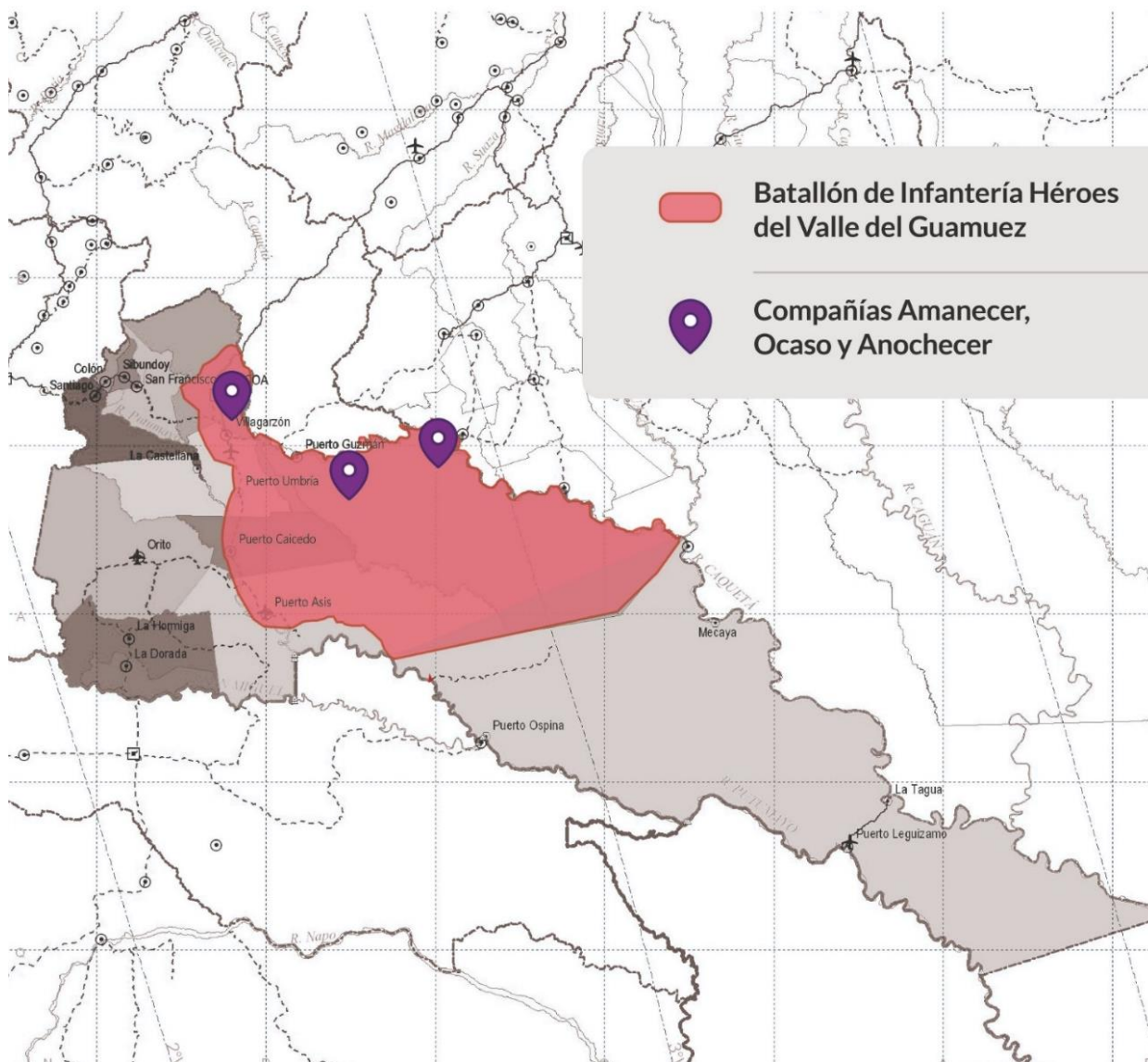
34. La región del Medio Putumayo, donde se sitúan los municipios de Mocoa, Villagarzón y Puerto Guzmán, se caracteriza por ser una zona de cordilleras con un valle en el medio, muy productivo en el sector de la agricultura cafetera gracias al río Caquetá y con una economía con altos niveles de pobreza y desempleo. Esta geografía y situación socioeconómica de la región permitía a las FARC-EP realizar rápidamente acciones de reclutamiento y facilitaba actividades como incendios de vehículos, retenes ilegales y secuestros para luego resguardarse en las montañas limítrofes del Cauca.

**Mapa No. 3. Ubicación de la jurisdicción del BIARG**





**Mapa No. 4. Ubicación de la jurisdicción del BIHVG**



#### **B.4. El despliegue del Bloque Sur de las FARC-EP en el Putumayo**

35. Las actividades de las FARC-EP en el sur y centro del departamento estuvieron a cargo del Bloque Sur, al que desde la VIII Conferencia Nacional Guerrillera (CNG) en 1993 se le asignaron los departamentos de Putumayo, Nariño, Cauca, Caquetá y Amazonas como área de influencia.

36. Dentro de los objetivos trazados para el Bloque por la organización guerrillera se encontraban: aislar a Caquetá y Putumayo del resto del país y ejercer control sobre ejes viales como Mocoa-Villagarzón-Florencia, Florencia-Florencia; Pasto-Ipiales y San Francisco-Mocoa, además de:

“(…) favorecer el Plan Estratégico de la organización para la “toma del poder”, propósito trazado en la VIII Conferencia Nacional Guerrillera, crear las condiciones político-militares para ejercer dominio sobre los departamentos del Putumayo y El Caquetá, el mantenimiento del dominio de territorios colindantes en las

fronteras con Ecuador, Perú y Brasil, así como el control del comercio de coca como fuente de las finanzas de las FARC-EP.”<sup>16</sup>

37. En el periodo comprendido entre la VIII CNG y el inicio de la implementación de la Política de Seguridad Democrática (PSD) realizada entre los años 1993 y 2002, el Bloque Sur de las FARC-EP se concentró en fortalecerse mediante el aumento del número de integrantes, el afianzamiento de las milicias y la apropiación de corredores de movilidad. Este proceso culminó en los años de establecimiento de la Zona de Distensión, cuando el Bloque llegó a presentar su mayor crecimiento, evidenciado en el Putumayo mediante el aumento de Frentes y Columnas presentes.

38. A continuación se presenta un mapa con la ubicación aproximada de los campamentos del Bloque Sur en el departamento del Putumayo así como en la Zona de Distensión durante su etapa de expansión antes del 2002:

**Mapa No. 5. Ubicación aproximada de los campamentos del Bloque Sur de las FARC-EP en el departamento del Putumayo antes del año 2002**



39. Según la Sala de Reconocimiento, durante los 10 años de mayor despliegue del Bloque Sur, en Putumayo llegaron a tener asiento 5 de sus estructuras, entre Frentes y Columnas Móviles: los Frentes 2, 49 y 15, así como las Columnas

<sup>16</sup> Jurisdicción Especial para la Paz. Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad “Contextualización del Bloque Sur de las extintas FARC-EP”. Documento preliminar.

Móviles Rigoberto Lozada y Variel Urriela. Además, en los departamentos limítrofes se ubicaban otras columnas pertenecientes al Bloque, creando un importante dispositivo de guerra alrededor del centro y sur del departamento.

40. Durante el periodo previo a la creación de la ZD, las FARC-EP actuaron en casi la totalidad de los municipios del sur del Putumayo mediante los Frentes 15 y 49, los cuales operaron en veredas de los municipios de Puerto Guzmán, Puerto Asís, Puerto Caicedo y Valle del Guamuez<sup>17</sup>. Por otro lado, el Frente 2 de las FARC-EP se ubicaba en otros municipios del departamento, San Francisco y Mocoa.

41. Este dispositivo descrito, que se encontraba relativamente consolidado, se deterioró desde 2002, cuando la ofensiva conducida por las Fuerzas Militares redujo significativamente la capacidad de las estructuras adscritas al Bloque Sur y, por tanto, las ubicadas en el Putumayo. Así lo ha determinado la Sala de Reconocimiento, que explicó que entre 2003 y 2010 se redujo “su fuerza en armas y territorio”, lo que se reflejó:

[...] en el hecho, que perdió hasta tres quintas partes de su pie de fuerza por acciones militares o desmovilizaciones. A partir de esto, el BSUR redefinió sus estrategias en las que se establecieron pequeñas concentraciones en su estructura. La baja de varios comandantes y unidades del BSUR, fue determinante en el declive del Bloque, pues ello implicó el cambio continuo de mandos por guerrilleros con poca trayectoria o sin capacidades para liderar las estructuras administrativas y militares. Esto, desembocó en la pérdida de su personal en combate, así como en el incremento de las desmovilizaciones<sup>18</sup>.

42. De forma coincidente, la Sala de Reconocimiento, mediante las versiones individuales y colectivas entregadas por integrantes de las FARC-EP, ha podido dar cuenta de ese proceso de deterioro (aunque con matices) de la fortaleza de las FARC-EP en Putumayo entre 2002 y 2009. Por ejemplo, el Frente 15, que los comparecientes ubicaron inicialmente actuando en 4 municipios, fue reportado como desactivado en 2003 y, según la FGN, en 2005 pasó a ser la Compañía Móvil Toroyaco, con incidencia en los municipios caqueteños de Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán<sup>19</sup>. Sin embargo, en 2008 la Compañía Móvil Mario Moreno intentó recuperar el área de influencia que tuvo el Frente 15 antes de su

<sup>17</sup>Ibidem. Pg. 13.

<sup>18</sup>Ibidem.

<sup>19</sup> Ibidem. Pg. 40.



desaparición<sup>20</sup>. Por el contrario, el Frente 2 sobrevivió a la ofensiva militar del Estado, manteniéndose activo hasta el momento en que se firmó el Acuerdo de Paz de la Habana<sup>21</sup>.

43. Esta disminución de las estructuras del Bloque Sur en el Putumayo también se evidencia en el análisis de esta Sala de Justicia, según el cual el Bloque Sur era en 2002 la segunda estructura con mayor número de hombres y mujeres en armas (unos 2.300)<sup>22</sup>; por su parte, trabajos académicos sostienen que, para ese mismo año, era la tercera más extensa, contando con 2.150 hombres y mujeres armados.<sup>23</sup> Lo anterior, evidencia la capacidad militar de aquella dependencia y su importancia para las FARC-EP.

44. Sin embargo, en años siguientes el número de combatientes disminuyó drásticamente hasta hacerse crítico en 2008, cuando el Ministerio de Defensa contó 1.280 efectivos en armas adscritos al Bloque<sup>24</sup>. En relación con la totalidad de miembros durante 2008, los integrantes en Putumayo representarían aproximadamente el 45% de los miembros de la estructura, una fuerza considerable teniendo en cuenta solamente el tamaño del dispositivo con el que contaba el grupo guerrillero en todo el sur del país.<sup>25</sup>

#### **B.5. La Zona de Distensión y sus efectos en el conflicto en el Putumayo**

45. Para comprender la dinámica del conflicto armado en el Putumayo durante el periodo relevante para esta decisión, es esencial considerar el establecimiento de la Zona de Distensión (ZD) entre 1998 y 2002. Esta zona abarcó cinco municipios y permitió a las FARC-EP ampliar su radio de acción hacia el departamento del Putumayo.

---

<sup>20</sup> Ibidem. Pg. 42.

<sup>21</sup> Ibidem. Pg. 43.

<sup>22</sup> Ibidem. Pg. 46.

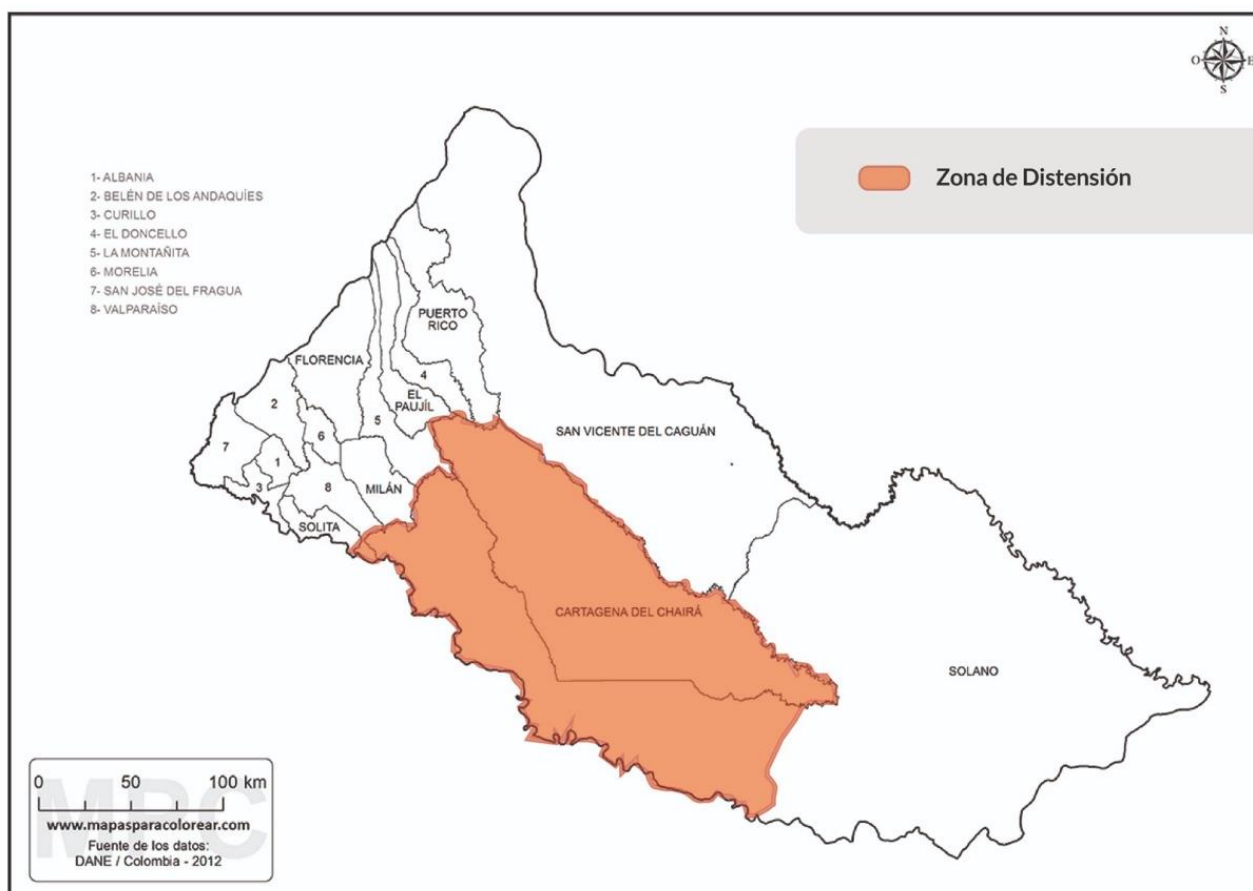
<sup>23</sup> Ibidem. Página 46.

<sup>24</sup> Ibidem. Página 120

<sup>25</sup> Ibidem. Pg. 121.



## Mapa No. 6. Ubicación de la Zona de Distensión



46. Según el PNUD, la ZD, compuesta por cuatro municipios del departamento del Caquetá y uno del Departamento del Putumayo, tuvo un impacto significativo en este último, especialmente dentro de los municipios como Puerto Guzmán y Mocoa, dado que permitió el incremento de acciones criminales realizadas por las FARC-EP, entre estas la toma de rehenes y las graves privaciones de la libertad investigados en el caso 01 de esta Jurisdicción, como se explicará en el siguiente aparte.

47. Los crímenes mencionados en el párrafo anterior se llevaron a cabo utilizando los municipios de la ZD para realizar secuestros masivos en Putumayo y mantener rehenes en la zona, dado que la misma proporcionaba refugio inmediato. En adición, las Organizaciones de derechos humanos y ONGs internacionales manifestaron en varios informes el uso indebido de la ZD por parte de las FARC-EP, consolidando territorios fronterizos del departamento del Caquetá como zonas de retaguardia y movilización de secuestrados.

48. Además, la ZD facilitó a las FARC-EP ejercer control sobre áreas estratégicas del Putumayo, permitiéndoles movilidad entre el sur del país y el Pacífico, estableciendo una línea operacional desde la retaguardia, ubicada en la ZD, hasta la costa pacífica en el departamento de Nariño; esto, con el fin de

facilitar el tráfico de pasta base de coca (PBC) y la compra de armamento o equipamiento de uso privativo de la fuerza pública.

49. Aunque el territorio del Bloque Sur se encontraba en Caquetá, Cauca y Putumayo, este último era de gran importancia estratégica. La Sala de Reconocimiento subrayó que el norte del Putumayo no era solo una zona defensiva, sino un área de disputa crucial para mantener conexiones estratégicas entre diferentes regiones del país y con el litoral pacífico en la frontera con el departamento de Nariño, justificando así el interés en controlar esta región.

#### **B.6. La crisis de las FARC-EP en el Putumayo a partir de la implementación de la Política de Seguridad Democrática**

50. El abandono progresivo del territorio del departamento de Putumayo y segmentos del departamento del Caquetá por parte de las FARC-EP desde 2002, según diversas fuentes institucionales, datos del Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH y versiones voluntarias ante la JEP, tuvo su génesis tras la implementación de la Política de Seguridad Democrática (PSD) del gobierno de quien ejercía la Presidencia para ese momento.

51. Para ahondar, en este informe de la Defensoría del Pueblo publicado en 2005, se señala que hacia finales de 2002 las FARC-EP ya habían realizado repliegues tácticos, facilitando la entrada de estructuras paramilitares del Bloque Calima de las AUC en los territorios abandonados por las FARC-EP<sup>26</sup>. También se documentó una disminución de la presencia guerrillera en los municipios de Putumayo entre 2002 y 2005; en 2002, 13 municipios tenían influencia de las FARC-EP, en 2003 se redujeron a 6, con un leve aumento en el 2005 cuando abarcaron 9 municipios.

52. El repliegue de las FARC-EP también se refleja en la disminución de algunos fenómenos macrocriminales asociados al conflicto armado como los secuestros, que disminuyeron significativamente desde 2004, sugiriendo limitaciones en las capacidades operativas de la subversión.

53. Además, la Sala de Reconocimiento de la JEP destaca que la creación de nuevos Frentes y Columnas del Bloque Sur se detuvo una vez disuelta la Zona de Distensión (ZD), marcando una diferencia significativa en la evolución de la organización guerrillera antes y después de la vigencia de dicha zona. Como

<sup>26</sup> Fiscalía General de la Nación. Informe de Policía Judicial No. 41 56530. Radicado 7335. Cuaderno 4. p. 59. Obtenido en inspección judicial. Expediente Legali Caso 03, Subcaso Putumayo

consecuencia, desde 2004, se dio una drástica reducción en los secuestros en las jurisdicciones del BIHVG, ocurriendo cuatro secuestros durante el periodo 2005-2009.

54. La reducción de secuestros fue especialmente notable en el bajo y medio Putumayo, áreas de operación del BIHVG, y la reducción de la actividad guerrillera en el Putumayo también se reflejó con una disminución sostenida de acciones armadas entre 2003 y 2009. Aunque esta reducción fue leve a nivel departamental, en la jurisdicción del BIHVG fue más significativa, por ejemplo, para el año 2005 solo se presentaron dos acciones armadas y nunca superaron las cinco después de ese año.

55. Dicha información fue corroborada por varios comparecientes que se refirieron a los repliegues territoriales de las FARC-EP, destacando que estos se intensificaron tras la intervención de la Fuerza de Tarea Hércules. El comandante del BIHVG entre 2005 y 2009, Coronel Armando Jesús Pastor López, señaló que la situación de orden público en su jurisdicción mejoró significativamente para 2006, explicando que, debido a la presión de la Fuerza de Tarea Hércules, las FARC replegaron varios frentes hacia áreas del alto Putumayo y la frontera con el departamento del Cauca como movimiento de defensa estratégica ante la avanzada de la fuerza pública, dejando solo al frente 13 en la región caqueteña de Curillo.

56. En el norte del Departamento las FARC-EP experimentaron repliegues de sus estructuras, como lo informó la Defensoría del Pueblo en septiembre de 2006, para las veredas de Yuguillo, el Valle de Sibundoy y el municipio de San Francisco; a pesar de esto, las FARC-EP mantenían una capacidad de amenaza a través de milicianos. La avanzada del Ejército Nacional en 2007, en territorios considerados santuarios de las FARC-EP, llevó a esta guerrilla a endurecer sus mecanismos de intervención e intensificar sus acciones en medio de la población civil para mantener su autoridad de facto sobre el territorio.

57. La Defensoría<sup>27</sup> también indicó cambios en las estrategias subversivas a nivel departamental, aunque hubo mejoras en el orden público, la amenaza de las FARC-EP se había modificado. En agosto de 2007 se mantenía operatividad pese a los repliegues tácticos, con capacidad para amenazar a políticos y desviar recursos municipales. Desde 2002, su retroceso a zonas seguras implicó el abandono de grandes núcleos de población, el acantonamiento en zonas rurales,

<sup>27</sup> Defensoría del Pueblo. "Informe de Riesgo No. 023-07 A.I. 17 de septiembre de 2007". Página 2. Los informes de defensoría para los años 2006 y 2007 no mencionan el fenómeno de las MIPBC y solo en informe de abril de 2009 mencionan homicidios selectivos atribuidos a la fuerza pública.

el incremento de milicianos en áreas urbanas y la realización de pequeñas acciones de hostigamiento contra la fuerza pública.

58. La Fiscalía General de la Nación<sup>28</sup>, mediante un trabajo de Policía Judicial, evidenció esta situación de relativo apaciguamiento en el Departamento, señalando que las tropas del Frente 61 se encontraban reducidas y usaban tácticas de "asedio diluido" con pequeñas unidades en movimiento para llevar a la tropa a "áreas preparadas de aniquilamiento y de difícil apoyo aéreo".

59. Además, se observa la restringida ubicación de las estructuras guerrilleras en el Putumayo en documentos operacionales, como en el Anexo B del Plan de Consolidación para las elecciones regionales de octubre de 2007, que detallaba la ubicación de los Frentes 13 y 61 de la siguiente manera:

Gráfica 7. Organización de los Frentes 13 y 61 de las FARC-EP y su ubicación

Frente	Comisión	Ubicación
13	Comisión Vicente Marín	Parque Natural Nacional Cueva de los Guácharos, San Francisco, Valle de Sibundoy.
	Comisión Antonio José de Sucre	Yunguillo, San Carlos y El Descanso (Putumayo).
	Comisión Martín Estrada	Condagua (Cauca), Alvernia (Cauca) y Puerto Limón (Putumayo)
61	Compañía William Tovar Ríos	Sabaleta y la Fragueta (Caquetá)
	Compañía William Aguirre Martínez	Acevedo, Palestina, Bruselas (Huila)
	Compañía Jesús Carvajal Morales	Belén, San José de los Andaquies y San José de la Fragua. (Caquetá)

Fuente: Elaboración propia a partir de Anexo B del Plan de Consolidación de 2007.

<sup>28</sup>Fiscalía General de la Nación. Informe de Policía Judicial No. 41 56720. Radicado 7335. Cuaderno 3. p. 59. Obtenido en inspección judicial. Expediente Legali Caso 03, Subcaso Putumayo



60. Como se evidencia en el cuadro anterior, además de los diversos reportes de inteligencia militar y versiones voluntarias de soldados ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la presencia y accionar de las FARC-EP en el departamento de Putumayo en el periodo 2001-2007 se distribuía de la siguiente manera; el Frente 13 estaba replegado hacia el departamento del Cauca, desde donde enviaba pequeñas comisiones hacia Putumayo, por su parte, el Frente 61 no tenía presencia referenciada en el Bajo ni en el Medio Putumayo, ubicándose en zonas del Alto Putumayo.

61. Las VV de soldados pertenecientes al BIHVG ante la JEP coincidieron en señalar un bajo accionar de las FARC-EP en los municipios de Mocoa, Puerto Guzmán y Villagarzón después de 2005. De igual forma, otros y otras comparecientes durante sus VV hicieron referencia a la reducción de los combates o capturas incluso antes de 2005, algunos y algunas más indicaron que las probabilidades de entrar en combate con las FARC-EP en el centro y sur del departamento se habían reducido considerablemente para el año 2006.

#### **B.7. Ambiente operacional en el departamento del Putumayo en las áreas de incidencia del Batallón de Infantería Héroes del Valle del Guamuez (BIHVG) durante el periodo 2005-2009**

62. Este apartado expone las visiones de los militares sobre el ambiente operacional predominante en las jurisdicciones de las unidades militares aquí analizadas, esto con el fin de contrastarlas con las dinámicas del conflicto conocidas para el periodo de interés de la Sala y analizar si los resultados operacionales que reportaban eran coherentes con lo que le manifestaron en sus Versiones Voluntarias a la Magistratura.

63. Como se verá eventualmente, una porción significativa de los comparecientes -sobre todo aquellos ubicados en la base de la jerarquía y el mando militar- describieron un ambiente operacional de sus jurisdicciones en el que existían riesgos para la tropa localizados en algunas veredas y relacionados con formas de operar particulares de las FARC-EP. Sin embargo, fue generalizada la percepción de que las amenazas a su seguridad se encontraban muy reducidas.

64. La disminución de estos riesgos es coincidente con lo que se halló en múltiples fuentes sobre de la situación de las FARC-EP en el centro y sur del departamento entre 2005 y 2009, los y las comparecientes frecuentemente relacionaron esta situación con los asesinatos, desapariciones forzadas y tortura en los que participaron, puesto que las posibilidades de entablar combates eran

bajas pero a la vez existían presiones por resultados operacionales provenientes de algunos de los comandantes de los batallones.

65. Estas particularidades del ambiente operacional en las jurisdicciones fueron descritas, casi siempre, de forma distinta por los altos mandos de los batallones en sus Versiones Voluntarias; quienes sostuvieron que el mismo era de extremo cuidado ya que las amenazas contra la seguridad de las tropas y la población civil eran constantes.

66. Aunque esta parte del texto se concentra en el periodo entre 2005 y 2009, fue necesario incluir opiniones de los comparecientes en torno a procesos o dinámicas que se dieron en años anteriores pero modificaron el contexto departamental. Este fue el caso de manifestaciones en torno a la importancia de la ZD para entender los sucesos en el Putumayo en años posteriores a su final o respecto a cambios en el conflicto armado que producto de la PSD.

67. Los dos apartados que componen este subcapítulo están organizados de manera diferente, intentando responder a lógicas que se identificaron en las Versiones Voluntarias. De esta manera, la comandancia del Batallón estudiado en el periodo que se analiza en esta decisión fue conformada por Armando Jesús Pastor López y la señora María Bertilda Yanacona Olaya, según las VV y los elementos contrastados.

#### **B.8. Ambiente operacional del BIHVG según los comparecientes ante la JEP**

68. Durante el periodo comprendido entre 2004 y 2009, la jurisdicción de del Batallón de Infantería Héroes del Valle del Guamuez (BIHVG) del Ejército Nacional de Colombia enfrentó múltiples desafíos y amenazas en el departamento del Putumayo. Los comparecientes que pertenecieron a las compañías del BIHVG brindaron información sobre el ambiente operacional de manera cronológica, destacando la creación de la Compañía de Apoyo de Armas.

69. A pesar de que todas las personas comparecientes señalaron las dificultades presentes en la jurisdicción, solo el señor Armando Jesús Pastor López subrayó mejoras significativas en el orden público y cambios en la presencia y capacidad de las FARC-EP para actuar en el centro del Putumayo y la capital departamental. Estas mejoras probablemente se dieron en los años iniciales del periodo de interés (2004-2006) y se mantuvieron en los periodos siguientes.



70. Los altos mandos se concentraron en la situación de puntos específicos de la jurisdicción, como el sur oriente del departamento, la zona de actuación de la Compañía de Apoyo de Armas, en límites con Caquetá, y el centro-oriente en límites con el departamento del Cauca. Así mismo, mencionaron significativamente menos la situación del centro y el sur del Putumayo, donde los Frentes 13 y 61 eran preocupación del BIHVG.

71. Por el contrario, varios comparecientes pertenecientes a las Compañías del BIHVG expresaron que la atención de las comandancias del Batallón parecía estar puesta en zonas del Alto-Putumayo. Lo verdaderamente llamativo en este punto es que en las VV no se escuchó que el énfasis de las operaciones militares o el esfuerzo principal con ellas se concentrara en las zonas del Medio-Putumayo, donde sí se presentaba el mayor número de reportes de muertes en combate.

#### **B.9. Ambiente operacional descrito por el Coronel Armando Jesús Pastor López**

72. La situación de orden público y las acciones de las FARC-EP en el departamento de Putumayo entre 2004 y 2010, periodo en el que el Coronel Armando Jesús Pastor López estuvo al mando del BIHVG del Ejército, se basa en las versiones voluntarias de la Teniente Coronel María Bertilda Yanacona Olaya.

73. A su llegada en 2004, al señor Pastor López se le informó que el Putumayo enfrentaba una situación crítica de secuestro, extorsión y otras acciones criminales por parte de grupos armados ilegales que tenían paralizada la economía y vida social del departamento. Aunque la Zona de Distensión había sido derogada, las FARC-EP mantenían influencia en el departamento, especialmente en las zonas limítrofes del Medio-Putumayo y en los antiguos municipios de la zona desmilitarizada del Caquetá, haciendo énfasis en que Florencia se convirtió en un centro de gravedad para la logística guerrillera.

74. La geografía del Putumayo, con un valle central angosto flanqueado por las cordilleras, permitía a las FARC-EP atacar poblaciones y vías, y replegarse rápidamente a sus áreas base en las montañas, por lo cual el Ejército se dedicaba principalmente a contener a la guerrilla para evitar que llegara a Mocoa y otros cascos urbanos. Desde su llegada a la comandancia del BIHVG, el Coronel Armando Jesús Pastor López decidió cambiar la estrategia, pasando de una postura defensiva a una ofensiva, atacando las áreas base guerrilleras en el Medio y Bajo Putumayo, especialmente las de la Columna Móvil Rigoberto Lozada; esto implicaba un mayor esfuerzo y empeño en combate por parte de las tropas.

75. Durante este periodo, las FARC-EP establecieron campamentos en las zonas altas al norte del Putumayo en límites con Cauca y Caquetá, cerca de parques nacionales naturales como Puracé y El Guácharo, así como al sur en el municipio de Curillo en el departamento del Caquetá.

**Mapa No. 8. Áreas campamentarias de las FARC-EP entre 2004 y 2006**



76. Durante su tiempo del Batallón de Infantería Héroes del Valle del Guamuez ubicado en Putumayo entre 2005 y 2009, el señor Pastor López impulsó importantes cambios para mejorar la situación de orden público en Mocoa, que enfrentaba serios desafíos por las acciones de grupos armados ilegales como las FARC-EP. Una de las iniciativas clave fue la creación de un grupo interinstitucional que reunía a la Policía, la Fiscalía, el DAS y otras entidades, con el fin de coordinar esfuerzos para judicializar efectivamente a los miembros de la guerrilla y demás organizaciones delincuenciales.

77. Este comité respondía a presiones políticas nacionales y regionales que exigían mayor eficacia en la lucha contra estos grupos. Además, se establecieron espacios de diálogo con la población civil, especialmente con sectores económicos, como el petrolero y energético, para atender sus necesidades de seguridad. A pesar de estos avances, el Coronel Armando Jesús Pastor López consideraba que aún era necesario un aumento significativo del pie de fuerza para enfrentar las amenazas persistentes, por ello, a inicios de 2006 propuso a los altos

mandos la creación de una Compañía de Armas de Apoyo que permitiera ubicar compañías en una zona por la que se movía la guerrilla hacia Putumayo.

78. Con la autorización del comandante del Ejército, en 2007 se creó una Compañía de Armas de Apoyo para cubrir esta área y complementar la estrategia del BIHVG, fortaleciendo la lucha contra las FARC-EP en una zona crucial en los límites entre Putumayo y Caquetá, a la altura de Puerto Limón.

79. La Compañía de Apoyo de Armas tenía como objetivo ubicar tropas en un área por la que se movía la guerrilla hacia Putumayo y que no estaba siendo impactada de manera efectiva por la operatividad militar. Aunque implicó un aumento de la responsabilidad jurisdiccional y desafíos logísticos para el BIHVG, esta resultó fundamental para el repliegue de algunas estructuras de la Columna Móvil Rigoberto Lozada (CMRL) de las FARC-EP.

80. Por medio de la nueva unidad, el Ejército pudo atacar las áreas base de la guerrilla en la cordillera oriental y las zonas fronterizas entre Putumayo y Caquetá, destruyendo y ocupando numerosos campamentos. Esto generó un cambio en la dinámica del conflicto, alejando a la CMRL y reduciendo los secuestros en la región.

81. El BIHVG diseñó operaciones militares para contrarrestar la acción de las FARC-EP en diferentes zonas de Putumayo, como Fenicia en el norte (Frente 17), Mano de Hierro en el área de la Compañía de Apoyo de Armas en Puerto Limón, Alfa en límites con Caquetá (Frente 17), Troya en el Alto y Medio Putumayo (Frentes 13 y 61) y Libertad para la seguridad vial del departamento.

82. Durante la comandancia del coronel Pastor López en el BIHVG, entre 2005 y 2009, se implementaron cambios significativos en la estrategia militar para enfrentar a las FARC-EP en el departamento del Putumayo. El objetivo principal era romper los vínculos entre la guerrilla y la delincuencia común, erosionando las finanzas de las FARC-EP y llevando las operaciones militares hasta sus campamentos en zonas antes inaccesibles. Se diseñaron operaciones específicas como Alfa, Fenicia, Mano de Hierro, Luminoso y Libertad, cada una enfocada en diferentes aspectos como el control vial, el bloqueo a frentes guerrilleros y la persecución a la columna móvil Rigoberto Lozada. Además de las acciones militares, se fortalecieron las acciones jurídicas para judicializar a miembros de los frentes guerrilleros identificados.



83. Un análisis espacial realizado por la Jurisdicción Especial para la Paz reveló que las áreas de influencia de los campamentos de las FARC-EP se ubicaban estratégicamente en las partes altas de las cordilleras central y oriental, cerca de parques nacionales naturales como la Reserva Natural La Cristalina y El Guácharo, controlando vías y ejes de movilidad hacia departamentos vecinos como Cauca, Nariño y Caquetá.

84. Por lo anterior, se logró una mejoría notable en la situación de seguridad del departamento. Los secuestros se redujeron significativamente y se hizo más difícil el traslado de víctimas hacia la cordillera Oriental. La creación de la Compañía de Armas de Apoyo y la Fuerza de Tarea Hércules también contribuyeron a estabilizar el predominio del Ejército en la región.

85. Sin embargo hubo algunas dificultades, como el asesinato del alcalde del municipio de San Francisco, Uriel Aroca Sigindo, por parte de la columna móvil Rigoberto Lozada en febrero de 2006. A pesar de esto, el alto mando reconoció mejoras en el control territorial, utilizando un sistema de convenciones con colores para evaluar la situación de orden público. Es por la persistencia de fenómenos delincuenciales y la sensación de inseguridad en general que se destacaron los avances en el control militar por parte del Ejército Nacional. También, los oficiales mencionaron los repliegues de las estructuras guerrilleras hacia otros departamentos debido a la ofensiva militar.

86. En cuanto a la relación entre la guerrilla y la delincuencia común, se identificaron dos formas de vínculo: (i) delincuentes haciéndose pasar por guerrilleros para intimidar y (ii) la contratación de servicios delictivos por parte de las FARC-EP. Además, se mencionó la dificultad para diferenciar entre acciones de milicias y de organizaciones delincuenciales.

#### **B.10. Ambiente operacional descrito por la TC María Bertilda Yanacona Olaya**

87. Durante la comandancia del coronel Armando Jesús Pastor López entre 2003 y 2009, se evidenció un aumento significativo en los asesinatos y desapariciones forzadas atribuidos a integrantes del Batallón objeto de este auto, a pesar de las afirmaciones de la TC María Bertilda Yanacona Olaya sobre mejoras en la posición del Ejército Nacional al final de su periodo.

88. La Señora María Bertilda Yanacona describió un contexto desafiante, con un vasto territorio que abarcaba Putumayo y zonas limítrofes de Cauca y Caquetá, incluyendo 4 municipios y casi 2000 km<sup>2</sup>, donde debía proteger puntos críticos como peajes e infraestructura tanto vial como energética. Durante este

periodo, se observó un aumento de campamentos de las FARC-EP en la cordillera oriental, específicamente en las partes altas de los municipios de San Francisco, Sibundoy y Santiago, límites con Nariño, y en la zona del Medio Putumayo en el municipio de Puerto Limón, en límites con Caquetá.

89. Según la Teniente Coronel María Bertilda Yanacona, varias estructuras de las FARC-EP (Frentes 17, 25 del Bloque Oriental, 13, 61 y la CMRL del Bloque Sur, y la Columna Móvil Rigoberto Lozada (CMRL). llevaban a cabo un amplio espectro de acciones que incluían ataques contra infraestructura y bienes civiles, secuestros, extorsiones y actividades de control territorial, afectando gravemente a la población civil, resaltando que la similitud en las acciones de las diferentes estructuras guerrilleras dificultaba su diferenciación.

90. Según la TC María Bertilda Yanacona, quien asumió el rol de comandante de operaciones de la Compañía de Armas de Apoyo Anochecer, éste correspondía al crecimiento de la amenaza representada por las FARC-EP, especialmente por la Columna Móvil Rigoberto Lozada.

91. En el BIHVG existían tres compañías, la primera de estas, la Compañía de Armas de Apoyo Anochecer, desplegada en una zona estratégica y desafiante debido a la presencia de la CMRL, controlaba corredores de movilidad y el acceso hacia Mocoa. Otras de unidades, es la Compañía Amanecer, ubicada en Puerto Limón, y por último, la Compañía Ocaso de Fusileros, operaban en áreas montañosas y de difícil acceso en el norte del departamento.

92. El BIHVG tenía entre sus objetivos la neutralización de la CMRL, para ese propósito adelantaba trabajo de inteligencia y judicialización, realizado mediante la recopilación de información sobre las estructuras armadas y las redes de apoyo de la CMRL, utilizando bases de datos y computadores para identificar a las personas. Las capturas se efectuaban en retenes ubicados en puntos estratégicos, como Yunguillo y Condagua, gracias a la información proporcionada por el grupo de apoyo y los mecanismos de judicialización.

93. Este modo de operación se replicó a nivel de las Compañías de Fusileros Amanecer y Ocaso, lo que pudo influir en el encubrimiento de operaciones irregulares y combates simulados. Además, desde la comandancia de la BIHVG se dispuso que el esfuerzo principal de inteligencia se dirigiera al norte del Putumayo para evitar ataques terroristas en Mocoa y garantizar la seguridad en las carreteras del departamento. Sin embargo, se observó una mayor cantidad de combates y resultados operacionales en la jurisdicción del Batallón de Infantería

Héroes del Valle del Guamuez, ubicado en el medio Putumayo, donde las estructuras de las FARC-EP se concentraban en la obtención de recursos económicos, lo que exponía más a sus integrantes y favorecía los combates de encuentro.

94. Según las versiones voluntarias de varios Suboficiales, la comandancia del BIHVG dispuso concentrar los esfuerzos de inteligencia y operativos en el Medio Putumayo con el fin de evitar ataques y secuestros masivos en Mocoa, la capital, como los ocurridos a inicios de siglo. Además, se buscaba garantizar la seguridad en las principales vías del departamento.

95. Los avances en la situación de seguridad se vieron en el departamento del Putumayo a partir de la implementación de la PSD, por ejemplo, se logró estabilizar la extorsión y no se presentaron secuestros masivos, asesinatos de alcaldes o concejales durante el periodo de la TC María Bertilda Yanacona. Además, se logró el control de la vía principal entre Mocoa y Pasto, evitando acciones como quema de vehículos y secuestros.

96. Según los comparecientes vinculados a estas comandancias, existían dificultades para distinguir entre las actuaciones de la guerrilla FARC-EP y las de grupos delincuenciales comunes, especialmente en delitos como la extorsión y el secuestro. Incluso se mencionó una colaboración entre las FARC-EP y actores delincuenciales en un atentado contra el entonces presidente de Colombia.

97. Sin embargo, para 2006, según la Teniente Coronel María Bertilda Yanacona, en la documentación militar todos los grupos armados ilegales eran considerados equivalentes desde el punto de vista operativo, sin diferenciar entre guerrilla y delincuencia común. Las organizaciones delincuenciales se hicieron de interés para el Estado Mayor comandado por el Coronel Pastor López, reportando su presencia en zonas con sectores productivos del Medio Putumayo, lo cual generó demandas de intervención del Ejército por parte de autoridades civiles.

98. A pesar de reportes de mejoras en el control territorial por parte del Ejército y repliegue de estructuras guerrilleras, la TC María Bertilda Yanacona insistió en que las amenazas de la guerrilla eran continuas y no permitían menor tensión en el dispositivo militar. Esta percepción de un ambiente operacional tenso y sin cambios significativos pudo haber sido funcional a la presentación de "resultados operacionales" falsos, puesto que los asesinatos y desapariciones forzadas cometidos por integrantes del Ejército se dispararon durante esta comandancia y se mantuvieron hasta 2009.



### **B.11. Ubicación de los campamentos de las FARC-EP, operatividad mediante milicias y denuncias de violaciones de DD. HH. en la jurisdicción de la BIHVG**

99. Este apartado presenta una de las particularidades del ambiente operacional del Putumayo que ha sido mencionada repetidamente en las VV y que permite mostrar las características de la operatividad de las FARC-EP en el departamento durante los años de interés de la Sala. Se analizará entonces la información provista por los comparecientes respecto de: (i) la ubicación de los campamentos de las FARC-EP en la jurisdicción del Batallón de Infantería Héroes del Valle del Guamuez y (ii) en la forma de operar del grupo subversivo y los militares.

### **B.12. Los campamentos de las FARC-EP, operatividad mediante milicias y denuncias de violaciones de DDHH en la jurisdicción de la BIHVG**

100. Según relatan los comparecientes, históricamente los campamentos de las FARC-EP en Putumayo han estado ubicados en zonas de difícil acceso, particularmente en la parte alta de la cordillera oriental. De acuerdo con el Comandante del BIHVG en su VV, las áreas campamentarias de las FARC-EP estaban *en zonas periféricas especialmente*, en sus palabras:

Le puedo decir que es en todo el departamento del Putumayo desde el norte hasta el sur, en el norte habían elementos de columnas de las FARC que interactuaban en el departamento del Caquetá o en el Cauca, (...) yo en este momento no le puedo precisar porque no era mi jurisdicción, pero sí estaba el departamento del Putumayo desde luego afectado por la acción de las FARC a lo largo del departamento, a lo ancho del departamento y al interior del departamento, esa era más o menos la situación que se presentaba en los años 98 y 99, que se vino de alguna manera a volver más crítica cuando se crea la zona de distensión<sup>29</sup>.

101. Además, indicó que desde los años 90 se sabía que los campamentos se ubicaban en la llamada “cresta militar”, esto es, en la parte más alta del macizo colombiano entre los departamentos de Caquetá y Putumayo. Sin embargo, después especificó que estas zonas se ubicaban en Caquetá, aunque en cercanía con Putumayo: “(...) esas áreas quedaban siempre en el sector de Caquetá, en el sector de San José de Fragüa”.

<sup>29</sup> Jurisdicción Especial para la Paz. Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Versión Voluntaria de Armado Jesús Pastor López. Expediente Legalí Caso 03, Subcaso Putumayo

**B.13. La estrategia guerrillera de ubicar los campamentos en partes altas del Putumayo se mantuvo una vez se puso fin a la ZD y durante el periodo de interés de este Subcaso**

102. A ello se refirieron integrantes del BIHVG que fueron escuchados por la Jurisdicción Especial para la Paz. Así, el Coronel Pastor López afirmó que, cuando recibió el Batallón en 2003, las áreas base de la guerrilla estaban en la parte alta en puntos de difícil acceso, de manera particular se refirió a la recuperación que se hizo de cierto sector de la cordillera oriental, hacia San Vicente del Caguán, gracias a la creación del Comando Operativo No. 5.

103. Es de vital importancia para esta Sala, como lo señalaron los y las comparecientes, establecer que las FARC-EP eran “campamentarias”; en segundo lugar, se señaló que en Putumayo **las bases de las FARC-EP estaban en el sur del departamento, es decir fuera de la Jurisdicción del BIHVG**; finalmente, se afirmó que los campamentos del Frente 13 estaban en los límites con el departamento del Caquetá, **en el Parque Nacional Cueva de los Guácharos** y que los de la CMPM estaban ubicados en Caquetá, por lo que la misión de la Brigada era evitar que cruzaran hacia el Putumayo.

104. En contraste, resulta llamativo que la Teniente Coronel María Bertilda Yanacona Olaya, afirmara tajantemente en su VV que no supo de la presencia de campamentos en la jurisdicción de la Brigada; desde su punto de vista, tras el fin de la Zona de Distensión, la guerrilla se vio obligada a movilizarse en grupos pequeños y evitar asentarse en posiciones fijas. Al respecto señaló:

Magistratura: Pero cuando usted dice que había presencia ¿significa que había campamentos? ¿que había milicianos? ¿dónde están unos y donde estaban otros?

Compareciente: De campamento[s] nunca tuve información que hubiesen de la guerrilla.

Magistratura: Pero, ¿entonces no había campamentos como tal de las FARC en el Putumayo en ese momento?.

Compareciente: **No señor yo no tuve información de campamentos puntuales en el Putumayo (...)** la información que teníamos de los grupos armados y su movimiento era que ellos, por obvias razones, no se quedaban en una sola parte porque era fácil que el Estado los identificara y generara operaciones directas hacia ese punto, los grupos armados siempre permanecen en el movimiento. Por eso le decía yo al doctor en el comienzo que durante el tiempo que estuve ahí no tuve información donde había un campamento específico donde llevaban por decir algo y llevaban

más de 3 cuatro días concentrados en un grupo armado en determinado... no digamos a tener esa información siempre la información era que los grupos en pequeñas cantidades se movían por la jurisdicción grupos de 5 o 10 máximo de la información que tenía pero estaban en constante movimiento de campamento como tal como de pronto lo llegaron a tener en la zona de distensión no tuve esa información<sup>30</sup>

105. La Defensoría del Pueblo también indicó que se presentaron cambios en las estrategias subversivas a nivel departamental; de esta manera, consideraba que, aunque existían mejoras en la situación de orden público departamental, la amenaza que representaban las FARC-EP había sufrido modificaciones. Según informe de riesgo de agosto de 2006, este grupo mantenía cierto nivel de operatividad a pesar de los repliegues tácticos, entre otras cosas, la guerrilla aún contaba con capacidad para amenazar a políticos y desviar los recursos municipales a sus arcas; a pesar de esto, su retroceso hacia zonas seguras desde 2002 sí había implicado modificaciones en su accionar como el abandono:

“(...) de los principales núcleos de población, **el acantonamiento de sus combatientes en las zonas rurales, el incremento de milicianos en las áreas urbanas** y entrañó que las FARC dejaran de realizar grandes operaciones y ataques indiscriminados contra las poblaciones, como sucedió una vez se presentó la ruptura del proceso de paz y el levantamiento de la zona de distensión en el Caguán y adoptaran el método de realizar pequeñas acciones de hostigamientos contra la Fuerza Pública, atentados contra dirigentes políticos y servidores públicos simpatizantes de las políticas del gobierno de la época y **que en la actual [sic] confrontación armada esté desarrollando sus operaciones a través de unidades medianas y pequeñas de combatientes, sobre todo empleando francotiradores.** (Negrillas fuera del texto original)

#### **B.14. La relación entre la ubicación de los campamentos de las FARC-EP y las formas de operar de la guerrilla y el Ejército Nacional**

<sup>30</sup> Jurisdicción Especial para la Paz. Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Versión Voluntaria de Bertilda Yanacona Olaya. Expediente Legali Caso 03, Subcaso Putumayo

106. De acuerdo con los comparecientes, la localización de los campamentos de las FARC-EP determinó la forma de actuar de la guerrilla y la reacción de los militares, ya que la ubicación de los mismos tenía una estrecha relación con su forma de operar en el Putumayo. Así, buena parte de los comparecientes señalan que el grupo subversivo usaba al departamento como corredor de movilidad y trabajaba en equipos pequeños que incursionaban en su zona central a realizar actividades puntuales o sirviéndose de alianzas con la delincuencia común. Es decir, en el modo de operar de la guerrilla era atípico ver a los subversivos uniformados.

107. La guerrilla usaba el Putumayo como corredor para que grupos pequeños, llamados Unidades Tácticas de Combate, movieran armas y drogas desde el Caquetá hacia el Pacífico por Nariño o para que se ocuparan de las finanzas por medio de estrategias de extorsión y secuestro. En el mismo sentido, los ataques se ejecutaban rápidamente y la retirada se hacía de manera inmediata hacia el macizo colombiano, toda vez que la zona central era muy despejada, de escasa vegetación, en la que resultaría más fácil ubicar a los guerrilleros.

108. Otra manera en que las FARC-EP operaban era la “tercerización” del trabajo de la guerrilla, es decir-“(…) se juntaban milicias con grupos de bandas (…) se dio mucho el contrato de delincuencia común con FARC en esa época”, razón por la cual en el territorio del Putumayo no se tenía una distinción muy clara entre este grupo armado y lo que se denominaba delincuencia común.

109. Otro de los elementos demostrados en las VV de los comparecientes, fue que en la jurisdicción de la BIVHG no hubo campamentos ni tropas numerosas de las FARC-EP. Usualmente coincidieron en afirmar que estos lugares de permanencia de tropas guerrilleras estaban en zonas limítrofes del departamento y que esto implicó una forma de accionar particular por parte de la guerrilla, que tuvo implicaciones en la operatividad militar y en el tipo de reporte de operaciones que se presentaba.

110. Ahora bien, en cuanto a la localización de los campamentos de las FARC-EP en el Putumayo y su relación con la estrategia militar en la región, que las áreas campamentarias estuvieran en los límites departamentales significó que las operaciones ofensivas respecto de estos correspondían a la División o la Brigada.

111. Es importante resaltar que ninguno de los comandantes de batallón escuchados en VV se refirió al diseño de operaciones ofensivas para atacar específicamente áreas campamentarias o a grupos grandes de la guerrilla, y sólo



algunos de ellos dan cuenta de operaciones que, con fundamento en informaciones puntuales, permitieron ubicar campamentos abandonados por el grupo insurgente.

112. De esta manera, pareciera que las operatividades del BIHVG no buscaban propinar grandes golpes, que habrían significado internarse en zonas apartadas y montañosas donde se concentraba la mayor presencia de la guerrilla, sino mantener el control en las zonas planas y las estribaciones de las cordilleras, donde era muy baja la posibilidad de producir resultados operacionales mediante combates reales en contra de las estructuras guerrilleras, lo cual tuvo consecuencias en el diseño de las operaciones y su asignación a los Batallones, ya que se iniciaron a reportar muertes en combate donde había baja presencia de las FARC-EP.

113. De acuerdo con el estudio topográfico del territorio se pudo identificar que las zonas campamentarias superaban los 1.200 metros de altura, mientras que alrededor del 90% de las muertes cuestionadas cometidas por integrantes del BIVHG para el periodo 2005-2009 se concentra en la parte de ladera, que no supera los 500 metros de altura.

114. Este análisis, que permite contrastar la información aportada por los comparecientes, los informes de víctimas y de instituciones estatales, así como las investigaciones académicas sobre la materia, permite afirmar que existen bases suficientes para entender que en los batallones no se prefirió diseñar y ejecutar misiones tácticas ofensivas en zonas campamentarias, ubicadas en zonas montañosas elevadas, enmarcadas en un verdadero contexto de confrontaciones con grupos armados en el marco del DIH. Por el contrario, según se infiere de la información que se obtiene del acervo probatorio, el trabajo de las unidades tácticas se concentró en combatir a supuestas milicias y delincuencia común que hacían presencia en el departamento, con base en un marco normativo inadecuado en materia de uso de la fuerza letal.

### **C. HECHOS DETERMINADOS, CASOS ILUSTRATIVOS Y PATRONES DE MACROCRIMINALIDAD**

115. En esta sección la Sala de Reconocimiento describe las características de los hechos en los que se presentaron asesinatos y desapariciones forzadas de integrantes de la población civil por parte del Batallón de Infantería Héroes del Valle del Guamuez (BIHVG).

116. La Sala ha encontrado que la forma como ocurrieron los hechos victimizantes y las características del ataque a la población civil obedecieron a una confluencia de factores. El afán de obtener beneficios personales y profesionales, el ambiente de presión por resultados y dentro de estos el especial valor que era conferido al reporte de muertes en combate, la estigmatización de la población en regiones en las que las FARC-EP buscó establecer control o áreas de influencia, el aprovechamiento de circunstancias de desprotección y vulnerabilidad de ciertas personas, la laxitud de los controles intra e interinstitucionales y el discurso que calificaba como “guerra jurídica” a las denuncias de violaciones a los derechos humanos, fueron los pilares en los que se soportó la práctica de atentar contra personas que no participaban en el conflicto armado y pretender mostrar sus cuerpos como resultados exitosos de la política de seguridad, aunque para ello se tuviera que asegurar su desaparición, impedir la búsqueda y desviar recursos públicos para el ocultamiento de los hechos.

117. Esta decisión se concentra en los hechos perpetrados por integrantes del BIHVG, en el periodo comprendido entre enero de 2005 y enero de 2009, con el ánimo de ilustrar cómo se desarrolló el fenómeno en el departamento del Putumayo.

118. Si bien el marco temporal es utilizado para ilustrar y esclarecer la ocurrencia de estos hechos así como identificar a los máximos responsables, la Sala analiza la totalidad de la información, piezas procesales, informes y otros elementos allegados al subcaso Putumayo en el ejercicio de determinación fáctica. Por ello, puede afirmarse que los patrones identificados reflejan modalidades de comisión de los crímenes que también enmarcaron hechos ocurridos antes del periodo priorizado.

119. Como se describirá más adelante, es posible afirmar que, aunque se identificó la existencia de un patrón macrocriminal en la victimización ocurrida en el Departamento del Putumayo, ocurría de manera simultánea, pues los perpetradores se valían del medio que les resultara más conveniente cuando necesitaban mostrar resultados; a diferencia de otros subcasos en los que la Sala ha determinado que hubo variaciones temporales en las prácticas criminales. Tal singularidad se explica en la inexistencia de grupos paramilitares en el Putumayo en el período priorizado.

120. El patrón identificado por la Sala en los hechos que involucran la responsabilidad de integrantes del Ejército Nacional respecto de asesinatos y desapariciones forzadas se caracteriza así: la realización de operaciones que formalmente eran dirigidas contra la delincuencia común y/o milicianos, en contravía de los lineamientos del DIH, del DIDH y de la doctrina militar respecto del planeamiento y desarrollo de operaciones ofensivas.

## C.1. Del patrón macrocriminal

121. En esta parte, la Sala de Reconocimiento detalla las particularidades de los eventos en los cuales ocurrieron los asesinatos, las desapariciones forzadas y tortura de civiles perpetradas por soldados pertenecientes al Batallón de Infantería Héroes del Valle del Guamuez (BIHVG).

122. En este sentido, se tiene en cuenta que la Sala ha abordado el concepto de patrones macrocriminales en el marco de este caso como la repetición no accidental de una conducta delictiva similar en cuanto a sus finalidades, modo de comisión y características de las víctimas.<sup>31</sup> Ante la repetición, no existe un número fijo de acciones que lo constituyan. En cambio, debe interpretarse en el contexto de un comportamiento que se manifiesta como repetitivo a través de múltiples acciones. Al respecto, la Sala de Reconocimiento ha explicado que:

El patrón macrocriminal identificado por la Sala en los hechos que involucran la responsabilidad de integrantes del Ejército Nacional, específicamente miembros del BIHVG, en asesinatos y desapariciones forzadas se caracterizó por la realización de operaciones que formalmente eran dirigidas contra la delincuencia común y/o milicianos.

123. En este punto es necesario señalar que en el patrón se evidenció la comisión no solo de atentados contra la vida y la integridad personal (homicidios), la retención de personas seguida de comportamientos encaminados a ocultar su paradero para sustraerlas del amparo de la ley (desaparición forzada) sino también lesiones personales y psicológicas (tortura). La Sala determinó que esto ocurrió en 67 casos de homicidio, dentro de los cuales, se encuentran 37 de desaparición forzada y 25 de tortura entre 2005 y 2009.

124. Se retuvo a las 67 personas contra su voluntad, por medio de coerción física o de engaño para someterlas para luego registrar en documentos operativos que se trataba de individuos no identificados vinculados a grupos armados o criminales que se enfrentaron a miembros del Ejército Nacional. Sin embargo, tras analizar la documentación allegada a esta Sala con el fin de ser contrastada, se pudo determinar que la detención de estas personas y el registro de sus

<sup>31</sup> Jurisdicción Especial para la Paz. Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad. Auto SRVR-SUB-D-062 del 30 de agosto de 2023, Caso 03, párr. 305. Al definir el patrón macrocriminal en este Caso, la Sala ha reiterado la definición adoptada a través de autos precedentes de determinación de hechos y conductas. Esta definición se acopla a lo señalado por la Sala en el Auto SRVR-019 del 26 de enero de 2021.

fallecimientos llevó a excluirlos de la protección estatal y dificultar su identificación, para asegurar la impunidad de los responsables.

125. Para lograr lo anterior se sustrajeron los documentos de identificación que llevaban consigo, en algunos casos se modificó la apariencia de los cuerpos cambiándoles la vestimenta por prendas distintivas del grupo armado o criminal que se pretendía implicar y se entregaron los cuerpos sin información útil para su identificación en los poblados más cercanos a donde ocurrieron los homicidios<sup>32</sup>.

126. En la tabla siguiente se incluyen los nombres de las personas que, entre 2005 y 2009, fueron víctimas de conductas contra la vida ejecutadas por los miembros del (BIHVG), presentadas como miembros de grupos criminales fallecidos en operaciones militares. La Sala determinó que este crimen de lesa humanidad y crimen de guerra afectó a 67 individuos, cuya caracterización se abordará a través de 3 hechos ilustrativos del patrón macrocriminal que se expondrán más adelante.

**Tabla No. 9. Individualización de víctimas en el marco de las conductas criminales realizadas por el Batallón de Infantería Héroes del Valle del Guamuez (BIHVG) en el periodo priorizado**

Nombre de la víctima	Fecha	Destrucción de documentos	Previa identificación de la víctima	Manipulación del cuerpo
Armando Torres	12/06/2005			X
Esneyder Rico	3/09/2005			
David Romero	24/12/2005	X		X
José Martínez	24/12/2005	X		X
José Ulcué	24/12/2005	X		X
Mario Hoyos	24/12/2005	X		X
Orlando Calvache	24/12/2005	X		X
Breyner Caicedo	3/02/2006	X	X	
Antonio Jacanamijoy	22/02/2006		X	
Carmen Quilcatán	22/02/2006		X	
Félix Niño	22/02/2006	X		
Hugo Sinbuya	22/02/2006	X		X
Natalia Menchucue	22/02/2006	X		X
Pablo Guarnica	25/04/2006		X	X

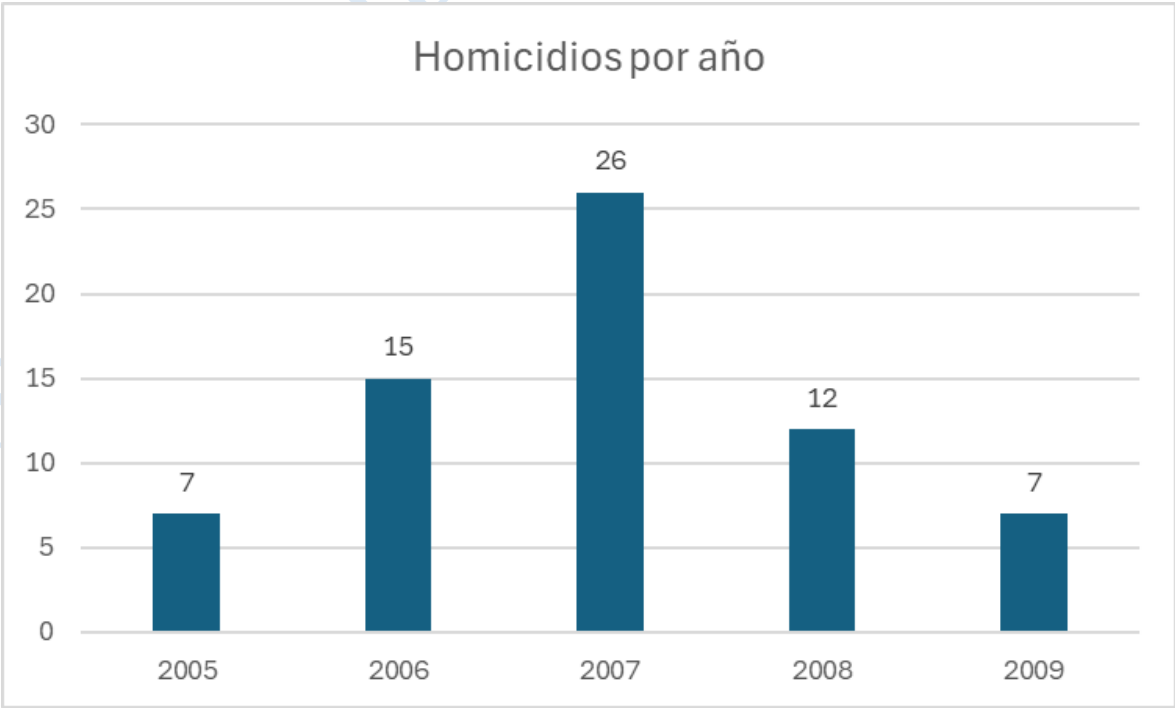
<sup>32</sup> Misión Táctica 19 Operación Rucio, extracto en dónde se menciona el tema de las prendas y ausencia de documento de identificación de la víctima.



Nombre de la víctima	Fecha	Destrucción de documentos	Previa identificación de la víctima	Manipulación del cuerpo
Uber Cuaran	22/07/2006			
Luis José Paniagua	9/08/2006		X	
Jhonier Vasquez	9/08/2006		X	
Tulio Barahona	9/08/2006		X	
Alfonso Ramos	30/08/2006			
Carlos Ventura	30/08/2006	X		
Julio Parra	30/08/2006	X		
Oscar Bisbicús	30/08/2006	X		
Eudoro Payán	12/01/2007		X	X
Mauricio Samboni	27/01/2007		X	
Alfonso Riascos	27/01/2007	X		X
Héctor Tapia	12/04/2007			X
Lorena Castro	12/04/2007			X
Patricia Coconuco	12/04/2007		X	X
Edarñyn Reyes	2/05/2007			X
Hugo Zambrano	2/05/2007			X
Yoan Melo	2/05/2007		X	
Donovan Murcia	15/05/2007	X	X	
Octavio Daza	15/05/2007	X	X	
Marcos Chasoy	7/07/2007	X		
Mario Ipia	7/07/2007	X		
Omar Pijao	7/07/2007		X	
Brayan Ipia	23/07/2007		X	
Diego Noscue	17/08/2007	X	X	X
Miguel Puscué	17/08/2007	X	X	X
Isidro Erazo	9/09/2007			X
Alfonso Mutumbajoy	30/10/2007			X
Cristian Yagari	30/10/2007	X	X	
Eduardo Piaguaje	30/10/2007	X		
Andrés Calambás	8/11/2007	X	X	
Julio Muñozoya	8/11/2007	X		
Laura Tumbo	8/11/2007	X	X	
Ernesto Toconas	18/11/2007			X
Johan Guzmán	4/02/2008			X
Pedro Calambás	4/02/2008			X
Eder Medina	12/03/2008	X	X	X
Carlos Astaiza	20/05/2008			X
Jesael Aguilera	10/07/2008		X	

Nombre de la víctima	Fecha	Dstrucción de documentos	Previa identificación de la víctima	Manipulación del cuerpo
Leider Quinayas	10/07/2008	X		
Ferney López	21/08/2008		X	
Manuel Villamizar	21/08/2008		X	X
Oscar Fuentes	21/08/2008		X	
Conrado Acuña	14/11/2008	X	X	X
Emerson Acuña	14/11/2008			X
Horacio Pulgarin	14/11/2008			X
Catalina Fuentes	7/01/2009	X		
Jaime Guaney	7/01/2009	X	X	
Marta Ambuila	7/01/2009	X	X	
Santiago Chindicué	7/01/2009	X	X	
Carlos Tisoy	24/03/2009			X
Daniel Flores	24/03/2009			X
María Nasa	24/03/2009	X	X	X

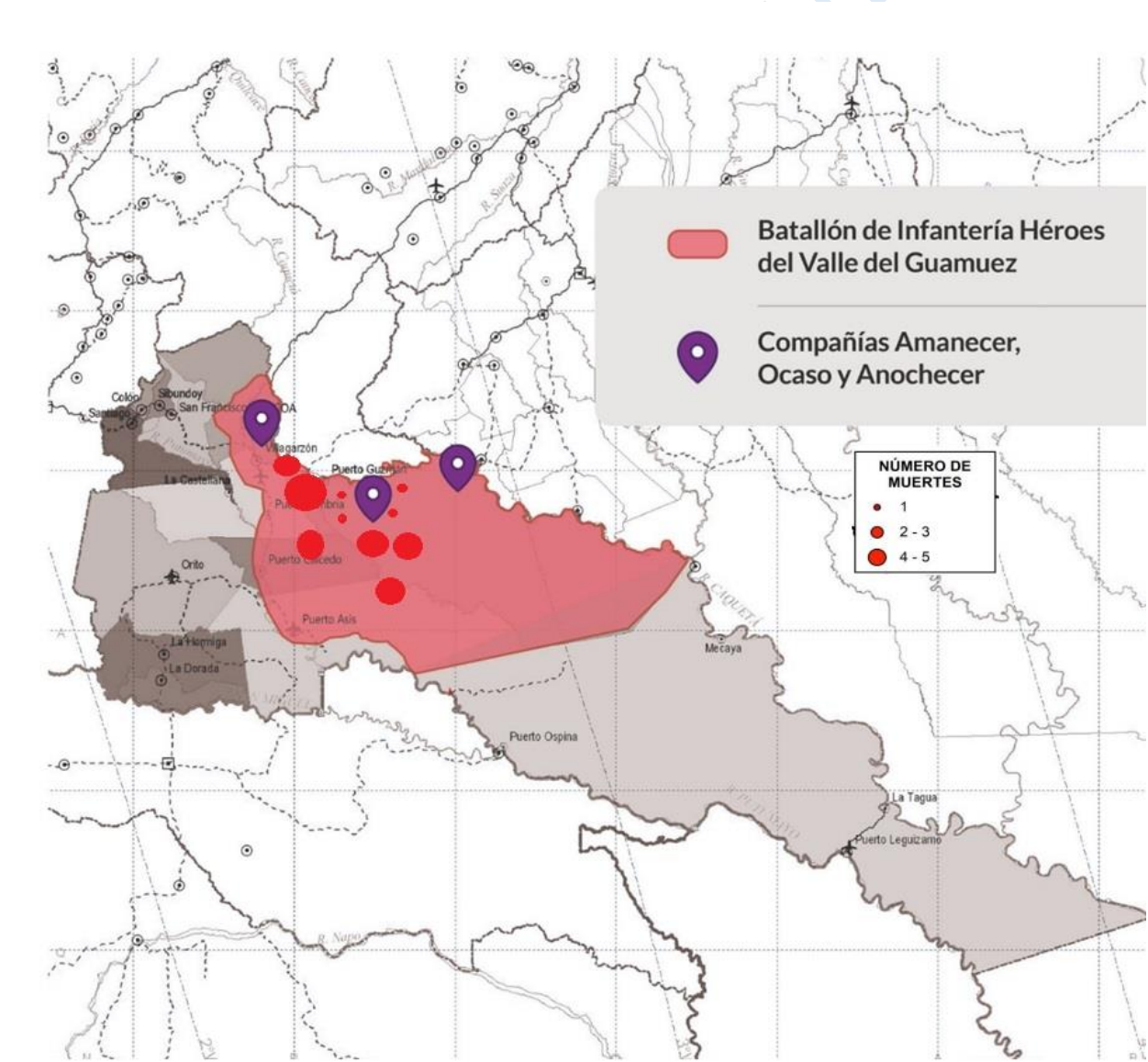
127. A continuación se expone un gráfico que ilustra el número de víctimas con ocasión de las conductas perpetradas por el (BIHVG) en cada año enfocado por la Sala. La gráfica muestra que la unidad utilizó este método de victimización para asegurar la impunidad de las tropas a partir del año 2005, con un aumento constante en los casos con características similares a las detalladas en la anterior tabla, las cuales posteriormente serán analizadas.



128. La Sala recopiló información suficiente para establecer que, entre 2005 y 2009, miembros del BIHVG, en un contexto de permisividad institucional, ejecutaron ataques que resultaron en la muerte de 67 personas, las cuales fueron ilegalmente reportadas como bajas en combate. Adicionalmente, la investigación descubrió que, de este universo de víctimas, 37 individuos fueron víctimas de desaparición forzada y 25 de tortura con ocasión a las operaciones desarrolladas por el BIHVG.

129. Se toma este rango de años teniendo en cuenta que no solo agrupa la mayor cantidad de incidentes victimizantes, sino que también el incremento en el número de casos es acorde con las tendencias de asesinatos y desapariciones forzadas realizadas por miembros de la Fuerza Pública en otras zonas del país.

**Mapa No. 10. Muertes en combate cuestionadas del BIHVG (2005 – 2009), en áreas campamentarias de las FARC-EP**



130. Tras hacer la contrastación, y en concordancia con la postura manifestada por la Sala de Reconocimiento en el Caso 03, se concluyó que la repetición de

dichas acciones ejecutadas de manera sistemática y generalizada se expresó en un patrón de macrocriminalidad consistente en el asesinato y posterior presentación de personas como abatidas en falsos combates, en el contexto de una política nacional de presión por resultados operacionales, entendidos exclusivamente como bajas en combate.

131. En consonancia con los hechos, se pueden identificar componentes o elementos estructurales del patrón general de crímenes, como asesinatos y desapariciones forzadas, perpetrados por miembros de la Fuerza Pública. Los comparecientes presentaban falsamente a las víctimas como si hubieran muerto en combates armados, este proceder tenía como objetivo obtener beneficios personales y profesionales, así como legitimar a la Fuerza Pública ante la opinión pública, proyectando una imagen de fortaleza y éxito en la ofensiva contra grupos armados ilegales, afirmaciones que se abarcarán más adelante con el desarrollo del patrón general.

132. En relación con las ejecuciones extrajudiciales en el departamento del Putumayo, la Sala proporcionará una explicación detallada del patrón macrocriminal general que se observó, al cual se le ha dado la siguiente denominación: “Homicidios y desapariciones forzadas cometidos en operaciones desarrolladas contra supuestos miembros de la delincuencia común y/o milicias, en violación de los estándares del DIH y del DIDH sobre el uso de la fuerza letal, así como de la doctrina militar vigente al momento de los hechos”.

### **C.1.1. Síntesis del patrón macrocriminal general**

133. La Sala realiza esta determinación con base en las atribuciones legales a su cargo, apoyándose en la contrastación del acervo probatorio de los hechos victimizantes; esto incluye el análisis de la información contenida en las fuentes de contrastación contempladas en el artículo 79 de la LEJEP<sup>33</sup>.

134. El análisis preliminar de la Sala permite comprender que los hechos victimizantes perpetrados en contra de la población civil fueron motivados, de manera general, por la concurrencia de fenómenos de delincuencia común que se atribuían por parte de los miembros del Ejército a la denominada “terciarización” del trabajo de la guerrilla, dentro de la dinámica de baja presencia de las FARC en la jurisdicción del BIHVG en el departamento del Putumayo, aunado a los incentivos existentes para presentar resultados de bajas de combate. Además, los

<sup>33</sup> Congreso de la República. Ley 1957 de 2019, artículo 79.



miembros del Ejército aprovecharon también las características de indefensión de sus víctimas, las cuales eran elegidas con base en información suministrada por terceros, que los señalaban como supuestos delincuentes o colaboradores de grupos armados al margen de la ley, sin que hubiere contrastación rigurosa de dichos señalamientos<sup>34</sup>.

135. De acuerdo con la situación referida, esta Sala determinó que no existía un vínculo comprobado de las víctimas con las extintas FARC-EP, algún otro grupo armado u organización dedicada a la delincuencia común. Tampoco se tenía certeza acerca de si efectuaban funciones continuas de combate en favor de alguna de las partes del conflicto; ni siquiera se contaba con información verídica acerca de su participación en las hostilidades o su intención de generar daños o bajas sobre Ejército Nacional o la población civil.

136. Aún, en gracia de discusión, el hecho de ser señalados como simpatizantes o colaboradores de la guerrilla no hacía que perdieran la condición de civiles y, por lo tanto, de personas protegidas por el DIH; de tal forma que ni siquiera se los podría considerar como blanco legítimo de ataques militares. En la medida que no existía certeza acerca de los señalamientos de los informantes, los mismos carecían de validez para ser el sustento que justificara una acción militar contra las civiles víctimas de los ataques por parte de miembros del Ejército Nacional.

137. La práctica más común que se ha identificado dentro de este patrón macrocriminal consistió en la presentación de las personas civiles dadas de baja como milicianos de las FARC-EP o delincuencia común. Para ello, miembros del Batallón de Infantería Héroes del Valle del Guamuez (BIHVG) forzaban a estas personas a vestir con prendas y signos distintivos de dicha organización o alteraban las escenas del crimen en el sentido de poner armamento, que se suele asociar a la dotación de las FARC-EP, en los bolsillos o en las manos a las personas una vez se cometía su asesinato<sup>35</sup>. Además, la Sala ha podido determinar que una práctica recurrente de los miembros del BIHVG en este patrón de acción criminal

<sup>34</sup> JEP, SRVR. Versión voluntaria de Armando Jesús Pastor López. “**Magistratura** ¿Con base a qué información, entonces, se planeó esta orden de operación? **Compareciente**: Con la información de combate que estaba dando la Teniente Yanacona desde el área, señor magistrado. **Magistratura** Y, ¿esa información fue contrastada? **Compareciente** (...) nosotros partimos como comandantes que estamos en los puestos de mando atrasado o los puestos de mando alterno, que la información de combate que nos están dando es cierta (...)”

<sup>35</sup> “**Magistratura**: ¿Qué hicieron con la ropa que tenía en esas personas? **Compareciente**: esa ropa pues se botó, se quemó en el otro día ya no estaba esa ropa no sabría decirle si eso me imagino se quemó allá en ese lugar no tendría algo claro de lo que se hizo con ella”.

era desaparecer forzosamente a las víctimas, despojándolas de cualquier indicio que pudiera ayudar a encontrar su paradero<sup>36</sup>.

138. La supervisión de estas acciones desde los rangos superiores del batallón en cuestión era insuficiente, pues se tenía la percepción de que las actividades delictivas eran funcionales para los grupos armados, se creía que las milicias de las FARC-EP y/o la delincuencia común operaban a través de robos, extorsiones y secuestros y que no dudaban en enfrentarse a unidades militares que los superaban en número y armamento. Adicionalmente, bajo esta creencia de similar “modus operandi” se empezaban a asimilar como iguales a los milicianos de las FARC y a los integrantes de los grupos delictivos.

139. Al respecto resulta ilustrativo, por ejemplo, un documento de octubre de 2007 emitido por el entonces comandante del BIHVG, Coronel Armando Jesús Pastor López, en el que se responden los cuestionarios del plan de búsqueda de información remitido por la BR27 a ese Batallón<sup>2</sup>. Allí, como respuesta al requerimiento de la Brigada para que el Batallón informe sobre actividades de los frentes 13 y 61 de las FARC-EP, se asimilan dichas estructuras con las actividades de bandas delincuenciales y se utilizan ambas denominaciones (de frentes y bandas delincuenciales) como si fueran sinónimos.

<sup>36</sup> Este accionar se ilustra a través del relato de la Teniente María Bertilda Yanacona, en versión voluntaria rendida ante esta Sala: “**Magistratura** ¿Usted conserva esos documentos? **Compareciente** No señora **Magistratura** ¿Qué los hicieron? **Compareciente** Los soldados de la compañía los botaron unos meses después de que el señor Medina fue dado de baja **Magistratura** ¿Dónde los tiraron? **Compareciente** En un río”

*Sp. González  
- So conoimiento  
- me ppece un bono foto  
- Registros y analisis*

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
EJERCITO NACIONAL  
  
BATALLÓN DE INFANTERIA HEROES DEL VALLE  
DEL GUAMUEZ (BIHVG)

Mocoa, 15 de agosto de 2007.

3 3 1 9  
No. \_\_\_\_\_/

MC-CE-DIV06-BR27-BIHVG-S2-INT

ASUNTO: Plan de búsqueda de finanzas

A LA: Señora Teniente Coronel  
Batallón de Infantería Héroes del Valle del Guamuez  
VIGESIMO SÉPTIMA BRIGADA

Con toda atención me dirijo a ese Comando con el fin de enviar repuesta al plan de búsqueda de información de finanzas, de acuerdo a los plazos establecidos, así:

**EEL 01**

**REQUERIMIENTO No. 01**

Envíe la apreciación de finanzas de los frentes 61 y 13 de las FARC, y bandas de delincuencia común, especificando a que actividades delictivas se dedican y que montos obtienen cada una de ellas.

Rta/.

De acuerdo a apreciación de Narcotráfico anexa

**REQUERIMIENTO No. 02**

140. En otros documentos de operaciones, realizados en meses previos y posteriores, se da cuenta del repliegue de las unidades de las FARC-EP del Medio Putumayo hacia el Alto Putumayo y se indica que las actividades de ese grupo armado las realizaban milicianos, sin identificar a las secciones de inteligencia quiénes serían los integrantes.

**REQUERIMIENTO No. 02**

Envíe informe de inteligencia, croquis identificando los milicianos por veredas, municipios de su jurisdicción, encargados de los anillos de seguridad, en los sectores donde se encuentran las áreas bases campamentarias de las compañías (anexar coordenadas-fotos otros datos de interés.

R/ta.

A raíz del desarrollo operacional en el suroeste del país y los lineamientos trazados en la Novena conferencia guerrillera; el Bloque Sur de la ONT FARC, ordenó a varios de sus frentes desplazar sus fuerzas en totalidad hacia el Alto Putumayo, abandonando sus áreas de ingerencia, comisionando a las estructuras de milicias Bolivarianas a cumplir sus funciones de red de apoyo realizando actividades de inteligencia, logística y extorsión y así mantener bajo dominio las zonas.

141. Con base en este tipo de planteamientos de doble vía, en los batallones se reforzaba la idea de que era posible adelantar operaciones ofensivas contra estructuras de milicias y de delincuencia, porque finalmente eran iguales o servían a los mismos fines. Así pues, independientemente del objetivo militar, tendrían como resultado el debilitamiento de los reductos de las FARC-EP en el Putumayo.

142. No obstante, lejos de realizar operaciones contra los grupos armados, e incluso a causa del repliegue de las cuadrillas, la normalización del discurso de combatir a las milicias y/o delincuencia común sirvió como pretexto para la realización de operaciones irregulares en las que se atacaba a integrantes de la población para presentarlos como resultados de operaciones desarrolladas contra un enemigo difuso<sup>37</sup>, sobre el que en realidad no había información detallada y verificada.

143. Según los versionados, para adelantar las misiones que dieron lugar a estos hechos se usaron dos justificaciones diferentes: (i) la necesidad de enfrentar directamente a la delincuencia común o (ii) la obligación de combatir a los milicianos que participaban en actividades delincuenciales. Pese a ello, no se dieron los presupuestos normativos para lo primero, ni se respetaron las reglas de enfrentamiento para adelantar maniobras contra los segundos. Así, estos casos representativos prueban que los batallones llevaron a cabo operaciones en abierta contradicción de reglas básicas del Derecho Internacional Humanitario (principio de proporcionalidad) y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (uso de la fuerza letal como último recurso).

144. Así las cosas, en concordancia con el derecho internacional de los derechos humanos y el DIH, las Fuerzas Militares deben abstenerse de lanzar operaciones ofensivas contra la delincuencia común (función constitucionalmente a cargo de la Policía Nacional) y, en los casos excepcionalísimos en los que el Ejército Nacional lleve a cabo misiones en contra de dicha amenaza, ha de cumplir con unos estándares internacionales<sup>38</sup> aún más exigentes, que, como se observa, no fueron atendidos por el BIHVG. Sobre el uso excepcionalísimo de las Fuerzas Militares para combatir a la delincuencia común, la CorteIDH ha sido enfática en indicar que:

(...) es preciso que los Estados actúen en todo momento dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permitan preservar tanto la seguridad pública como los derechos humanos”<sup>39</sup>. Así, “cuando excepcionalmente [las fuerza

<sup>37</sup> Se emplea la expresión “enemigo difuso”, porque en realidad no existía una distinción entre miembros de las FARC-EP y los integrantes de cualquier otra organización delictiva al momento de realizar operaciones.

<sup>38</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Alvarado Espinoza y Otros Vs. México. Sentencia de 28 de noviembre de 2018, prr 182.

<sup>39</sup> “Lo anterior implica que en la adopción de medidas frente a quienes se presume que atentan en contra de la seguridad interna o del orden público, los Estados no pueden invocar la existencia de situaciones excepcionales como medio para suprimir o denegar derechos garantizados por la Convención, desnaturalizarlos o privarlos de contenido real, o como justificación para practicar o tolerar actos contrarios a normas imperativas de derecho internacional, tales como la tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, entre otras graves violaciones”. Corte IDH. Caso Alvarado Espinoza y Otros Vs. México. Sentencia de 28 de noviembre de 2018.



militares] intervengan en tareas de seguridad, la participación de las fuerzas armadas debe ser: a) Extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso; b) Subordinada y complementaria, a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial; c) Regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia, y d) Fiscalizada, por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces”<sup>40</sup>.

145. Así pues, tal como se evidencia de los hechos representativos que a continuación se describirán, en los casos que conforman el patrón de macrocriminalidad expuesto en este auto, el despliegue de las fuerzas militares para combatir supuestos fenómenos de delincuencia común, por ejemplo hurto de ganado, extorsiones, secuestros, etc., se convirtió en la regla general, omitiéndose así el principio de excepcionalidad previsto en el ordenamiento y, con ello, todos los límites requeridos por este.

## **C.2. Abordaje del patrón macrocriminal a través de casos ilustrativos**

146. Para describir en detalle los patrones que esta Sala ha identificado en los hechos victimizantes investigados en el departamento del Putumayo, se considera útil hacer uso de la presentación de casos ilustrativos que permiten una descripción minuciosa de las características específicas de cada práctica criminal que se identifica<sup>41</sup>; esta metodología busca ejemplificar los demás hechos también investigados exhaustivamente y que corresponden al mismo patrón.

147. El uso de un caso ilustrativo no implica que se le haya investigado como un caso aislado o individual, ni supone el desmedro de la investigación de otros hechos<sup>42</sup>. Dado que la Sala investiga fenómenos macrocriminales asociados al conflicto armado, en lugar de hechos aislados, el caso ilustrativo se emplea como una herramienta metodológica para caracterizar esos fenómenos, identificando

<sup>40</sup> Corte IDH. Caso Alvarado Espinoza y Otros Vs. México. Sentencia de 28 de noviembre de 2018.

<sup>41</sup> Jurisdicción Especial para la Paz. Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Auto SRVR 019 del 26 de enero de 2024, párr. 232

<sup>42</sup> Jurisdicción Especial para la Paz. Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Auto 019 de 2021. prr.230

los hechos que resultaran más típicos del patrón documentado en sus finalidades, la forma de su comisión (modus operandi), características de las víctimas, lugares y tiempos<sup>43</sup>. Todo esto con la finalidad de explicar a las víctimas y a la sociedad colombiana los mecanismos, roles, características y consecuencias de esta forma de proceder criminal.

148. Los casos ilustrativos se construyen identificando variables que permitan evidenciar los elementos contextuales de los hechos victimizantes, esto incluye la sistematicidad, los motivos discriminatorios y las violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario. Así, se analizan circunstancias específicas como las conductas y motivaciones de los victimarios, la persistencia de factores estructurales que facilitaron los hechos o contribuyeron a la impunidad de los perpetradores y, además, se destacan características comunes de estos hechos que no habían sido reveladas en procesos previos ante la justicia ordinaria.

149. Con base en la metodología antes señalada, se recalca que, como parte de su orden estratégico, la Sala dentro del Auto 033 del 12 de febrero de 2021 implementó una modalidad de investigación para determinar lo que sucedió y las responsabilidades individuales. Así:

“La Sala adoptó una estrategia de investigación que va de “abajo hacia arriba” en la determinación de lo ocurrido y de las responsabilidades individuales. De esta forma, en primer lugar, identificará los partícipes determinantes y máximos responsables a nivel regional y local; posteriormente, y con base en la construcción fáctica y jurídica realizada en esos primeros peldaños, determinará si hay y quiénes son los máximos responsables a otros niveles de escala territorial y nacional”.

150. En este sentido, se expondrán tres casos ilustrativos con los que se ejemplificará el ajuste que se le imprimió a la operatividad militar cuando el repliegue de las FARC-EP limitó las oportunidades para que se sostuvieran combates reales, la palmaria desatención de las normas internacionales y constitucionales sobre distinción entre actores armados y población civil, así como las de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza letal, en contextos donde era aplicable tanto el DIH como el DIDH; todo esto soportado en discursos justificatorios frente a la situación de seguridad o al rol de la Fuerza Pública, su búsqueda de aprobación y respaldo por la población civil.

<sup>43</sup> Jurisdicción Especial para la Paz. Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Auto 019 del 26 de enero de 2021. La metodología de casos ilustrativos para la comprensión de los patrones macrocriminales ha sido continuamente empleada en la jurisprudencia de la JEP. Cfr. Auto SRVR 062 del 30 de agosto de 2023, párr. 305.

151. En línea con la determinación de hechos realizada previamente por la Sala en ocasiones anteriores, se pueden reconocer aspectos o elementos estructurales del patrón general de crímenes de asesinatos y desapariciones forzadas cometidos por miembros de la Fuerza Pública, quienes falsamente presentaban a las víctimas como fallecidas durante enfrentamientos armados. Esto se hacía para obtener beneficios personales, profesionales y de legitimación para las Fuerzas Militares ante la opinión pública, proyectando una imagen de fuerza y éxito en la lucha contra grupos armados ilegales. Como se demostrará más adelante mediante la descripción detallada de casos ilustrativos identificados por la Sala, las características de los hechos descritas anteriormente se repiten de manera consistente en los asesinatos y desapariciones forzadas cometidos por miembros del Batallón de Infantería Héroes del Valle del Guamuez.

152. A continuación, se presentan tres casos ilustrativos que dan cuenta de las características del patrón identificado:

#### **C.2.1. Caso ilustrativo 1: homicidio de Eder Medina**

153. El 12 de marzo de 2008, integrantes del pelotón 2 de la compañía Amanecer, adscritos al Batallón de Infantería Héroes del Valle del Guamuez (BIHVG) asesinaron a Eder Medina en la vereda Bajo Eslabón del municipio de Villagarzón. Por estos hechos fue declarada penalmente responsable la Teniente Coronel María Bertilda Yanacona Olaya.

154. En el material probatorio de los expedientes se encuentran las versiones entregadas por los miembros del pelotón 2 Amanecer en el informe de patrullaje y pronunciamientos en la sección jurídica del Batallón. En sus declaraciones ante la JEP señalaron que los hechos se originaron cuando un particular les indicó, en el casco urbano del Valle del Guamuez, que en la vereda Bajo Eslabón había presencia un grupo de delincuentes organizados. Ante esta situación, se emitió la misión táctica (MT) 9 de la orden de operaciones Rucio, suscrita por el Coronel Armando Jesús Pastor López y el oficial de operaciones Pablo Ruiz, a partir de la cual se procedió al traslado de la tropa a la vereda mencionada. Se pudo constatar que un grupo de soldados llegó a la zona y sostuvo un combate con un grupo de personas armadas, en el cual se dio de baja a uno de ellos sin que pudiera ser identificado.

155. Según el informe de patrullaje, quien dio muerte a la víctima fue el soldado profesional Carlos Montaña Guamanga. El informe de necropsia señaló que el

cuerpo de Eder Medina presentaba seis impactos de bala con orificios de entrada y salida.

156. A través de la Versión Voluntaria, la teniente Yanacona Olaya relató a esta Sala que presionó a los soldados para presentar resultados operacionales. Ahondando, indicó que los miembros de la Compañía se enfocaron en ubicar a presuntos delincuentes comunes para darlos de baja y presentarlos como muertes en combate. Además, dentro de su relato indicó que el soldado Carlos Montaña Guamanga era reconocido por ser un militar con alta disposición para ejecutar este tipo de operaciones e, incluso, expresó que Montaña alentaba a los integrantes de las otras compañías para que adoptaran la misma práctica.

157. El Cabo Reinaldo Rojas, segundo al mando del pelotón, reconoció en VV ante la JEP que fue la Teniente Coronel Yanacona quien sugirió presentar a Eder Medina como dado de baja en combate, considerando que, semanas antes, había participado en el hurto de su reloj.

158. El día de los hechos, el señor Eder Medina se desplazaba hacia las 8:00 pm en motocicleta por el casco urbano de la vereda Bajo Eslabón. De acuerdo con las declaración de los soldados Carlos Montaña Guamanga, al advertir la presencia de la víctima, la Teniente Yanacona Olaya ordenó a los miembros del pelotón que se hiciera un falso retén para detenerlo, sustraer sus documentos y llevarlo a un lugar abandonado cercano. Se procedió a detener a Eder Medina una vez atendió la señal de pare que le hicieron, posteriormente lo condujeron a una casa abandonada, obligándolo a cambiar su ropa por otras prendas oscuras y botas pantaneras.

159. En la VV del Soldado Montaña se señaló que la Teniente María Bertilda Yanacona Olaya fue quien indicó cómo proceder a través de comunicaciones desde la radio y presionó a los soldados para que le dispararan a Eder Medina una vez terminara de cambiar su ropa. En su versión voluntaria, la Teniente Yanacona negó este señalamiento, mencionando que fue una decisión concertada entre todos los soldados que participaron en la operación bajo la motivación de obtener permisos de descanso y comisiones.

160. El soldado Montaña y otros miembros de Amanecer llevaron al señor Eder Medina a un lugar sin concurrencia en la vereda El Águila. El Cabo Rojas indicó dónde debían ubicarlo y, cuando la Teniente Yanacona dio la indicación a través de comunicación radial, el soldado Carlos Montaña Guamanga abrió fuego, impactando en tres ocasiones a la víctima. Pese a los impactos recibidos, Eder



Medina se encontraba con vida, situación que fue reportada a la Teniente Yanacona Olaya, quien recalcó que era necesario lograr la baja, por lo que el Soldado Montaña Guamanga procedió a propinarle tres disparos adicionales para rematarlo.

161. En su Versión Voluntaria, el Soldado Carlos Montaña Guamanga mencionó que, tras los disparos contra Medina, se reportó la ocurrencia de un combate de encuentro con tres personas en el que se dio de baja a uno de los tres combatientes. El mismo Soldado mencionó que la Teniente Yanacona Olaya fue quien le indicó que una vez se le diera de baja, debía poner un revólver en las manos de Eder Medina y accionarlo. De acuerdo con el relato de la Teniente Yanacona, el arma fue incautada días antes por la compañía, en otro operativo de rutina, y llevada al lugar por el Soldado desde las instalaciones del ejército.

162. Una vez se puso el arma en el cuerpo de la víctima, la Teniente Yanacona Olaya indicó que se debían hacer disparos para simular el combate y requirió que se custodiara el cadáver durante la noche y hasta que el CTI llegara a hacer el levantamiento del cuerpo. En la mañana siguiente, minutos antes de que los investigadores se hicieran presentes, la Teniente Yanacona Olaya instruyó al Soldado Duván Pérez para que declarara ante los investigadores.

163. Durante el levantamiento del cadáver llegaron al lugar el Mayor Dionisio Ruiz y la Teniente María Bertilda Yanacona Olaya, quienes estuvieron atentos a la diligencia del CTI y escucharon las declaraciones rendidas por los soldados ante los investigadores. El Mayor Ruiz le entregó la orden de operaciones a la Teniente Yanacona Olaya para su firma en la escena de los hechos y la increpó respecto al porqué los miembros de la tropa se notaban nerviosos durante sus declaraciones.

164. Posteriormente, la tropa fue llevada hacia el Batallón, donde se hizo una formación ante el Coronel Armando Jesús Pastor López, quien los felicitó por el resultado operativo y a continuación les solicitó entregar su armamento, informándoles que tenían 15 días de permiso.

165. Antes de que se hiciera efectivo el permiso se rindieron las declaraciones ante la Jurisdicción Penal Militar, diligencia en que los soldados tuvieron fotocopias del informe de patrullaje para encausar sus versiones de acuerdo con lo que quedó allí consignado. La teniente Yanacona Olaya les impartió instrucciones para mantener las versiones rendidas en las entrevistas con los investigadores del CTI y estuvo junto a la oficina de declaraciones durante las

diligencias. En su Versión Voluntaria ante la JEP, el Soldado Carlos Montaña Guamanga dijo que, previo a rendir sus declaraciones, la Teniente Yanacona Olaya efectivamente le dio indicaciones precisas sobre lo que debía decir, lo cual obedeció a cabalidad.

166. En su versión ante la Sala de Reconocimiento, el Cabo Reinaldo Rojas afirmó que la ropa del señor Eder Medina fue incinerada por orden de la Teniente Yanacona Olaya, versión que coincide con aquella rendida por el Soldado Carlos Montaña Guamanga, quien reconoció haber ejecutado la orden de incinerar la ropa de la víctima. Por su parte, en la VV de la Teniente Yanacona Olaya, ella solo reconoció que, por indicación suya, los documentos del señor Eder Medina fueron arrojados a un río por soldados de la compañía tiempo después de que ocurrieran los hechos.

167. En su VV, la Teniente Yanacona Olaya reconoció que se hizo un pago en mayo de 2008 al señor José Francisco Pazo por su supuesta colaboración para dar con los delincuentes que se encontraban en la vereda Bajo Eslabón de Villagarzón y la baja de uno de ellos, quien figuraba como no identificado. Se constató que dicha persona no suministró ninguna información y que el pago se hizo tres meses después de los hechos, cuando ya se había identificado el cuerpo del señor Eder Medina.

168. De igual manera, Yanacona Olaya, mencionó que se hizo un pago inferior al que se había mencionado al supuesto informante, lo cual ocurrió por expresa disposición del comandante del batallón, Coronel Armando Jesús Pastor López, quien definía directamente el valor que se consignaría en el acta de pago y la firmaba; teniendo en cuenta su posición de comandante, nadie refutaba su decisión. Agregó que la misión táctica no contaba con anexo de inteligencia, el cual fue incorporado por instrucción del Coronel Pastor López en octubre de 2008. Sin embargo, el movimiento de la tropa se sustentó en boletín de informaciones del 11 al 12 de marzo de 2008, que incluía datos obtenidos gracias a inteligencia de combate por la Teniente Yanacona Olaya, incorporado sin ninguna contrastación.

169. De esta forma, se constatan las irregularidades representativas de estos hechos en relación con el patrón identificado que, en este caso, fueron reconocidas por integrantes del BIHVG de todos los niveles. Dichas irregularidades reflejan las presiones ejercidas por los superiores jerárquicos, la falta de contrastación de la información de inteligencia, el direccionamiento de las operaciones contra personas señaladas de hacer parte de grupos delincuenciales, la elaboración e

incorporación posterior de documentos que sustentan las operaciones y los pagos irregulares por información o recompensas.

### **C.2.2. Caso ilustrativo 2: homicidio de Jhonier Vásquez, Tulio Barahona y Luis José Paniagua**

170. El 9 de agosto de 2006, en la vereda Villa Colombia del municipio de Puerto Guzmán, los integrantes de la compañía Anochecer del Batallón de Infantería Héroes del Valle del Guamuez (BIHVG) asesinaron a Jhonier Vásquez, Tulio Barahona y Luis José Paniagua. En el informe de patrullaje se reportó que los efectivos de la compañía se desplazaban en inmediaciones de Villa Colombia y de repente aparecieron en una esquina dos hombres armados, pertenecientes a una organización delincriminal, que abrieron fuego en su contra, por lo que se inició un combate en el que fueron dados de baja.

171. Tiempo después, dentro del trámite judicial ante esta Jurisdicción, la misma Teniente controvertió este informe de patrullaje, Yanacona informó ante la JEP en VV que un civil “informante” se reunió con el comandante del Batallón en julio de 2006 para comentarle que conocía sobre unas personas que delinquían ocasionalmente en Puerto Guzmán y que podrían ser un blanco fácil para lograr un resultado, refiriéndose a ejecuciones extrajudiciales. A partir de esto, se “perfiló” a tres civiles que tenían presuntamente antecedentes judiciales y a quienes podrían conducir bajo engaños, y con la colaboración de una persona que tenía un vehículo a disposición, a un lugar donde hiciera presencia el pelotón de la compañía para que los retuvieran y así poder asesinarlos, desaparecerlos y presentarlos como bajas en combate.

172. En su Versión Voluntaria ante la JEP, la Teniente Yanacona reconoció que el que las personas tuvieran antecedentes judiciales fue relevante para ejecutar la conducta criminal, pues dicha circunstancia se podía aprovechar para sostener que se dio de baja a miembros de una organización delincriminal. Agregó que las 3 personas señaladas se desplazarían en su propio vehículo, mientras que, en el batallón, el Soldado Montaña Guamanga organizaría al pelotón de la Compañía para hacer un retén en la vereda Villa Colombia.

173. De acuerdo con la versión voluntaria rendida ante la JEP por la Teniente Yanacona, ella se limitó a decirle al Soldado Montaña que la Compañía debía acudir al lugar indicado, porque se tenía información sobre un grupo delincriminal que estaba atacando a los moradores de la zona y se emitió la orden de operaciones No. 012/2006 Cobre.

174. De acuerdo con los familiares de las víctimas, fueron llevados bajo engaños a Villa Colombia con el propósito de recoger una mercancía en dicho lugar. En el mismo sentido, vecinos del sector afirman que vieron a las víctimas cuando iban en camino en un vehículo hacia el supuesto proveedor de mercancías. En su versión voluntaria, la Teniente Yanacona contó que la tropa los sustrajo del vehículo para requisarlos y, una vez se registró el automóvil, se encontró armamento que ella misma ordenó introducir para incriminarlos.

175. Los soldados de la compañía procedieron a llevarse a los tres hombres en el camión en el que se movilizaban y trasladándoles hacia inmediaciones de Villa Colombia, no obstante, se les dijo que los llevarían al batallón. En el trayecto las víctimas fueron puestas boca abajo, les prohibieron comunicarse entre ellas y las golpearon hasta causarle graves heridas físicas y psicológicas al intentar desobedecer. Más adelante se hizo descender a los tres hombres, posteriormente, según la versión voluntaria del Soldado Montaña Guamanga, la Teniente Yanacona lo llamó para saber cómo iba el supuesto operativo y le dijo: “Ya me dijeron que estos tipos se quieren volar y que están de rebeldes, hagan lo necesario para retenerlos y acuérdense que ya nos dijeron que no sirve presentar capturas, lo que se necesita son resultados”. Tras la llamada, Guamanga transmitió el mensaje a los soldados y estos se organizaron para rodear a los civiles detenidos y abrieron fuego. Así, los señores Jhonier Vásquez, Tulio Barahona y Luis José Paniagua fallecieron en el acto.

176. En la madrugada del 10 de agosto de 2006, la Teniente Yanacona se comunicó con el comandante del Batallón, Coronel Armando Jesús Pastor López, para informarle el resultado de la operación. De acuerdo con la señora Yanacona, posteriormente mantuvo diálogos con el CTI de la Fiscalía para que hiciera el levantamiento de los cuerpos y su traslado a Puerto Guzmán.

177. Así, la Teniente le dio indicaciones al Soldado Montaña Guamanga, sobre lo que los soldados debían decir a los investigadores del CTI durante la diligencia, definiendo la versión del encuentro repentino y el combate correspondiente. Por otro lado, las bajas se tuvieron en cuenta al cierre del año para facilitar los permisos.

178. El Coronel Armando Jesús Pastor López señaló no recordar estos hechos, no obstante, reconoció la falta de vigilancia y control sobre la tropa a su cargo.



179. Este caso da cuenta de elementos representativos del patrón abordado, por medio del diseño de operaciones que buscaban explícitamente producir muertes para ser presentadas como bajas en combate, la inducción al engaño de las víctimas para ser conducidas a los lugares donde estaban presentes las tropas o el aprovechamiento de condiciones particulares de las víctimas para justificar los supuestos combates.

### **C.2.3. Caso ilustrativo 3: homicidio de Ferney López Contreras, Manuel Ricardo Villamizar y Óscar Fuentes**

180. El 21 de agosto de 2008, alrededor de las siete de la noche, en la vereda El Porvenir del municipio de Villagarzón, miembros adscritos a la compañía Amanecer del Batallón de Infantería Héroes del Valle del Guamuez (BIHVG) asesinaron a los señores Ferney López Contreras, Manuel Ricardo Villamizar y Óscar Fuentes, a la vez que atentaron contra la vida del menor Samuel Felipe Villamizar, civiles que se movilizaban en un taxi de placas KFC-067, supuestamente a realizar el cobro de una extorsión de la cual estaba siendo víctima el señor Rodrigo Niño.

181. La citada vereda se encuentra ubicada a tres kilómetros de distancia del área urbana de Villagarzón y a quince kilómetros de las instalaciones del (BIHVG). Los hechos ocurrieron específicamente en parte de la vía que conduce al municipio de Puerto Caicedo en medio de una carretera parcialmente pavimentada. Según entrevistas rendidas por habitantes del lugar (en labores de indagación disciplinaria en la Sección Jurídica del Batallón), en el sector se habían presentado eventos de inseguridad (especialmente robos) y, por el control militar que se ejercía, la comunidad tenía en alta estima a las tropas del ejército.

182. Los hechos se desarrollaron en ejecución de la Orden de Operaciones Fiesta, la cual iba dirigida a “Neutralizar el accionar de las FARC-EP, de bandas delincuenciales, y demás organizaciones armadas al margen de la ley que delinquen en el área general de la Vereda (sic) El Porvenir”. Aunado a ello, la misión estuvo bajo el mando de la Teniente María Bertilda Yanacona Olaya.

183. La Teniente suscribió el informe de patrullaje, con fecha del 5 de agosto de 2008, en el que resumió cómo sucedieron los hechos; según ella, fueron originados con una denuncia de llamadas extorsivas que le hizo el señor Rodrigo Niño al Sargento Filadelfo Chávez Hernández. El resumen de los sucesos se plasmó así,

de acuerdo con la declaración del Sargento Chávez Hernández ante la Fiscalía General de la Nación:

Siendo las 18:50 horas aproximadamente al sitio indicado se acerca un vehículo tipo Taxi, el cual da la vuelta cerca donde estábamos ubicados. Enseguida de esto, observamos que del vehículo se baja un sujeto y por el reflejo de la luz se evidenció que estaba armado, la persona víctima de la extorsión arroja el paquete al suelo y sale corriendo donde lo esperaba una moto conducida por el suscrito sargento Filadelfo Chávez Hernández. En el instante que el extorsionista agarra el paquete, grité ‘Ríndanse no disparen somos el Ejército nacional [sic], están rodeados’, pero éste [sic] señor hace caso omiso, y emprende la huida y en cuestión de segundos el sujeto y el conductor del taxi abren fuego hacia la tropa, es allí donde mis compañeros reaccionaron, presentándose un intercambio de disparos. El conductor del vehículo acelera y emprende la huida [sic], y con el fin de evitar que se escapara se le propinaron algunos impactos al vehículo.

Aproximadamente 30 metros más adelante, notamos que el vehículo estaba ladeado, motivo por el cual se ordenó a los soldados salir a la vía, por la parte de abajo, efectuando un registro. En ese momento, son sorprendidos a fuego por el sujeto que se encontraba al lado del vehículo. Seguidamente el personal ubicado en la parte alta, el Soldado Carlos Montaña Guamanga salió a la parte donde estaba el vehículo, y se escuchó el llanto de un niño que se encontraba al interior del vehículo (...).

184. Junto con ello, en el informe de operaciones se reportaron tres muertes, sin especificar la identidad de los fallecidos ni el material de guerra incautado. A pesar de que en este documento no se hizo una relación de los ciudadanos dados de baja, por las labores de policía judicial que adelantó la FGN, se conoció que Ferney López Contreras y Manuel Ricardo Villamizar fueron hallados cerca del taxi. Por otro lado, se estableció que el cuerpo del señor Oscar Fuentes se encontró el 22 de agosto de 2008 aproximadamente a un kilómetro de distancia del lugar de los hechos, junto con un revolver, dos cartuchos y dos vainillas.

185. La versión oficial de los hechos sostuvo que el señor Rodrigo Niño estaba siendo objeto de llamadas extorsivas y acudió al Ejército Nacional buscando ayuda, motivo por el cual se desarrolló un operativo para emboscar a los supuestos implicados, haciéndoles creer que se les iba a dar el dinero exigido, aunque terminó en el intercambio de disparos que generó la muerte de Ferney López Contreras, Manuel Ricardo Villamizar y Óscar Fuentes.

186. Sin embargo, según otras fuentes, se pudo establecer que los hechos no sucedieron de esa forma y que los implicados no eran personas relacionadas con grupos delincuenciales. Así, dentro de las declaraciones que practicó la FGN posteriormente y el juez de instrucción penal militar, se conoció que los señores Manuel Villamizar, Ferney López y Oscar Fuentes, no tenían vínculos con organizaciones criminales; por el contrario, se dedicaban a conducir taxis en el municipio de Puerto Caicedo y sus alrededores. Así se constató en declaraciones como la del señor Adelfo Riaño, quien señaló que:

Me llamaron a decirme que habían matado a mis amigos Ferney López y Oscar Fuentes, que se enfrentaron a bala con el ejército. No entendía lo que pasó, esa mañana yo había contratado un servicio de transporte con ellos. Los conocía hace años, ellos eran taxistas y se dedicaban a eso en Puerto Caicedo. No se metían con nadie y no buscaban problemas, tampoco los veíamos por Villagarzón

187. La carencia de antecedentes penales por parte de las víctimas fue confirmada por oficio del 4 de agosto de 2008 enviado por un agente del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a la señora Clara Osuna, funcionaria del CTI.

188. En relación con el niño, identificado como Samuel Felipe Villamizar, se estableció que fue entregado a Bienestar Familiar después del operativo militar y allí fue recogido por la señora Amparo Arciniegas. Esto fue corroborado por medio del Acta de Reintegro Familiar suscrita el 23 de agosto de 2008 por el defensor de familia del centro zonal de Puerto Asís, el señor Diego Flórez. En el documento se refiere que el niño expresó que tenía su ropa ensangrentada cuando fue encontrado y en repetidas ocasiones mencionó que mataron a su papá.

189. Por estos hechos, el comandante del BIHVG, Coronel Armando Jesús Pastor López, abrió investigación disciplinaria preliminar No. 033/2008. No obstante, se declaró impedido para seguirla, dado que supuestamente fue testigo de los hechos; sobre ello, en su versión voluntaria ante la JEP, aseguró que su

impedimento se sustentó en el hecho de que acudió al lugar de los hechos cuando sus subordinados le hicieron saber que en el operativo fue hallado un menor de edad.

190. La investigación disciplinaria fue archivada, señalando que la actuación se hizo en salvaguarda de los derechos del señor Rodrigo Niño quien era víctima de extorsiones, así como en defensa de la propia integridad de los efectivos de la Compañía, al defenderse de los supuestos disparos recibidos por parte de los señores López Contreras, Villamizar y Fuentes.

191. En VV ante esta Jurisdicción, el Sargento Filadelfo Chávez Hernández señaló que las llamadas extorsivas que iban dirigidas al señor Rodrigo Niño eran reales, pero el operativo se ejecutó fuera de la ley, pues a las personas que iban en el taxi se les disparó sin que hubiesen presentado oposición y a las víctimas se les implantó un *“kit de legalización”*<sup>44</sup>. También aclaró que la planeación del despliegue militar estuvo a cargo de la Teniente María Bertilda Yanacona, quien impartió instrucciones sobre el paquete de dinero falso que se iba a entregar a los extorsionistas, conseguir las armas que iban a ser adjudicadas a los occisos y hacer los correspondientes disparos con esos elementos.

192. El Soldado Carlos Montaña Guamanga también informó en su Versión Voluntaria que una de las personas había sobrevivido al ataque del ejército y por ello él mismo se encargó de rematarlo:

Una de las personas alcanzó a salir y quedó sobre la vía, entonces yo fui y miré a la persona, a la víctima y la persona estaba herida pero estaba viva, se veía respirar, entonces yo le dije al sargento Filadelfo Chávez, “¿qué hacemos?” y el me recordó que “la orden de la teniente María Bertilda es que se debe dar de baja, nada de heridos”, entonces ninguno le quería disparar, yo le disparé a esa persona. Entonces yo le puse el arma a esa persona que yo le disparé y accioné el arma en la mano de la persona. También moví un poco el cuerpo de esa persona y quedó como enderezado en el suelo<sup>45</sup>.

<sup>44</sup> Ese término de “kit de legalización” se refiere a un conjunto de elementos que utilizaban los soldados para simular los combates y poder presentar de manera falsas esos homicidios como bajas en combate. En el caso puntual se tiene constancia de armas cortas, revólveres, a veces granadas o pequeños explosivos como componentes de esos kits.

<sup>45</sup> Jurisdicción Especial para la Paz. Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Versión Voluntaria de Carlos Montaña Guamanga. Expediente Legali Caso 03, Subcaso Putumayo.



193. El Soldado Montaña Guamanga también reconoció que el señor Oscar Fuentes no tenía ningún arma, sino que, al siguiente día, cuando tuvieron noticia de su ubicación, acudió al lugar de los hechos con el sargento Filadelfo Chávez y otros soldados para dejar en los alrededores un revólver que incautó en la operación donde murieron Jhonier Vásquez, Tulio Barahona y Luis José Paniagua, junto con munición, e incluso hizo que el occiso tocara el elemento para que tuviera sus huellas.

“Cuando reporto que encuentro ese cuerpo, me llama la teniente María Bertilda Yanacona disgustada para que vaya al Batallón, diciéndome que no entendía por qué había otra persona muerta y me dijo que ya sabía qué tenía que hacer. Conseguí un revolver y fui para el sitio de los hechos, donde había quedado la víctima e hice que él tocara el arma y me devolví y dejé el arma tirada en el camino cerca de él y luego me regresé”

194. Este hecho muestra elementos característicos del patrón, dado que fue un operativo adelantado en contra de un supuesto grupo de personas que estaban cometiendo delitos, pero con el propósito de ejecutar a los presuntos implicados, excediendo las facultades que tienen las Fuerzas Militares cuando despliegan actividades que deberían ser asignadas a los cuerpos de policía, en contravención al Derecho Internacional Humanitario y las subreglas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

195. En la siguiente sección de la decisión se abordarán los elementos de la calificación jurídica de las conductas descritas en los patrones, determinadas y ejemplificadas con los casos representativos. Posteriormente se analizará la responsabilidad individual de quienes serán identificados como máximas o máximos responsables o partícipes determinantes por los hechos materia de la decisión.

#### **D. CALIFICACIÓN JURÍDICA PROPIA DE LOS HECHOS Y CONDUCTAS**

196. Tal como lo dispone el literal h) del artículo 79 de la LEJEP, una vez recibidas las Versiones Voluntarias y contrastada la información recopilada por la Sala de Reconocimiento, “en caso de apreciar que existen bases suficientes para entender que la conducta existió, que la persona mencionada participó y que la conducta corresponde a tipos penales no amnistiabiles, deberá ponerlos a disposición de los presuntos responsables”. Para esto, en primer lugar se

determinarán los parámetros de la calificación jurídica propia que debe realizar la Sala teniendo en cuenta las particularidades del subcaso y, en segundo lugar, se indicarán los tipos penales del Código Penal así como los crímenes internacionales en los que se subsumen las conductas determinadas, incluyendo un análisis detallado de los elementos contextuales de estos últimos.

197. Por lo tanto, la Sala procederá a calificar jurídicamente los hechos determinados en este auto, es decir, a tipificarlos o, en palabras más sencillas, especificará a qué crímenes corresponden. Para esto (i) se aclarará cuál es el marco jurídico (fuentes del derecho) que la Sala considera aplicable en este caso, así como la metodología utilizada para realizar la calificación, (ii) se explicará por qué las muertes presentadas ilegítimamente como bajas en combate constituyen crímenes de guerra, (iii) se hará referencia a la comisión del crimen de desaparición forzada y, para finalizar esta sección, (iv) se mostrará por qué estos hechos individuales de homicidio y desaparición forzada fueron cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil y por tanto también constituyen crímenes de lesa humanidad. De esta manera, se demostrará que los hechos y conductas determinados en esta decisión corresponden a tipos penales no amnistiabiles.

198. El resultado del análisis y de la contrastación realizada por la Sala es una calificación jurídica de las conductas mencionadas como crímenes de guerra de homicidio en persona protegida –tanto en los términos del Código Penal colombiano (artículo 135 CP), como en los términos del DIH y del Derecho Penal Internacional (crimen de guerra de homicidio)- y como crímenes de lesa humanidad de asesinato de los 67 hechos, que responden al patrón macrocriminal identificado en esta decisión.

199. Para lo previo, se toman como base los hechos sobre los que se dispone de más información por tanto resultan más ilustrativos. Adicionalmente, de esas 67 muertes, 37 se calificarán como crímenes de lesa humanidad en cuanto constituyen desaparición forzada de personas, con fundamento en los hallazgos particulares obtenidos por la Sala, y 25 se enmarcan en el crimen de lesa humanidad denominado tortura. Aunque no se encontró evidencia de que este segundo delito se haya cometido en todos los casos, es necesario llamar la atención sobre su consumación, así como identificar a sus responsables, dado que refleja circunstancias que demuestran las particularidades que tuvo el patrón criminal en el Putumayo durante 2005 y 2009 así como sus variaciones.

## **D.1. Marco jurídico aplicable para la calificación jurídica propia de los hechos y conductas**

200. La nota distintiva de este régimen especial es la posición del derecho internacional en el sistema de fuentes, dado que, por mandato constitucional expreso, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional son fuente de derecho en la JEP. La calificación jurídica “propia” y la facultad de la JEP para “recalificar” conductas de manera distinta a la justicia ordinaria, obedecen en buena medida, a este régimen.

201. Calificar jurídicamente una conducta implica determinar el significado de la acción o comportamiento, para enseguida definir su conformidad con la ley penal y la consecuencia que le corresponde. Recalificar la conducta, por su parte, quiere decir que varía el análisis jurídico original por uno nuevo que le otorga al delito el estatus que verdaderamente debe tener<sup>46</sup>.

202. La Constitución y la ley, en aplicación del Acuerdo Final, conceden la facultad a la JEP realizar la calificación jurídica propia, cuando haya lugar a ello, de las conductas de su competencia; con ese objetivo, la autorizan a acudir a un vasto conjunto de fuentes normativas que constituyen el derecho sustantivo aplicable en la transición y no se limitan al derecho penal nacional. Según el inciso 6 del artículo transitorio 5 del Acto Legislativo 1 de 2017, al adoptar sus resoluciones y sentencias, la JEP hará una calificación jurídica propia del Sistema respecto a las conductas objeto del mismo, calificación que se basará en el Código Penal colombiano y/o en las normas de Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos (DIDH), Derecho Internacional Humanitario (DIH) o Derecho Penal Internacional (DPI), siempre con aplicación obligatoria del principio de favorabilidad.

<sup>46</sup> Jurisdicción Especial para la Paz. Tribunal de Paz. Sección de Apelación. Auto TP-SA-1503 del 13 de septiembre de 2023. “Así las cosas, la jurisprudencia sobre esta materia ha definido los eventos en los que el juez transicional puede efectuar una calificación propia o diferente a la realizada por el juez ordinario, en especial, cuando la calificación hecha por la JPO es insuficiente o inadecuada para expresar la realidad de lo ocurrido en el conflicto. En estos casos, la JEP está obligada a hacer su propia delimitación de la conducta punible, en el espacio y en el tiempo. De manera que, cuando se advierta la existencia de un tipo penal más específico y que mejor recoja el injusto, esto es, la necesidad de ‘analizar los hechos desde una nueva perspectiva y, si es del caso, recalificarlos -en sentido amplio-, para revelar de un mejor modo el alcance y lesividad de estos, o hacer nuevas imputaciones que complementen las hasta ahora efectuadas por las autoridades ordinarias’. También podrá variarse la tipicidad de la conducta con fundamento en disposiciones nacionales o internacionales, lo que da pie entonces a efectuar una recalificación en sentido estricto, en aras de garantizar que la valoración jurídica responda a la realidad del conflicto armado, como presupuesto para su superación definitiva. // De modo que, la recalificación de la conducta supone, entre otras cosas, acudir al tipo penal más adecuado a las necesidades del derecho transicional. Sin que, por ello, el operador judicial esté necesariamente obligado a calificar el acto como un crimen internacional, pues podrá ocurrir que el derecho doméstico recoge de mejor manera la naturaleza de la conducta frente al derecho penal internacional u otra fuente normativa aplicable”.

203. Además, el inciso 2º del artículo 23 de la Ley 1957 de 2019, Ley Estatutaria de la JEP, reitera esa previsión constitucional pero con un agregado que ofrece mayor claridad a los alcances de la calificación propia: La calificación resultante podrá ser diferente a la efectuada con anterioridad por las autoridades judiciales, disciplinarias o administrativas para la calificación de esas conductas, por entenderse aplicable como marco jurídico de referencia el Derecho Internacional<sup>47</sup>.

204. Según se ve, la calificación propia puede distanciar a la JEP del entendimiento y de las valoraciones efectuadas por la JPO sobre diversos aspectos, cuando ella advierte que la inicial no es, por cualquier causa, la mejor forma de abarcar y captar jurídicamente los hechos tal y como sucedieron<sup>48</sup>. La finalidad principal de la calificación propia, además de establecer la verdad del daño causado y contribuir a la memoria del conflicto, es determinar el tratamiento transicional que le corresponde.

205. La figura jurídica bajo estudio también adquiere, por disposición de la Constitución, la forma de un verdadero deber. El texto superior da por sentado que la JEP la “hará” cuando devenga necesario, sin ofrecerle un margen de acción en contrario. La literalidad del inciso 6º del artículo transitorio 5 del Acto Legislativo 1 de 2017 y del inciso 2º del artículo 23 de la Ley 1957 de 2019 pone en evidencia que es igualmente válido que la JEP funde la calificación jurídica en cualquiera de sus fuentes normativas o en una concurrencia armonizada de ellas.

206. El poder de reforma constitucional y el legislador estatutario establecieron que la JEP “podrá” elegir el derecho sustantivo a partir del cual recalificará las conductas que así lo requieran. De otra parte, la norma superior conectó los cuerpos jurídicos a disposición de la Jurisdicción con la conjunción disyuntiva “o” y la conjunción compuesta “y/o”, en aras de significar, nuevamente, que la JEP puede elegir entre estos.

207. Atendiendo a lo convenido en el Acuerdo Final, el Acto Legislativo 01 de 2017 introdujo en el texto constitucional una cláusula especial sobre el “tratamiento diferenciado” que les corresponde a los agentes del Estado en la JEP<sup>49</sup> y un capítulo séptimo denominado “Las normas aplicables a los miembros de la fuerza pública para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera”. El primer artículo de dicho capítulo establece que

<sup>47</sup>Ley 1957 de 2019. Artículo 23. Inciso 2.

<sup>48</sup> Ibidem.

<sup>49</sup> Art 17 al 01 de 2017



“en virtud del carácter inescindible de la Jurisdicción Especial para la Paz, en relación con los Miembros de la Fuerza Pública que hubieren realizado conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, el tratamiento será **simétrico** en algunos aspectos, **diferenciado** en otros, pero siempre **equitativo, equilibrado y simultáneo**”<sup>50</sup>.

208. En el segundo artículo del mismo capítulo se regula de manera especial la calificación jurídica propia de la JEP para los miembros de la Fuerza Pública, estableciendo que la JEP “hará una calificación jurídica propia del Sistema respecto a las conductas objeto del mismo, calificación que se basará, con estricta sujeción al artículo 29 de la Constitución Política, en el Código Penal colombiano vigente al momento de la comisión del hecho, en las normas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y de Derecho Internacional Humanitario (DIH)” (artículo transitorio 22). Así, el Acto Legislativo 01 de 2017 distinguió parcialmente el marco jurídico especial aplicable a los excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC-EP, los agentes del Estado no miembros de la Fuerza Pública y los terceros civiles de aquel previsto para los miembros de la Fuerza Pública.

209. La norma constitucional especial para los miembros de la Fuerza Pública se diferencia de la cláusula general sobre fuentes del derecho en la JEP en dos elementos sustanciales. De una parte, en que para los miembros de la Fuerza Pública se excluye la aplicación **alternativa** del ordenamiento doméstico o el internacional. De otra, en la posibilidad de aplicar el Derecho Penal Internacional en la calificación jurídica para los miembros de la Fuerza Pública, conservando solamente como fuentes del derecho internacional aplicables, el DIDH y el DIH.

210. La disposición constitucional especial sobre fuentes del derecho en la JEP para los miembros de la Fuerza Pública fue reproducida en el artículo 23 de la LEAJEP y con ocasión de la revisión automática del Proyecto de Ley Estatutaria, la Corte Constitucional examinó la constitucionalidad de la exclusión del DPI para los miembros de la fuerza pública, encontrando que la norma estatutaria se ajusta a la Constitución, pues simplemente remite a lo previsto en el artículo 22 del Acto Legislativo 01 de 2017. En consecuencia, la Corte advirtió que respecto de los miembros de la Fuerza Pública prima la regulación especial del artículo 22 sobre la general del derecho aplicable en la JEP prevista en el artículo 5 del mismo Acto Legislativo. Sin embargo, agregó que **“Lo anterior no impide que, en cada caso concreto, la JEP pondere la norma especial aplicable para la Fuerza**

<sup>50</sup> Acto Legislativo 01 de 2017. Artículo transitorio 17.

**Pública, con los derechos de las víctimas para que los hechos sufridos no queden en la impunidad, dentro de un parámetro de igualdad entre ellas, y con la aplicación ponderada del principio de favorabilidad penal expuesto antes**<sup>51</sup> (negrillas y subrayados fuera del texto original). La Corte concluyó que, a pesar de la exclusión en el artículo estudiado del DPI como derecho aplicable respecto de los miembros de la Fuerza Pública, “no procede la declaración de inconstitucionalidad de la norma, por cuanto la JEP tiene competencia para decidir sobre el particular en cada caso en concreto”<sup>52</sup>.

211. De manera coherente con los términos del capítulo quinto del Acuerdo Final, el artículo 46 de la Ley 1820 de 2016 dispone que la renuncia a la persecución penal, en cuanto mecanismo de tratamiento penal especial, mediante el cual se extingue la acción penal, no procede respecto de los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, el desplazamiento forzado y el reclutamiento o sustracción de menores.

212. Así, con base en las normas constitucionales, estatutarias y legales descritas, esta Sala de Justicia considera que en la calificación jurídica propia de los hechos y conductas atribuibles a los miembros de la Fuerza Pública debe aplicar **armónicamente**<sup>53</sup> el derecho interno y el derecho internacional. Atendiendo el mandato constitucional expreso del artículo 22 transitorio, respecto de los miembros de la Fuerza Pública no cabe el uso **exclusivo** del derecho internacional.

213. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera necesario para la calificación jurídica de las conductas atribuibles a estos comparecientes, tomar el derecho interno como punto de referencia inicial. La visión armónica de las fuentes del derecho para la calificación jurídica propia de las conductas respecto de los miembros de la Fuerza Pública que adopta en este caso la SRVR significa que la calificación jurídica se hará, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional, conforme a la legislación nacional y luego, según resulte

<sup>51</sup> Corte Constitucional. Sentencia C-080 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

<sup>52</sup> Ibidem.

<sup>53</sup> Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas. Caso No. 01. Toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por las FARC-EP (renombrado por medio de este Auto). Auto No. 19 de 2021. Párr. 667 (“La Sala Reconocimiento debe hacer una calificación jurídica propia utilizando de manera armónica el Derecho Penal colombiano, el Derecho Internacional Penal, el Derecho Internacional Humanitario y el derecho internacional de los Derechos Humanos”); Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2018. Párr. 189.

necesario, a la luz de las normas internacionales. Este ejercicio propio de armonización normativa se realizará en todo caso teniendo en cuenta los fines constitucionales de la JEP y los principios que rigen su trabajo, entre ellos, los principios de legalidad, favorabilidad y centralidad de las víctimas.

214. En atención al principio de legalidad, y especialmente a la prohibición de retroactividad, tal como lo explicó esta Sala en el Auto No. 19 de 2021, la calificación jurídica de las conductas se debe realizar conforme al derecho vigente en el momento en que estas fueron cometidas, para lo cual se deben considerar los distintos marcos normativos a disposición de esta Jurisdicción<sup>54</sup> incluyendo el derecho nacional y el internacional. Así, desde el punto de vista del primero, dado que en este subcaso se han identificado conductas realizadas entre los años 2002 y 2009 se tendrá como marco normativo base el Código Penal colombiano, expedido mediante la Ley 599 de 2000, el cual entró en vigencia a partir del 24 de Julio de 2001.

215. El derecho internacional, especialmente el DIH y el DIDH, se tomará como punto de referencia para la interpretación de los tipos penales previstos en el CP colombiano, permitiendo la caracterización adecuada de las conductas, atendiendo a su magnitud y gravedad. En este sentido, para la calificación jurídica se tendrán en cuenta instrumentos internacionales en vigor para Colombia en el momento en que se realizaron las conductas en cuestión. Así ocurre, por ejemplo, con el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra o la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas. De igual forma, se aludirá a normas y jurisprudencia internacionales con el fin de mostrar las coincidencias existentes entre las definiciones nacionales e internacionales de algunos crímenes y evidenciar que, en estos casos, el desarrollo del derecho colombiano y el internacional se ha orientado en la misma dirección.

216. Esta forma de armonizar el derecho penal colombiano y el derecho internacional permitirá a la Sala demostrar que, a la luz de estos dos ordenamientos jurídicos, los hechos determinados en esta decisión eran criminales desde el momento mismo en que se cometió el primero de ellos. Es decir, sin importar los motivos o razones con las que aparentemente se hayan querido justificar, se trata de conductas que, de antemano, eran jurídicamente reprochables no solo por decisión del pueblo colombiano, el cual se expresó en este sentido a través del legislador elegido democráticamente, al criminalizarlas en el ordenamiento jurídico interno, sino también por la comunidad

<sup>54</sup> Jurisdicción Especial para la Paz. Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Auto 019 de 2021.



internacional, en la cual existe consenso sobre la necesidad de sancionar comportamientos inhumanos como los aquí descritos<sup>55</sup>.

217. Hasta aquí la Sala ha explicado el alcance específico que le dará en este caso concreto a la letra de la cláusula del artículo 22 transitorio constitucional con relación a la calificación jurídica propia especial para los miembros de la Fuerza Pública. Ahora la Sala abordará la cuestión relativa a la aplicabilidad del DPI en el caso objeto de esta providencia, conforme a la expresa autorización que la Corte Constitucional le confirió a los jueces de la JEP al revisar el artículo 23 de la LEAJEP que reproduce el 22 transitorio constitucional. Como se citó previamente, la Corte encontró que el artículo 23 estatutario se ajusta a la Constitución y que debe primar la norma especial, sobre calificación jurídica propia para los miembros de la Fuerza Pública (artículo 22 transitorio constitucional). Sin embargo, la Corte advirtió que esto no impide que el juez de la JEP “**pondere la norma especial aplicable para la Fuerza Pública, con los derechos de las víctimas para que los hechos sufridos no queden en la impunidad, dentro de un parámetro de igualdad entre ellas**”.

218. Al respecto, esta Sala realizó en otros autos un juicio estricto de igualdad para determinar si era justo, legítimo y no discriminatorio que las víctimas de los excombatientes de las antiguas FARC pudieran ver los delitos de los que fueron objeto calificados en términos del derecho penal internacional, como crímenes de lesa humanidad, mientras que las víctimas de los miembros de la Fuerza Pública no tengan este mismo derecho. En el Auto 125 de 2021, luego reiterado en el Auto Sub-D 081 de 2023, se determinó que no resultaba admisible la exclusión del DPI del derecho sustancial aplicable a miembros de la Fuerza Pública, puesto que esa medida no superara el juicio estricto de igualdad, careciendo así de una finalidad constitucionalmente válida.

219. Este auto retoma esos argumentos presentados previamente por la Sala y reitera que el DPI no queda completamente excluido y puede ser tenido en cuenta, al calificar jurídicamente las conductas atribuibles a miembros de la Fuerza Pública, junto con el DIH y el DIDH, como parte de las fuentes de derecho aplicables en virtud del principio de legalidad extendida. Por tanto, el hecho de que el artículo transitorio 22 del Acto Legislativo 01 de 2017 no mencione al DPI como marco normativo aplicable a los miembros de la Fuerza Pública, no

---

<sup>55</sup> Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Preámbulo, párrafos cuarto, quinto y sexto: “Recordando que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales”.



constituye un obstáculo para calificar las conductas como crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad<sup>56</sup>.

220. Respecto a los crímenes de guerra, es necesario reiterar que estos son descripciones de infracciones graves al DIH, marco normativo que sí se menciona en el artículo transitorio 22. Pero, además, como se mostrará más adelante, el legislador colombiano, en un esfuerzo por incorporar los crímenes de guerra en la legislación interna, ha incluido en el CP algunos tipos penales que coinciden en sus elementos estructurales con esos crímenes internacionales, tal como ocurre con el homicidio en persona protegida.

221. Adicionalmente, aunque en el CP no existe una definición de crímenes de lesa humanidad, en él sí se tipificaron varias de las conductas individuales que, conforme al derecho internacional, de ser cometidas como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, se pueden considerar como crímenes de esta clase, entre ellas, el homicidio y la desaparición forzada de personas. Es decir, en este punto solo habría que acudir al derecho internacional, realizando una doble subsunción<sup>57</sup>, para mostrar la verdadera relevancia jurídica de estas conductas, la cual se desprende de la conexión que existe entre ellas o, dicho de otra manera, del contexto en que fueron cometidas.

222. Con relación a la aplicación del Estatuto de Roma, también se reitera que la disposición transitoria a la que se acogió el Estado colombiano con base en su artículo 124 y relativa a la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) para juzgar crímenes de guerra cometidos en el territorio nacional, no afecta la competencia de la JEP para pronunciarse sobre las infracciones graves al DIH en las que hayan incurrido los miembros de la Fuerza Pública.

## **D.2. Crímenes de Lesa Humanidad**

223. Los crímenes de lesa humanidad (CLH) están contemplados en dos sistemas jurídicos: el internacional y el nacional. El primero de estos está regulado por el Estatuto de Roma y los documentos que lo desarrollan, la jurisprudencia de los tribunales internacionales, como por ejemplo la Corte Penal Internacional, Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, entre otros. Por otro lado, en el sistema nacional, la

<sup>56</sup> Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas. Auto No. 125 de 2021.

<sup>57</sup> Como antecedente en la legislación nacional es posible mencionar, nuevamente, la Ley 1719 de 2014; ver SRVR JEP. Auto No. 19 de 2021. Párr. 699 ss.

categoría bajo estudio está consignada en el Código Penal colombiano, la Ley 742 de 2002 y los pronunciamientos de las altas cortes.

224. En desarrollo de lo anterior, el Estatuto de Roma consideró que los CLH se tipifican cuando se lleva a cabo cualquiera de los actos prohibidos que fueron consignados en la lista del artículo 7.1, cuando la conducta se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque<sup>58</sup>. Partiendo de lo previo, la Corte Penal Internacional interpretó el artículo 7 dictaminando que los CLH se deben cometer mientras que el perpetrador sabía que esta conducta era parte de un ataque como elemento contextual<sup>59</sup>.

225. En adición, la Corte Suprema de Justicia determinó los elementos de los CLH basados en el artículo 7 del ER, cuyas características determinaban, a su vez, los requisitos diferenciadores con otros crímenes del sistema jurídico colombiano, dentro de los cuales, identificó:

i) Corresponden a ultrajes especialmente lesivos de la dignidad humana que degradan de forma grave los más caros intereses del ser humano, como la vida, la libertad, la integridad física, la honra, entre otros.

ii) Se trata de eventos sistemáticos y generalizados -no aislados o esporádicos-, que representan una política deliberada del Estado ejecutada por sus agentes o una práctica inhumana, tolerada por el mismo, desplegada por actores no estatales.

Que el ataque sea generalizado significa que puede ser un acto a gran escala o múltiples actos que involucran un número importante de víctimas. Por su parte, la sistematicidad resulta de que la conducta sea el resultado de una planificación metódica, inmersa en una política común.

iii) Pueden ser cometidos en tiempo de guerra o de paz.

iv) El sujeto pasivo primario de las conductas es, fundamentalmente, la población civil y, en un plano abstracto pero connatural a la ofensiva contra la individualidad del ser humano y su sociabilidad, la humanidad en general<sup>60</sup>.

226. En este sentido, basado en el ordenamiento jurídico internacional y nacional se pueden extraer los siguientes elementos constitutivos del CLH: (i) un

<sup>58</sup> Estatuto de Roma. Artículo 7

<sup>59</sup> Corte Penal Internacional. Cámara de Juicio. Fiscalía v, Bosco Ntaganda. prr. 660

<sup>60</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. SP2546-2018

ataque<sup>61</sup>, (ii) sistemático o generalizado<sup>62</sup>, (iii) a cualquier población civil<sup>63</sup>, (iv) el conocimiento del ataque<sup>64</sup>, (vii) como producto de una política<sup>65</sup>. A continuación, se hará un desarrollo de estos:

### D.2.1. Ataque contra una población civil

227. La Sala determina que no cualquier conducta tiene las calidades para configurar un crimen de lesa humanidad, sino que esta debe cumplir las siguientes características: (i) debe encuadrarse en la lista de actos prohibidos por el Estatuto de Roma, (ii) debe llevarse a cabo contra la población civil y (iii) el ataque debe ser parte de una política de la organización. Con lo anterior en mente, la Sala de Reconocimiento procederá a presentar lo que considerará como población civil y política de un grupo armado.

### D.2.2. Población civil

228. En lo que respecta al término *población civil*, se referirá a todos los civiles sin ninguna distinción y por oposición a miembros de las Fuerzas Armadas y otros combatientes legítimos<sup>66</sup>. Para detallar la premisa, la JEP ya ha tomado posición sobre el término en cuestión, aclarando que no tiene por qué atacarse a una población entera<sup>67</sup>. Además, esta Sala ha establecido en decisiones previas que, para admitir que un ataque estuvo dirigido contra “una población civil”, no se requiere que todas y cada una de las víctimas individuales sean civiles<sup>68</sup>.

### D.2.3. Política

229. De acuerdo con el Artículo 7.2.a del Estatuto de Roma, para que se configure un Crimen de Lesa Humanidad los actos deben ser cometidos en virtud de, o en promoción de, una política estatal u organizacional; es decir se requiere

<sup>61</sup> Elementos de los Crímenes de la CPI. Crímenes de Lesa Humanidad. Introducción. pr 3. Kunarac et al., ICTY A. Ch., 12 June 2002, para. 86. Akayesu, ICTR T. Ch. L, 2 September 1998, para. 581. Taylor, SCSL T. Ch., 18 May 2012, para. 506.

<sup>62</sup> Elementos de los Crímenes de la CPI. Crímenes de Lesa Humanidad. Introducción. pr 2. Haradinaj et al. ICTY

<sup>63</sup> Elementos de los Crímenes de la CPI. Crímenes de Lesa Humanidad. Introducción. pr 3

<sup>64</sup> Tadić, ICTY A. Ch., 15 July 1999, para. 271. Semanza, ICTR T. Ch., 15 May 2003, para. 326. Kojelac, ICTY T. Ch I, 15 March 2002, para. 127. Kunarac, ICTY A. Ch., 12 June 2002, para. 96. Blaskic, ICTY A. Ch., 29 July 2004, para. 101.

<sup>65</sup> Elementos de los Crímenes de la CPI. Crímenes de Lesa Humanidad. Introducción. pr 3

<sup>66</sup> Jurisdicción Especial para la Paz. Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad. AUTO SUB D- SUBCASO HUILA-081 de 2023 prr. 1029. Tribunal Penal Internacional para Rwanda. Sala de Primera Instancia I. Caso ICTR-96-3-T. Fiscalía vs Andersen Nderubumwe Rutaganda. Sentencia. 6 de diciembre de 1999; Caso ICTR-96-4-T. Fiscalía vs. Jean Paul Akayesu. Sentencia. 2 de septiembre de 1998; Corte Penal Internacional. Sala de Primera Instancia II. Caso ICC-01/04-01/07-3436. Fiscalía vs. Germain Katanga. Sentencia 7 de marzo de 2014.

<sup>67</sup> Jurisdicción Especial para la Paz. Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad. Auto\_SRVR-SUB-D-055\_14-julio-2022 pr 646

<sup>68</sup> Jurisdicción Especial para la Paz. Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad Auto\_SRVR-125\_02-Julio-2021 prr 632, Auto 19 de 26 de enero de 2021, párr. 746, Auto 128 de 7 de julio de 2021, párr. 717.

que haya un vínculo entre el ataque y la política. En este sentido, la Corte Penal Internacional se pronunció determinando los elementos que permiten inferir una política incluyendo:

- (i) El hecho de que el ataque haya sido planificado o dirigido,
- (ii) la existencia de un patrón recurrente de violencia, por ejemplo, acciones repetidas que ocurren según una misma secuencia, (iii) el uso de recursos públicos o privados para promover la política, (iv) la participación de las fuerzas estatales u organizacionales en la comisión de crímenes, (v) declaraciones, instrucciones o documentación atribuibles al Estado o a la organización que aprueben o fomenten la comisión de crímenes, (vi) una motivación subyacente<sup>69</sup> y (vii) la existencia de preparativos o movilización colectiva orquestada y coordinada por dicho Estado u organización<sup>70</sup>.

#### **D.2.4. Sistemático o generalizado**

230. En lo que atañe a este requerimiento, esta Sala ha sentado una posición sobre los significados de cada uno de los términos. Por un lado, *generalizado* se reputa de un ataque a gran escala y dirigido contra una multiplicidad de víctimas<sup>71</sup>, de manera colectiva, sea de gravedad considerable<sup>72</sup>. Por consiguiente, el carácter generalizado de un ataque se debe establecer con base en todos los hechos relevantes para el caso<sup>73</sup>.

231. Por otra parte, la *sistematicidad* refleja el carácter organizado de los actos de violencia cometidos y la improbabilidad de su carácter fortuito, lo cual indica la existencia de un patrón criminal resultado de la repetición, deliberada y regular de conductas delictivas similares<sup>74</sup>.

se realizaron actos idénticos o se pueden identificar similitudes en las prácticas delictivas; (ii) se utilizó el mismo modus

<sup>69</sup> Corte Penal Internacional. Fiscalía v Katanga. Confirmación Ngudjolo pr 396

<sup>70</sup> Corte Penal Internacional. Fiscalía v Katanga pr 1109. Fiscalía v Ntaganda 674

<sup>71</sup> Jurisdicción Especial para la Paz. Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad. Auto SUB D- SUBCASO HUILA-081 de 2023 pr 1027

<sup>72</sup> Jurisdicción Especial para la Paz. Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad Auto\_SRVR-125\_02-Julio-2021 pr 640

<sup>73</sup> Corte Penal Internacional. Fiscal v. Dominic Ongwen. Prr. 2681.

<sup>74</sup> Jurisdicción Especial para la Paz. Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad. Auto sub d- subcaso huila-081 de 2023 pr 1027; Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Fiscal v. Musema, 27 enero 2000 párr. 204; Corte Penal Internacional. Sala de Primera Instancia II. Fiscalía vs. Germain Katanga. Sentencia 7 de marzo de 2014; Tribunal Penal Internacional para Rwanda. Fiscalía vs Andersen Nderubumwe Rutaganda. Sentencia. 6 de diciembre de 1999; Caso ICTR-96-4-T. Fiscalía vs. Jean Paul Akayesu. Sentencia. 2 de septiembre de 1998.



operandi; o (iii) las víctimas fueron tratadas de manera similar en una amplia área geográfica<sup>75</sup>.

#### **D.2.5. Conocimiento del ataque**

232. En adición, los CLH requieren que el compareciente conozca del ataque. Este elemento ha sido desarrollado por la Corte Penal Internacional, estableciendo que no es necesario probar que el perpetrador conocía todas las características del ataque o que estaba al tanto de los detalles precisos del plan o política del Estado u organización<sup>76</sup>, ya que este requisito se satisfará si se demuestra que el perpetrador estaba al tanto de las circunstancias que establecían el ataque generalizado o sistemático contra una población civil<sup>77</sup>.

233. Enunciados los elementos anteriores, la Sala procederá hacer el estudio de los mismos respecto de los crímenes a determinar en este auto, a saber, asesinato, desaparición forzada y tortura como crímenes de lesa humanidad.

#### **D.2.6. Asesinato como Crimen de Lesa Humanidad**

234. El asesinato como acto prohibido contiene tres elementos que se pueden extraer del Estatuto de Roma:

Que el autor haya dado muerte a una o más personas.

Que la conducta se haya cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil.

Que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil o haya tenido la intención de que la conducta fuera parte de un ataque de ese tipo<sup>78</sup>.

235. Referente a este primer requerimiento, a partir de los hechos ilustrativos y las diversas fuentes con las que esta Sala contrastó, es claro que los comparecientes mencionados en esta providencia estuvieron en una estructura que llevaba a cabo el asesinato de civiles para presentarlos como bajas en combate de manera ilegítima; lo anterior para conseguir beneficios, como por ejemplo días de vacaciones o dinero por la presentación se estos asesinatos.

<sup>75</sup> Corte Penal Internacional. Fiscalía v Ntaganda pr 693. Fiscalía v Katanga pr. 1113

<sup>76</sup> Corte Penal Internacional. Fiscalía v Ntaganda pr 1170

<sup>77</sup> Ibidem

<sup>78</sup> Elementos de los crímenes, Estatuto de Roma. Artículo 7.1.a

236. Los homicidios de las 67 personas que se estudian en esta providencia fueron parte de un ataque generalizado contra población civil, cometido bajo el supuesto contexto de combates contra la delincuencia común o milicias.

#### **D.2.7. Tortura como Crimen de Lesa Humanidad**

237. La tortura como acto prohibido de los CLH se configura cuando se cumplen los siguientes elementos que se pueden extraer del Estatuto de Roma:

1. Que el autor haya infligido a una o más personas graves dolores o sufrimientos físicos o mentales.
2. Que el autor tuviera a esa o esas personas bajo su custodia o control.
3. Que el dolor o el sufrimiento no haya sido resultado únicamente de la imposición de sanciones legítimas, no fuese inherente ni incidental a ellas.
4. Que la conducta se haya cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil.
5. Que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil o haya tenido la intención de que la conducta fuera parte de un ataque de ese tipo<sup>79</sup>.

238. Los elementos anteriormente mencionados se evidencian en el hecho ilustrativo 2, ya que al ver los dictámenes de medicina legal se pueden evidenciar flagelos en el cuerpo de las víctimas que conducen a esta Sala a creer de manera razonada que se da el requerimiento para configurar la tortura.

239. Además, es claro que los agentes de la fuerza pública tenían bajo su custodia en y control las víctimas, ya que se evidencia que los actores armados conducían y retenían de manera ilegal a las personas que posteriormente ejecutaría extrajudicialmente.

240. Referente a los últimos dos elementos necesarios para determinar un crimen de lesa humanidad, la Sala evidencia que estas actuaciones sacian parte de un plan claro y estructurado con el cual se no da paso a la consumación de conductas de manera aleatoria, donde el conocimiento de las personas aquí imputadas se desprende de una participación escalonada de las actuaciones por medio de cadenas de mando fácticas y estipuladas en la normativa colombiana.

<sup>79</sup> Elementos de los crímenes, Estatuto de Roma. Artículo 7.1.f

## D.2.8. Desaparición forzada como crimen de lesa humanidad

241. La desaparición forzada como acto prohibido contiene los siguientes elementos extraídos del Estatuto de Roma:

1. Que el autor: a) Haya aprehendido, detenido o secuestrado a una o más personas; o b) Se haya negado a reconocer la aprehensión, la detención o el secuestro o a dar información sobre la suerte o el paradero de esa persona o personas.
2. a) Que tal aprehensión, detención o secuestro haya sido seguido o acompañado de una negativa a reconocer esa privación de libertad o a dar información sobre la suerte o el paradero de esa persona o personas; o b) Que tal negativa haya estado precedida o acompañada de esa privación de libertad.
3. Que el autor haya sido consciente de que: a) Tal aprehensión, detención o secuestro sería seguido en el curso normal de los acontecimientos de una negativa a reconocer la privación de libertad o a dar información sobre la suerte o el paradero de esa persona o personas; o b) Tal negativa estuvo precedida o acompañada de esa privación de libertad.
4. Que tal aprehensión, detención o secuestro haya sido realizada por un Estado u organización política o con su autorización, apoyo o aquiescencia.
5. Que tal negativa a reconocer la privación de libertad o a dar información sobre la suerte o el paradero de esa persona o personas haya sido realizada por un Estado u organización política o con su autorización o apoyo.
6. Que el autor haya tenido la intención de dejar a esa persona o personas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.
7. Que la conducta se haya cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil<sup>80</sup>.

242. Las conductas cometidas y mencionadas en esta decisión denotan que ocurrieron aprehensiones o detenciones de personas por parte del BIHVG, seguidas de un encubrimiento y negación sobre el paradero de las mismas tras haber sido asesinadas y reportadas como bajas en combate; además, que esas desapariciones fueron cometidas como parte de un ataque generalizado contra la población civil.

<sup>80</sup> Elementos de los crímenes, Estatuto de Roma. Artículo 7.1.i

### D.3. Crímenes de Guerra

243. A continuación, se determinarán los criterios de calificación jurídica propia teniendo en cuenta las especificidades del caso. Para esto, primero es necesario señalar el marco jurídico aplicable, una vez realizado, se ahondará en detalle sobre el porqué las muertes presentadas ilegítimamente como bajas en combate constituyen crímenes de guerra.

244. Como ya se ha mencionado, la JEP hace una calificación jurídica propia que se debe basar en el Código Penal colombiano y en las normas Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario o Derecho Penal Internacional<sup>81</sup>. Esto implica que la JEP no solo está en obligación de tener en cuenta las conductas incluidas en el Código Penal colombiano, sino también aquellas contempladas en el derecho internacional.

245. En concordancia con el análisis del contexto y con la identificación de patrones macrocriminales realizada, es posible calificar las conductas investigadas como crímenes de guerra que equivalen a unas infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario<sup>82</sup>. De acuerdo a los artículos 8.2.c.i y 8.2.e.i del Estatuto de Roma, las muertes violentas causadas por integrantes del Batallón de Infantería Héroes del Guamez entre 2005 y 2009, que han sido determinadas en esta providencia, contienen los elementos materiales que corresponden al crimen de guerra de homicidio y al crimen de guerra de dirigir ataques contra la población civil.

#### D.3.1. Elementos de los crímenes de guerra

246. De forma general, los crímenes de guerra son en sí mismos violaciones a las reglas consuetudinarias o tratados pertenecientes al cuerpo del Derecho Internacional Humanitario de los conflictos armados.<sup>83</sup> La noción de crímenes de guerra forma parte de un núcleo de crímenes internacionales de la más alta gravedad y la noción adoptada en el Estatuto de Roma abarca violaciones graves, violaciones de excepcional gravedad o infracciones graves del derecho de los tratados y del derecho consuetudinario<sup>84</sup>.

<sup>81</sup> Constitución Política de 1991, Acto Legislativo 01 de 2017, Artículo transitorio 5º.

<sup>82</sup> Marco normativo mencionado en el artículo transitorio 22.

<sup>83</sup> Cassese, Antonio. *International Criminal Law*. Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 43.

<sup>84</sup> Naciones Unidas, doc. A/50/22 Suplemento 22 (6-9-1995): Informe del Comité Especial sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional; Informe Comisión de Derecho Internacional 1986, Informe del Comité Especial sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional. Pág. 48, párs. 104-105. Ver también: Jurisdicción Especial para la Paz. Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos u Conductas. Auto Sub D- Subcaso Hula- 081 de 2023.



247. El elemento central para que pueda calificarse una conducta como un crimen de guerra es la ocurrencia de esta en el marco de un conflicto armado<sup>85</sup>:

Un conflicto armado existe cuando se acude a la fuerza armada entre Estados o a la violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados o entre tales grupos dentro de un Estado.<sup>86</sup>

248. Así las cosas, de la definición del conflicto armado desarrollada tanto jurisprudencialmente como doctrinalmente, se desprenden conceptos como el de la violencia armada, la prolongación en el tiempo y el hecho de que existan unos sujetos combatientes; todos estos se deben enmarcar dentro del territorio de un estado.<sup>87</sup> Adicionalmente, y a partir del desarrollo jurisprudencia y doctrinal, es posible afirmar que en los Crímenes de Guerra confluyen, como mínimo, tres elementos:

1. Deben ser graves violaciones a una regla internacional.
2. La regla violada debe pertenecer al derecho de los tratados o al derecho consuetudinario.
3. La violación debe implicar, desde el derecho aplicable, una responsabilidad criminal individual.<sup>88</sup>

249. En ese sentido, además de la existencia del conflicto armado, que es el punto de partida para analizar la posible comisión de un crimen de guerra, debe materializarse una violación grave al artículo 3 común de los convenios de Ginebra<sup>89</sup>, en el hecho ocurrido, la conducta debe ir dirigida en contra de no combatientes o de combatientes del lado opuesto<sup>90</sup> y, definitivamente, debe existir un nexo entre el hecho ocurrido y el conflicto armado<sup>91</sup>.

<sup>85</sup> Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Fiscal vs. Tadić, decisión sobre confirmación de cargos, caso IT-94-1-A, 14 de noviembre, 1995; Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Fiscal vs. Kupreškic y otros, caso IT-95-16-T, decisión del 14 de enero de 2000; Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Fiscal vs. Tihomir Blaskic, caso IT-94-14-T, decisión del 3 de marzo de 2000; Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia Fiscal vs. Kunarac y otros, caso IT-96-23 & IT-96-23/1-A, decisión del 12 junio 2002.

<sup>86</sup> Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Fiscal vs. Tadić, caso IT-94-1-A, 14 de noviembre, 1995. Par. 69.

<sup>87</sup> Triffterer, Otto. Commentary on the Rome Statue of the International Criminal Court, observer's notes, article by article. Portland, Nomos, 2008; Schabas, William. An introduction to the International Criminal Court. Cambridge, Cambridge University Press, 2007; Cassese, Antonio. *International Criminal Law*. Oxford, Oxford University Press, 2003.

<sup>88</sup> Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Fiscal vs. Tadić, caso IT-94-1-A, 14 de noviembre, 1995.

<sup>89</sup> Corte Constitucional, Sentencia C-291 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

<sup>90</sup> Corte Constitucional, Sentencia C-291 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; Comité Internacional de la Cruz roja. Humanitarian Law, Human Rights and Refugee Law. Three pillars, <https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/statement/6t7g86.htm#:~:text=International%20humanitarian%20law%2C%20refugee%20law,we%20understand%20how%20they%20interact,2005>.

<sup>91</sup> Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Fiscal vs. Tihomir Blaskic, caso IT-94-14-T, decisión del 3 de marzo de 2000; Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Fiscal vs. Tadić, caso IT-94-1-A, 14 de noviembre, 1995; Corte Constitucional, Sentencia C-291 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

### D.3.2. Homicidio en persona protegida

250. En el caso *sub judice*, todos estos presupuestos se cumplen. En relación con el atentado que ocasiona la muerte, la conducta en estudio se adecúa a la descripción señalada en el artículo 8.2.c.i del Estatuto de Roma:

En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional... [es crimen de guerra] cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa:

i) Los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas [...]

251. De esta definición se desprenden unos elementos específicos:

1. Que el autor haya dado muerte a una o más personas.
2. Que esa persona o personas hayan estado fuera de combate o hayan sido personas civiles o miembros del personal sanitario o religioso que no tomaban parte activa en las hostilidades.
3. Que el autor haya sido consciente de las circunstancias de hecho que establecían esa condición.
4. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado que no era de índole internacional y haya estado relacionada con él.
5. Que el autor haya sido consciente de circunstancias de hecho que establecían la existencia de un conflicto armado.

252. Los hechos determinados en este auto dan cuenta del cumplimiento de todos los elementos asociados con un crimen de guerra de homicidio. Primero, se dio muerte a 67 civiles en el departamento del Putumayo, estas muertes fueron ordenadas y ejecutadas desde el Batallón de Infantería Héroes del Valle del Guamuez entre 2005 y 2009, bajo la responsabilidad, en los términos en que se formulan las imputaciones, de Armando Jesús Pastor López, María Bertilda Yanacona Olaya y Carlos Montaña Guamanga.

253. La prueba de la muerte no exige la presencia del cadáver ya que los testimonios, los indicios y otros elementos puede dar cuenta de que se ha cometido un homicidio<sup>92</sup>.

254. Adicionalmente, configurando otro de los elementos requeridos, las víctimas de homicidio eran civiles y no tenían relación alguna con el conflicto armado interno y se trataba de personas protegidas bajo el DIH. Vale resaltar que, partiendo de lo establecido en el artículo 50-1 del Protocolo I de los Convenios de Ginebra de 1949, una persona civil es “cualquiera que no pertenezca a una de las categorías de personas [combatientes]”; esto lleva a que se considere incluso que “en caso de duda acerca de la condición de una persona se la considerará como civil.” El artículo 50-2 del citado Protocolo dispone que “la población civil comprende a todas las personas civiles” y su artículo 50-3 establece que “la presencia entre población civil de personas cuya condición no responda a la definición de persona civil no priva a esa población de su calidad de civil”<sup>93</sup>.

255. La Jurisdicción Especial para la Paz ya ha establecido en su precedente que los miembros de los grupos armados son aquellas personas que ejecutan actos específicos dirigidos a participar en los esfuerzos de la guerra, es decir, la preparación, realización o comisión de actos u operaciones equivalentes a una participación directa en las hostilidades. Incluso, los simpatizantes, amigos o allegados cuya actividad militar no puede considerarse que contribuya a esfuerzos de guerra, se mantienen en el nivel de población civil<sup>94</sup>.

256. Así las cosas, a lo largo de esta decisión se ha logrado constatar que las víctimas de los hechos no eran combatientes en armas ni representaban peligro para los integrantes de las unidades que produjeron sus muertes.

257. Pasando al siguiente requerimiento, los integrantes del Batallón de Infantería Héroes del Guamez que ordenaron y efectuaron los homicidios eran conscientes de que las víctimas hacían parte de la población civil y no tenían relación con el conflicto armado en curso; adicionalmente, las víctimas no estaban participando directamente en las hostilidades.

<sup>92</sup> Corte Penal Internacional. Sala Preliminar I. Caso ICC-01/04-01/07-717. Fiscalía vs. Germain Katanga y Mathieu Ngudjolo Chui. Decisión de confirmación de cargos. 30 de septiembre de 2008.

<sup>93</sup> Artículo 4, A. 1), 2), 3), y 6) del III Convenio, y el artículo 43 del Protocolo I de los Convenios de Ginebra de 1949.

<sup>94</sup> Jurisdicción Especial para la Paz. Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos u Conductas. Auto Sub D- Subcaso Hula- 081 de 2023; Jurisdicción Especial para la Paz. Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Auto 125 de 2021.

258. Ahondando, la conducta se materializó con ocasión y en desarrollo del conflicto armado interno colombiano, respondiendo a acciones y órdenes de las Fuerzas Militares. Como ya lo ha dicho esta Jurisdicción, la existencia y naturaleza del conflicto armado colombiano en determinados territorios es un hecho notorio o un hecho de dominio público que no requiere prueba ulterior<sup>95</sup>. Entre los años 2005 y 2009, el Medio Putumayo fue uno de los focos más importantes de dicho conflicto.

259. Los autores de estos homicidios fueron miembros activos del Ejército Nacional que actuaron con ocasión y en función de su servicio, bajo una jerarquía de mando, en el marco de misiones y operaciones y se valieron del armamento, estructura, recursos y funcionamiento de unidades militares para no solo cometer los homicidios, sino presentarlos públicamente como resultados operacionales consistentes en bajas en combate causadas en cumplimiento de sus deberes funcionales y constitucionales. Estos homicidios se ejecutaron porque el Ejército Nacional estaba involucrado en un conflicto armado y debía mostrar resultados operacionales medidos en bajas en combate, elemento considerado esencial para ganar la guerra.

260. En el marco de las actividades operacionales del Ejército Nacional de cara al conflicto armado, los homicidios servían múltiples propósitos: (i) reforzaban la mentalidad para combatir al enemigo, (ii) facilitaban la presentación de resultados operacionales y (iii) reforzaban la percepción de un mayor control territorial por parte del Ejército Nacional.

261. En ese sentido, se logra concluir que las conductas estudiadas deben ser calificadas como Crimen de Guerra de Homicidio en Persona Protegida por el Derecho Internacional Humanitario. Las conductas estudiadas son graves violaciones a una regla internacional contenida en el artículo 8 (2)(c)(i) del Estatuto de Roma; y la violación implica una responsabilidad criminal individual en aquellos miembros del Ejército Nacional de Colombia que ordenaron y ejecutaron los homicidios con ocasión y en desarrollo del conflicto armado colombiano.

### **D.3.3. Crimen de guerra de dirigir ataques contra la población civil**

262. Ahora bien, el análisis de los hechos también lleva a estudiar la conducta bajo la óptica del artículo 8.2.e.i del Estatuto de Roma, es decir el Crimen de

<sup>95</sup> Jurisdicción Especial para la Paz. Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos u Conductas. Auto Sub D- Subcaso Hula- 081 de 2023.



Guerra de Dirigir Ataques contra la Población Civil, que se configura cuando las conductas se enmarcan en:

- e) Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional, dentro del marco establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:
  - i) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades;

263. La prohibición de dirigir ataques en contra de la población civil es una norma esencial de Derecho Internacional, se trata de una norma autónoma de *ius cogens* y es clasificada como imperativa y fundamental<sup>96</sup>. En esa medida, existe un consenso incuestionable a nivel mundial sobre la prohibición de lanzar ataques contra la población civil y comprender que esta no debe ser objeto de operaciones militares<sup>97</sup>.

264. De la definición previa se derivan unos elementos para confirmar la ocurrencia de este crimen de guerra en particular:

1. Que el autor haya lanzado un ataque.
2. Que el objeto del ataque haya sido una población civil en cuanto tal o personas civiles que no participaban directamente en las hostilidades.
3. Que el autor haya tenido la intención de dirigir el ataque contra la población civil en cuanto a tal o contra personas civiles que no participaban directamente en las hostilidades.
4. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado que no era de índole internacional y haya estado relacionada con él.
5. Que el autor haya sido consciente de circunstancias de hecho que establecían la existencia de un conflicto armado<sup>98</sup>.

265. En primer lugar, los autores, miembros del Batallón de Infantería Héroes del Guamez, lanzaron un ataque contra la población civil. La Corte Penal Internacional ha establecido en el pasado que un ataque puede comprenderse como una campaña o como una operación dirigida en contra de la población

<sup>96</sup> Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia, Caso Fiscal v. Martić, 8 de marzo de 1996; Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia, Caso Fiscal vs. Stanislav Galic, Sentencia del 5 de diciembre de 2003.

<sup>97</sup> AGNU, Resolución 2444 (XXIII), 19 de diciembre de 1968, sobre respeto de los derechos humanos en conflictos armados (adoptada por unanimidad); AGNU, Resolución 2675 (1970), sobre Principios Básicos para la protección de las poblaciones civiles en los conflictos armados, adoptada por unanimidad.

<sup>98</sup> Elementos de los crímenes, Estatuto de Roma. Artículo 8.b.i

civil<sup>99</sup>, elemento que se puede evidenciar en todos los combates simulados para cometer los homicidios de los civiles con el ánimo de presentarlos como bajas en combate de manera ilegítima.

266. En segundo lugar, para determinar si los ataques han sido dirigidos en contra de la población civil, la jurisprudencia internacional ha definido diversos factores como los medios y métodos utilizados en el ataque, el número y el estatus de las víctimas, la naturaleza de los crímenes cometidos, la resistencia a los atacantes, y si los autores intentaron cumplir o no con los principios rectores del uso de la fuerza como el de precaución<sup>100</sup>; la violación de esta normativa genera responsabilidad penal individual, como se estatuye en el código penal y el Estatuto de Roma. En atención a lo previo así como a los hechos expuestos a lo largo de esta providencia, el objeto del ataque en este caso era una población civil.

267. Ahora bien, la decisión de atacar a la población civil hizo parte de la estrategia militar para cumplir metas trazadas por el mismo Ejército Nacional y con múltiples propósitos en el marco de las actividades operacionales de éste de cara al conflicto armado, ya que: (i) reforzaban la mentalidad para combatir al enemigo, (ii) facilitaban la presentación de resultados operacionales y (iii) reforzaban la percepción de un mayor control territorial por parte del Ejército Nacional. Esos ataques se dirigieron en contra de una población del departamento del Putumayo.

268. Igualmente, se ha confirmado que el ataque estaba intencionalmente dirigido a la población civil ya que los miembros del Batallón de Infantería Héroes del Guamuez no estaban atacando a su contraparte en el conflicto, sino que se centraron en el ataque en la población civil con el fin de simplificar la generación de resultados cuantitativos operacionales.

269. Finalmente, en relación con el contexto del conflicto y la consciencia de los autores sobre la existencia de este, ya se ha confirmado que el conflicto armado interno para el periodo de tiempo determinado era un hecho notorio y que los miembros del Batallón de Infantería Héroes del Guamuez eran plenamente conscientes de que sus acciones se enmarcaban dentro del mismo. Incluso, se ha evidenciado cómo estas acciones buscaban incrementar o robustecer los resultados en las operaciones de cara a ganar la guerra.

<sup>99</sup> Corte Penal Internacional, 8.11.2019, N° ICC-01/12-01/18, prr. 143; Corte Penal Internacional, 14.11.2019, N° ICC-01/19, prr. 63.

<sup>100</sup> Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia, Caso Fiscal vs. Radoslav Brdjanin, Sentencia del 1° de septiembre de 2004.

## E. DEL LLAMADO A RECONOCER RESPONSABILIDAD

### E.1. Responsabilidad del superior o responsabilidad de mando

270. En la jurisprudencia internacional se ha abordado el tema de la atribución de la responsabilidad penal de rangos altos a partir de diferentes figuras, una de estas es la responsabilidad que tiene el superior militar o civil por el incumplimiento de actuar para impedir conductas penales cometidas por sus subordinados dentro de una organización.

271. Si bien la doctrina que ha estudiado esta figura la clasifica como de origen consuetudinario<sup>101</sup>, se partirá del artículo 28 del Estatuto de Roma como norma que condensa la institución que se ha llamado responsabilidad del superior o responsabilidad de mando:

#### Artículo 28

##### Responsabilidad de los jefes y otros superiores

Además de otras causales de responsabilidad penal de conformidad con el presente Estatuto por crímenes de la competencia de la Corte:

- a) El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas cuando:
  - i. Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos; y
  - ii. No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento.
- b) En lo que respecta a las relaciones entre superior y subordinado distintas de las señaladas en el apartado a), el superior será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por subordinados bajo su

<sup>101</sup> Ambos, Kai. (1999). La responsabilidad del superior en el Derecho penal internacional. *Anuario de derecho penal y ciencias penales*, ISSN 0210-3001, Tomo 52. También trata el tema Gómez López, Jesús Orlando. (2017). Crímenes Internacionales. Tomo I. Aspectos Generales del Derecho Internacional y el crimen de genocidio. Bogotá D.C.: Ediciones Doctrina y Ley.

autoridad y control efectivo, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esos subordinados, cuando:

- i. Hubiere tenido conocimiento o deliberadamente hubiere hecho caso omiso de información que indicase claramente que los subordinados estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos;
- ii. Los crímenes guardaren relación con actividades bajo su responsabilidad y control efectivo; y
- iii. No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento.

272. Esta figura ha sido desarrollada por la jurisprudencia transicional de la JEP en el Auto SRVR-01 de 2023, apartes de esa decisión se precisarán posteriormente, pero se debe mencionar la relevancia de la aplicación de esta figura en la jurisprudencia de los tribunales *ad hoc*, donde se concretaron los elementos que componen este título de imputación<sup>102</sup>.

273. Tomando el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional en el caso Bemba, la Sala de Cuestiones Preliminares II confirmó los cargos presentados por la Fiscalía, enmarcando la responsabilidad de Bemba como un superior considerado responsable de las conductas que llevan a cabo sus subordinados por no cumplir con su deber de prevenir, reprimir la conducta o someter el asunto a las autoridades competentes, bajo el artículo 28 del ER antes citado. La Sala de Cuestiones Preliminares II menciona cinco requisitos para probar la responsabilidad bajo ese artículo:

- (i) el sujeto debe ser un comandante militar o una persona que actúa efectivamente como tal;
- (ii) debe tener mando y control efectivos, o autoridad y control sobre las fuerzas (subordinados) que cometieron uno o más de los crímenes previstos en el ER;
- (iii) los crímenes cometidos por los subordinados deben haber sido el resultado de la omisión de control adecuado por parte del superior;
- (iv) el sospechoso sabía o, debido a las circunstancias del momento, hubiere debido saber que sus subordinados

<sup>102</sup> Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia dos casos: ICTY, Fiscal v. Zejnil Delalić et al; ICTY, Fiscal v. Naser Orić. Por su parte, del Tribunal Penal Internacional para Ruanda se destaca: ICTR, Fiscal v. Jean-Paul Akayesu (ICTR-96-4-T).



estaban cometiendo o estaban a punto de cometer uno de los crímenes previstos en el ER;

- (v) el sospechoso no tomó las medidas necesarias y razonables dentro de su poder para prevenir o reprimir la comisión de tales crímenes o no sometió el asunto a las autoridades competentes<sup>103</sup>

274. La Sala de Cuestiones Preliminares precisó estos cinco elementos y su argumentación fue posteriormente acogida por la Sala de Primera Instancia III en la sentencia condenatoria del 21 de junio de 2016. En ese sentido, la Sala de Cuestiones Preliminares consideró que la responsabilidad de mando puede surgir sin importar el rango del sujeto en la estructura militar o rango, e incluye a no militares que tengan mando y control efectivo sobre las fuerzas del Estado<sup>104</sup>. Además, argumentó esa Sala que para afirmar la responsabilidad penal es suficiente con probar que la omisión del sujeto incrementó el riesgo de producción del ilícito por parte de los subordinados<sup>105</sup>. Ese último punto ha sido nombrado por la doctrina como el nexo de causalidad entre la omisión y el hecho<sup>106</sup>.

275. En este mismo sentido, en el Auto SRVR 01 de 2023, la Sala de Reconocimiento adoptó apreciación hecha por la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, determinando que:

Respecto al elemento subjetivo de ‘hubiere debido saber’, este implica que el superior debía tener conocimiento o debería haber sabido que sus fuerzas estaban a punto de participar o estaban participando o habían participado en una conducta constitutiva de crímenes de la competencia de la Corte. Tal conocimiento, de acuerdo con la Sala de Cuestiones Preliminares II, puede ser obtenido por prueba directa o circunstancial; esto incluye: “*el número de conductas, su alcance, si su ocurrencia es generalizada, el tiempo durante el cual los actos prohibidos tuvieron lugar, el tipo y número de fuerzas involucradas, los medios de comunicación disponibles, el modus operandi de actos similares, el alcance y la naturaleza del cargo del superior y*

<sup>103</sup> Este fragmento es citado del Auto SRVR-01 de 2023 a partir del párrafo 407 del caso *Prosecutor v. Jean Pierre Bemba*, Decision Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor Against Jean-Pierre Bemba Gombo, Pre-Trial Chamber II, ICC-01/05-01/08, 15 June 2009, párr. 407.

<sup>104</sup> *Prosecutor v. Jean Pierre Bemba*, Decision Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor Against Jean-Pierre Bemba Gombo, Pre-Trial Chamber II, ICC-01/05-01/08, 15 June 2009, párr. 408.

<sup>105</sup> *Ibidem*, párr. 425.

<sup>106</sup> Cote Barco, Gustavo Emilio. (2022). El caso Bemba: ruptura o continuidad en el desarrollo de la responsabilidad del mando en el derecho penal internacional. En Kai Ambos y Fernando Velásquez, *El caso BEMBA y la responsabilidad del mando Comentarios y traducción de la sentencia de apelación*. Bogotá, D.C. Tirant lo Blanch.

*responsabilidad en la estructura jerárquica, la ubicación del comandante en el momento y la ubicación geográfica de los hechos”<sup>107</sup>.*

276. Debe mencionarse también que el 08 de junio de 2018 la Sala de Apelaciones de la CPI revocó la sentencia condenatoria de la Sala de Primera Instancia III. La argumentación de la Sala de Apelaciones fue principalmente probatoria, revocando el fallo por la valoración no adecuada de las medias adoptadas por el condenado. El estudio por parte de la Sala de esas medidas adoptadas requería examinar aquellas que tenía a su disposición en las circunstancias del momento<sup>108</sup>; además que no se tomó en cuenta la situación de Bemba como comandante remoto y no se demostró que el comandante no actuó de manera razonable en ese momento, considerando las circunstancias y las contramedidas que incluían considerar la cantidad de crímenes cometidos<sup>109</sup>.

277. Ahora bien, para su aplicación en el contexto transicional colombiano se debe tener en cuenta lo ordenado por el artículo 24 del Acto Legislativo 01 de 2017, que no fue mencionado en el Auto SRVR-01 de 2023 por no referirse a comparecientes de Fuerza Pública.

Artículo Transitorio 24. Responsabilidad del mando. Para la determinación de la responsabilidad del mando, la Jurisdicción Especial para la Paz aplicará, en el caso de los miembros de la Fuerza Pública, el Código Penal colombiano, el Derecho Internacional Humanitario como ley especial, y las reglas operacionales de la Fuerza Pública en relación con el DIH siempre que ellas no sean contrarias a la normatividad legal.

La determinación de la responsabilidad del mando no podrá fundarse exclusivamente en el rango, la jerarquía o el ámbito de jurisdicción. La responsabilidad de los miembros de la Fuerza Pública por los actos de sus subordinados deberá fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante, o después de la realización de la respectiva conducta, así como en los medios a su alcance para prevenir que se cometa o se siga cometiendo la conducta punible, siempre y cuando las

<sup>107</sup> ICC, Prosecutor v. Jean Pierre Bemba, Decision Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor Against Jean-Pierre Bemba Gombo, Pre-Trial Chamber II, ICC-01/05-01/08, 15 June 2009, párr. 430-431.

<sup>108</sup> ICC, Judgment on the appeal of Mr Jean-Pierre Bemba Gombo against Trial Chamber III’s “Judgment pursuant to Article 74 of the Statute”, The Appeals Chamber, ICC-01/05-01/08 A, 08 June 2018, párr. 193.

<sup>109</sup> Ibidem, párr. 183.

condiciones fácticas lo permitan, y de haber ocurrido, promover las investigaciones procedentes.

Se entenderá que existe mando y control efectivo del superior militar o policial sobre los actos de sus subordinados, cuando se demuestren las siguientes condiciones concurrentes:

- a. Que la conducta o las conductas punibles hayan sido cometidas dentro del área de responsabilidad asignada a la unidad bajo su mando según el nivel correspondiente y que tengan relación con actividades bajo su responsabilidad;
- b. Que el superior tenga la capacidad legal y material de emitir órdenes, de modificarlas o de hacerlas cumplir;
- c. Que el superior tenga la capacidad efectiva de desarrollar y ejecutar operaciones dentro del área donde se cometieron los hechos punibles, conforme al nivel de mando correspondiente; y
- d. Que el superior tenga la capacidad material y directa de tomar las medidas adecuadas para evitar o reprimir la conducta o las conductas punibles de sus subordinados, siempre y cuando haya de su parte conocimiento actual o actualizable de su comisión.

278. A modo de resumen, a juicio de esta Sala los requisitos para probar la responsabilidad que tiene un superior por la omisión de prevención o represión de hechos ilícitos cometidos por sus subordinados son los cinco requisitos citados anteriormente, que surgen a partir del artículo 28 del ER y la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares II de la CPI en el caso Bemba. Ahora bien, esos requisitos deben interpretarse a la luz de la legislación transicional y puntualmente del artículo 24 transitorio del Acto Legislativo 01, tomando en cuenta las definiciones y restricciones que esa norma plantea frente al mando, control efectivo y el conocimiento de las situaciones irregulares.

## **E.2. Coautoría**

279. La coautoría es una de las formas de autoría previstas en el artículo 29 del Código Penal Colombiano al establecer que “Son coautores los que, mediando un acuerdo común, actúan con división del trabajo criminal atendiendo a la importancia del aporte”. De esta forma, se ha señalado que los elementos de la coautoría son i) el acuerdo común, (ii) la división del trabajo y (iii) la importancia

del aporte<sup>110</sup>. Estos tres puntos han sido abordados de manera diferente por la jurisprudencia transicional, motivo por el que se hace necesario abordarlos uno a uno a fin de exponer el uso que se le ha dado a la figura, que constituye el título de imputación aplicado a la mayoría de los máximos responsables identificados en esta decisión.

### **E.2.1. Acuerdo común**

280. El acuerdo común es el fundamento de la imputación recíproca de los coautores, lo que supone que todos los implicados conozcan los elementos de la actuación conjunta que realizan o van a realizar, aunque no necesariamente los detalles de esa, y su propósito coincida total o parcialmente<sup>111</sup>; vale la pena resaltar que este acuerdo puede además ser expreso o tácito y previo o concomitante a las conductas criminales<sup>112</sup>.

281. En los planes criminales materializados por integrantes de las unidades militares abordadas en esta providencia se evidenciaron conductas que dan cuenta de la existencia de un acuerdo para la presentación de muertes fuera de combate que se hicieran pasar como producto de operaciones militares. Además, ese plan contemplaba aprovechar diferentes tipos de beneficios que el reporte de bajas brindaba a quienes se concertaban y ejecutaban actos para la materialización del mismo.

### **E.2.2. División del trabajo**

282. El elemento referido es la diferenciación de roles y acciones entre los diferentes actores con miras a concretar el acuerdo común. El auto SRVR-019 de 2021 adoptó una definición limitada del dominio funcional del hecho que no admitía las contribuciones fuera de la fase de ejecución, no obstante, desde el auto SRVR-125 de 2021 la Sala acogió una visión más amplia del dominio funcional.

283. Atendiendo a lo mencionado, el dominio funcional del hecho se basará en el reparto de roles conforme al cual unos tienen funciones de dirección o planeación (fase preparatoria), otros realizan las acciones ejecutivas del delito (fase ejecutiva) y otros encubren (fase post-ejecutiva), donde todas las tareas son necesarias para la ejecución del plan común. Esto exige interpretar la teoría del

<sup>110</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 17 de febrero de 2021. Radicado No. 52150; Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 14 de noviembre de 2018. Radicado. No. 49884.

<sup>111</sup> Así lo han mencionado los autos SRVR-125 de 2021, SRVR-Sub-D-055 de 2022 y SRVR-Sub-D-062 de 2023.

<sup>112</sup> Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Auto SRVR-125 de 2021, párr.676.



dominio funcional del hecho en un sentido amplio que no se limita a exigir la intervención en fase ejecutiva<sup>113</sup>.

### E.2.3. Contribución esencial

284. Frente a la contribución esencial, la jurisprudencia transicional ha entendido que lo indispensable se refiere a que sin esa contribución no se hubiera cometido el delito o hubiera cambiado radicalmente el resultado. Al respecto, el auto SRVR-SUB-D-081 de 2023 que determinó los hechos y conductas en el subcaso Huila, argumentando que:

En lo que respecta al requisito de la importancia del aporte consagrado en el artículo 29 del Código Penal, que es análoga a la categoría de la contribución esencial en el DPI tanto la doctrina como la Sala de Reconocimiento en sus autos lo han interpretado en el sentido de la teoría del dominio del hecho, es decir, que por “importancia del aporte” se entiende que la intervención debe ser indispensable para la realización típica del delito. “Se ha entendido que este requisito implica que si - hipotéticamente- no se hubiera prestado el aporte, el delito no se hubiera producido o el plan criminal hubiera cambiado sustancialmente.”<sup>114</sup>

285. Para determinar esa importancia, se ha señalado que debe realizarse una valoración del rol de cada sujeto dentro del acuerdo y del conjunto de contribuciones individuales a los crímenes<sup>115</sup>. Además, pueden ser considerados coautores” no solo quienes realicen todos los elementos del tipo penal, sino también aquellos que solo realizan un elemento, o incluso, si no realizan ninguna de estas conductas, siempre y cuando su aporte sea esencial para la ejecución del plan criminal en su conjunto”<sup>116</sup>.

286. Con base en lo anterior, la Sala aprecia que existen bases suficientes para entender que el compareciente que se desempeñó como comandante del batallón debe responder a título de responsabilidad del superior por la omisión de

<sup>113</sup> Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Auto SRVR-128 de 2021, párr. 867.

<sup>114</sup> Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Auto SRVR-SUB-D-081 de 2023, párr.1089.

<sup>115</sup> Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Auto SRVR-SUB-D-055 de 2022, párr. 710.

<sup>116</sup> Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Auto SRVR-ADHC-1855 de 2023.

adopción de medidas necesarias y razonables para prevenir o reprimir las conductas ilícitas sobre las que tenía conocimiento al menos actualizable porque contaba con todos los elementos necesarios para conocerlos. Por su parte, los comparecientes que se desempeñaron como oficial de operaciones y soldado profesional deben responder a título de coautores de los crímenes que se les imputan, esto por haber actuado siguiendo un acuerdo común, con división del trabajo criminal y aportes esenciales de cada uno en las fases de planeación, ejecución y encubrimiento de los hechos.

### **E.3. Comparecientes del Batallón de Infantería Héroes del Valle del Guamuez (BIHVG)**

#### **E.3.1. Mayor General (r) Armando Jesús Pastor López**

287. Armando Jesús Pastor López, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 3967537 de la ciudad de Girón, Santander, se desempeñó como comandante del Batallón de Infantería Héroes del Guamuez desde el 14 de diciembre de 2003 hasta el 21 de marzo de 2009, periodo en el cual tenía el grado de coronel del Ejército Nacional. El señor Pastor López fue convocado por la Sala de Reconocimiento a rendir versión voluntaria y fue escuchado en dos sesiones, los días 14 y 15 de diciembre del 2023.

##### **E.3.1.1. Involucramiento en los patrones criminales**

288. Pasa la Sala a examinar las contribuciones realizadas por el Pastor López a los patrones macrocriminales.

##### **E.3.1.1.1. Hechos que evidenciaban la comisión de asesinatos y desapariciones forzadas por parte de las unidades que conformaban el Batallón de Infantería Héroes del Valle del Guamuez**

289. En el periodo de la comandancia del BIHVG por parte de Pastor López, ocurrieron sucesos que tenían la entidad suficiente para hacerle saber que las tropas bajo su mando estaban ejecutando hechos fuera del actuar legal y en contra del DIH. Al respecto, al menos cuatro eventos evidenciaban, para el periodo de tiempo analizado en esta providencia, que miembros del BIHVG cometieron esas conductas ilícitas.

290. En primer lugar, varias de las bajas ejecutadas por el Batallón durante esos años fueron noticia en medios locales y algunos tuvieron trascendencia nacional.

El hecho del 21 de agosto de 2008 ilustra este punto ya que el periódico “Putumayo Hoy” presentó en la edición del 22 de agosto una noticia titulada “El Batallón Héroes del Valle del Guamuez frustra una extorsión en Villagarzón”. Por su parte, frente a ese mismo suceso, la revista “Diferencia Colombia” presentó ese hecho del 23 de agosto de 2008 como un ejemplo de muertes presentadas como bajas en combate por miembros del Ejército Nacional en una denuncia publicada dentro de una columna de opinión fechada el 25 de enero de 2009:

“Véase el caso ocurrido el 21 de agosto pasado en Villagarzón. Es tan preocupante la situación que a esos militares ya nos le importa ni siquiera que haya niños testigos de los asesinatos. Se ha perdido por completo la humanidad en las filas del Ejército Nacional”

291. Eso muestra que lo sucedido en el Batallón tuvo trascendencia regional y nacional, e incluso se argumentó su ilegalidad públicamente. Pero aún si el señor Pastos López no hubiera conocido por alguna razón esas noticias, la difusión no se limitó a medios de comunicación, la Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) puso de presente su preocupación por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al DIH mediante un documento de octubre de 2008 dirigido a la Brigada Selva Mocoa:

**Conclusión y recomendaciones.** El CICR expresa su profunda preocupación ante las alegaciones presentadas. De confirmarse, estas violaciones al derecho interaccional [sic] humanitario representan sufrimiento y vulnerabilidad para los familiares de las víctimas de tales hechos.

El CICR también expresa su alta preocupación por haber recibido en el pasado otras alegaciones de violación del DIH incriminando las tropas del Batallón de Infantería Héroes del Valle del Guamuez: en el mes de agosto del año pasado, el CICR hizo una intervención que contenía 2 alegaciones que presentaban similitudes a las que figuran en este documento.

El CICR urge a los altos mandos del BIHVG de investigar lo acontecido en las veredas mencionadas y, de ser necesario, adoptar las medidas para corregir la conducción de las hostilidades por parte de las unidades responsables y evitar hechos similares.

292. A juicio de la Sala, estas denuncias públicas referidas a la ilegalidad de las bajas reportadas por efectivos del BIHVG debieron conducir a que el Comandante Pastor López adoptara medidas idóneas para constatar la legitimidad de las muertes en combate registradas por las unidades tácticas bajo su mando, pero eso no tuvo lugar.

293. Segundo, a pesar de que para el Batallón la delincuencia común no era un blanco, pues su ambiente operaciones se enfocaba contra el Frente 13 de las FARC-EP<sup>117</sup>, durante los cuatro años estudiados se presentaron casos en los que las unidades priorizadas emplearon como estrategia de encubrimiento el reporte de supuestos enfrentamiento con grupos de delincuencia común y/o milicias de esta guerrilla; de esas acciones se derivaron 67 homicidios enmarcadas durante periodo de Pastor López. A partir de esas cifras se observa que un alto número de bajas reportadas correspondía a operaciones luego de supuestos combates contra la delincuencia común, que no era un blanco establecido de ataque del Batallón.

294. Al respecto, se destaca que, como Comandante del Batallón, el compareciente conocía los blancos establecidos en las órdenes de operaciones de la unidad operativa bajo su mando, estaba al tanto de los objetivos contra los que se registraban los resultados operacionales y era consciente de que, de conformidad con el ambiente operacional, no se había estimado procedente dirigir el esfuerzo militar hacia la delincuencia común. Por tanto, esta Sala considera que, de acuerdo a la experiencia que tenía Pastor López, este hecho contaba con la entidad suficiente para revelar irregularidades en los resultados operacionales.

295. Frente a este mismo punto, la señora Yanacona Olaya mencionó en su Versión Voluntaria que el pelotón Anochecer se caracterizaba por ser un grupo de soldados que permanecía en el área de operaciones, varias veces realizando inteligencia de combate para emprender las misiones tácticas. Tales actividades de búsqueda de información correspondían a una estrategia del pelotón de realizar reportes y boletines de inteligencia que reflejaban situaciones ficticias sobre presencia de grupos armados o de delincuencia común para respaldar la

<sup>117</sup> La teniente Yanacona y el Mayor Ruiz coinciden en sus versiones voluntarias en indicar que la delincuencia común no era un objetivo del Batallón, pues su blanco era las FARC-EP, aunque opinan que ante hechos de delincuencia el Ejército no debería omitir sus posibilidades de ayudar a la comunidad.



ocurrencia de los combates simulados y el reporte de bajas que eran en realidad ocasionadas en operativos simulados<sup>118</sup>.

296. En tercer lugar, el señor Pastor López tenía para esa fecha el cargo de Coronel, que requiere no solo de altas capacidades y conocimientos, sino también de experiencia y pericia. A partir de las reglas de la experiencia era posible para una persona como Pastor López considerar como improbable que alguien provocara una confrontación armada con las tropas viéndose superado en número, entrenamiento y capacidad de fuego.

297. No obstante, un número importante de las muertes presentadas como bajas en combate se caracterizaban por tratarse de grupos pequeños de personas a las que no se les incautaban armas largas, sino se reportaban como portadores de armas cortas o explosivos durante los combates simulados<sup>119</sup>. Además, los resultados eran los mismos, todos los supuestos delincuentes dados de baja, ningún capturado y cero afectaciones por el lado de las tropas. Esos hechos contaban con la aptitud necesaria para que, de manera razonada, un comandante con la experiencia del compareciente se cuestionara la existencia de un combate contra la delincuencia común o milicias de las FARC-EP.

298. Por último, esta Sala tiene constancia de que el señor Pastor López acudió al menos una vez al lugar de los hechos el día siguiente a la operación. El soldado Montaña relató en su Versión Voluntaria:

Magistratura: ¿En qué contextos recibió felicitaciones por parte del comandante?

Compareciente: El 13 de marzo de 2008 mi Coronel Pastor López se acercó a Bajo Eslabón mientras todavía estaba el cuerpo luego del combate. Él revisó un poco la zona, miró el cuerpo y se acercó a nosotros después para felicitarnos por haber llevado con éxito esa operación y luego se fue.

299. Es incuestionable que el señor Pastor López, una persona que contaba con una extensa y distinguida carrera militar, debió notar irregularidades patentes en la escena, como la ubicación de los cuerpos, el tipo de elementos que portaban, cómo vestían y el tipo de heridas propinadas.

<sup>118</sup> Esta estrategia ha sido nombrada por diferentes comparecientes como “calentar la zona”, y la señora Yanacona en lo menciona en su versión voluntaria.

<sup>119</sup> De los 47 reportes de bajas en combate durante el periodo de comandancia de Pastor López se reportaron que 27 portaban armas largas, es decir, en un 42% de las bajas no se reportaron armas largas, sino principalmente revólveres y granadas u otros explosivos.

300. Con base en todo esto, se aprecian bases suficientes para entender con claridad que el señor Pastor López tuvo amplias oportunidades para identificar las inconsistencias que estaban reportando el BIHVG, especialmente si de primera mano pudo percibir una escena de hechos donde, supuestamente, militares se habían enfrentado con grupos de personas de número reducido y con una diferencia notable en el poderío bélico en comparación con los integrantes del Ejército Nacional. Es decir, contaba con elementos suficientes para detectar la existencia de irregularidades notorias en las bajas reportadas y, por tanto, era procedente que adoptara medidas adecuadas y oportunas para constatar la legitimidad de las muertes en combate registradas por los efectivos bajo su mando y evitar que se repitieran crímenes como los descritos con antelación.

**E.3.1.1.2. El compareciente ejerció presiones tendientes a la producción de muertes en combate**

301. La Sala ha encontrado que Armando Jesús Pastor López ejerció presiones constantes sobre los efectivos de las unidades tácticas bajo su mando para que reportaran muertes en combate.

302. Al respecto, Carlos Montaña Guamanga, quien en su momento era miembro del Batallón mencionó:

Magistratura: Usted nos dijo que el Coronel Pastor López decía que había que tener resultados tangibles ¿en qué circunstancias se escuchó que el Coronel dijera eso?

Compareciente: Su señoría, cuando yo estaba en el área esa orden no era para las unidades que no eran de combate, pero en el programa de radio, uno escucha el programa y ahí se salen las órdenes para todas las unidades. Entonces ahí los superiores le decían las unidades por el radio, decía las unidades de contraguerrilla que los resultados se tenían que medir en resultados tangibles y que los resultados tangibles eran muertes en combate. Pero, mi Coronel Pastor López también le decía a la tropa en diferentes espacios que para él no servían un poco de capturados, que ya habían escuchado por radio a los superiores, que eran resultados tangibles. En una ocasión pues cuando yo estaba, o sea, estaba al mando de un pelotón de soldados campesinos, los resultados serán los que yo ya denuncié entonces me puso de ejemplo, pero pues de ejemplo de una forma despectiva, porque me dijo que no hicieran como Velázquez que no hacía sino dar capturas, o que ya estaban haciendo como Velázquez que no hace sino dar captura.

También, tenían a mi Teniente Yanacona que era muy insistente con la cosa de las muertes porque así nos beneficiábamos<sup>120</sup>.

303. De forma similar, la Teniente María Bertilda Yanacona Olaya afirmó en su Versión Voluntaria: “Por ejemplo, hacían comparaciones cada semana o dos semanas, y después venía el regaño por parte de mi Coronel Pastor López. Decía, como ejemplo, Amanecer 1 lleva 8 bajas en operaciones ¿Por qué Anochece 1 que tiene más campo de acción solo reporta 5? Explíqueme eso, a ver. Recuerde que desde arriba la instrucción es dar resultados”<sup>121</sup>.

304. Pero esa presión también ha sido probada con otros hechos, se tiene constancia que, por orden del señor Pastor López, desde el año 2007 se creó un cuadro a nivel de batallón donde se mostraba cada quince días el número de bajas en combate presentadas por cada compañía y por pelotones. En ese cuadro se resaltaba a veces, cuando no se habían presentado bajas, los días que llevaba cada pelotón sin efectuarlas. El señor Pastor López fue preguntado al respecto en su versión voluntaria:

Magistrado: Indíqueme al despacho sobre la existencia de cuadros o tableros en el BIHVG con resultados de bajas en combate.

Compareciente: Digamos que el estándar de la organización del mando y control que se tiene en los centros de operaciones tácticas eran un estándar para todo el ejército. Ahí se tenían las unidades, los resultados... Si habían tenido combates, si habían tenido capturas, si habían tenido desmovilizados, si habían erradicado, si habían tenido muertes en combate, etc.... Tenía... todos los resultados por unidades estaban clasificados. En todas las unidades del ejército se tenía. Son cuadros que se colocan a lo largo, en las paredes, y que permiten que cuándo usted necesite tomar una decisión; simplemente mirar, observar, y poder dar su opinión.

305. Lo expuesto evidencia que, con la llegada de Pastor López a la comandancia del batallón, se continuó con la presión por la producción de bajas, ejercida sobre las unidades que integraban el BIHVG. Ese apremio condujo a la comisión de asesinatos y desapariciones con el objetivo de aumentar las estadísticas de muertes en combate y posicionar tanto al batallón como a su comandante en un lugar destacado dentro de la Brigada.

<sup>120</sup> Jurisdicción Especial para la Paz. Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Versión Voluntaria de Carlos Montaña Guamanga. Expediente Legali Caso 03, Subcaso Putumayo

<sup>121</sup> Jurisdicción Especial para la Paz. Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Versión Voluntaria de María Bertilda Yanacona Olaya. Expediente Legali Caso 03, Subcaso Putumayo

306. Aquí se hace relevante resaltar que esas presiones se dieron en un contexto de estricta jerarquía militar, en donde las órdenes de los superiores se convierten en un imperativo para las tropas; no se trataba de simples recomendaciones o consejos, sino de mandatos, cuyo desacato implicaba consecuencias negativas dentro de la organización creada con el fin colectivo de la comisión de esos ilícitos incrustada dentro del BIHVG. Además, dentro de esa cadena de mando fáctica, no era relevante quién fuera el autor directo, pues cualquiera de los subalternos dentro del aparato conocía y podía ejecutar la conducta, es decir, el autor material era fungible. De modo tal que el señor Pastor López, siendo consciente de que sus órdenes debían ser cumplidas sin réplica, propició de forma activa que sus subordinados actuaran al margen de la ley buscando presentarle más resultados operacionales, específicamente bajas en combate.

#### **E.3.1.1.3. El compareciente incentivó la producción de bajas en combate como resultado operacional tangible**

307. La Sala estima que hay bases suficientes para considerar que Armando Jesús Pastor López, como Comandante del BIHVG, incentivó la producción de muertes presentadas como bajas en combate por parte de su Batallón como resultado operacional tangible. Esto tuvo lugar mediante el otorgamiento de felicitaciones a los subalternos que reportaban ese tipo de resultados operacionales y la concesión de permisos dentro del plan de moral y bienestar implementado por este compareciente. Aunado, felicitaba a aquellos pelotones o compañías con mejores resultados<sup>122</sup> otorgando días de descanso y beneficios económicos.

308. Pero además de la felicitación, el señor Pastor López implementó dentro del plan de moral y bienestar que existía en la Brigada estímulos a los soldados que presentaban las bajas. Al respecto, el compareciente Pastor López señaló en su Versión Voluntaria, conforme se cita *in extenso*:

**Magistratura:** Estoy leyendo el art. 44 de la ley 836, el art. indica, me permito leer: “Permisos especiales: los permisos especiales serán otorgados por el superior con atribuciones disciplinarias. previa motivación de estos, de conformidad con las normas que rigen la materia”. Dos preguntas al respecto. Primero, ¿cuáles son las normas que rigen los permisos por resultados? Y segundo, ¿en dónde constaban esas

<sup>122</sup> Jurisdicción Especial para la Paz. Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Versión Voluntaria de Diego Velásquez. Expediente Legali Caso 03, Subcaso Putumayo. Hablando de una operación en la que se presentó a una víctimas como baja en combate mencionó: “PREGUNTADO: después de que sucedieron los hechos usted recibió algún tipo de felicitación. RESPONDIÓ: si señor magistrado. PREGUNTADO: ¿y quién lo felicito a usted? RESPONDIÓ: el comandante de Batallón, mi Coronel Pastor López.



motivaciones, en los permisos que daban o se concedían por resultados?

**Compareciente:** Señor magistrado, las felicitaciones de acuerdo al manual... el decreto 1790, establece que tipo de felicitaciones y bajo que argumentos usted las puede hacer. Yo le comentaba ahorita, en lo de los permisos las razones por las que dieron los mismos, por ejemplo, por capturas se dieron 3 permisos, y queda reflejado el motivo por el cual se le está dando el permiso, El art. 44 de la Ley 836 establece los términos especiales, faculta dependiendo de la antigüedad, el grado, la jerarquía que usted tiene en relación a la persona que usted está felicitando, me explico. Si es el comandante del pelotón o de la compañía, tiene facultad (siempre y cuando no esté en el área de operaciones) a dar 24 horas de permiso. Si es el comandante del batallón, tiene autorización hasta 5 u 8 días de permiso. Si la felicitación viene del comandante de la brigada, pueden ser más de ocho días, pero tiene que quedar reflejada en la orden del día para que quede un acto administrativo. Porque eso, también implica que hay una derogación administrativa con devoluciones de alimentación y también tiene una implicación disciplinaria en caso de que algo ocurra durante su permiso.

Magistratura: si le entendí bien, ¿el art. 44 es el que faculta para eso?

Compareciente: El art. 44 habla de los premios o los permisos que usted puede dar, entre los premios están los permisos.

309. En esa misma línea, el Soldado Montaña recordó también haberse enterado de los permisos por resultados operacionales en las formaciones del Comandante de Batallón y que, cuando llegaban a la unidad después de realizadas las bajas, los formaban, felicitaban y les decían que se les iba a conceder un permiso por un número determinado de días<sup>123</sup>. Como la producción de muertes en desarrollo de operaciones militares les comportaba el otorgamiento de premios, especialmente permisos para tener días libres, al final los soldados terminaron considerando estos estímulos para consumir muertes extrajudiciales<sup>124</sup>.

310. Así, se observa el interés del Comandante del Batallón en el ofrecimiento de prebendas y en la materialización de un plan de moral y bienestar paralelo al

<sup>123</sup> “(...) Magistratura: ¿se daba algún tipo de permiso especial por resultados operacionales? Compareciente sí, por resultados operacionales y por muchas otras cosas. Por resultados operacionales: llegó un pelotón del área hizo unas capturas o hubo combates o hizo esto y el coronel decía ‘bueno dele un permiso’ o muchas veces un almuerzo porque muchas veces donde estaban no les llegaba comida caliente sino sólo raciones, entonces decía ‘bueno pues organicen un sancocho o algo así’(...)”.

<sup>124</sup> Jurisdicción Especial para la Paz. Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Versión Voluntaria de Diego Velásquez. Expediente Legali Caso 03, Subcaso Putumayo

formulado para el Batallón, el cual fue determinante para que las tropas, y particularmente los ejecutores materiales de las bajas cuestionadas, permanecieran motivadas con permisos e incentivos concedidos por iniciativa de Pastor López.

#### **E.3.1.1.4. El compareciente no realizó un control efectivo para establecer la legalidad de las bajas reportadas**

311. Los miembros de la Fuerza Pública cuentan con la obligación de tomar “las precauciones posibles para asegurar que la fuerza se emplee de conformidad con el marco jurídico vigente y protegiendo el derecho a la vida en la máxima medida posible”<sup>125</sup>. El Manual de “Organización Estado Mayor y Operaciones” (EJC 3-50) del año 2005 concreta, además, la obligación de los comandantes de ejercer control antes, durante y después de las operaciones. Pastor López, Coronel para el momento de los hechos y Comandante del BIHVG, tenía el deber de control sobre las operaciones que realizaban sus subordinados y debía asegurarse de que el uso de la fuerza del Estado no fuera empleado de manera ilegal y fuera del marco jurídico.

312. El control previo a las operaciones debía basarse en la supervisión y constatación de fuentes y planes que se aprobaban y que finalizaron con la presentación de bajas en combate producto de enfrentamientos simulados. Como Comandante debía tener una comunicación directa con sus oficiales de inteligencia y operaciones, así como analizar de forma meticulosa el contexto, la situación y los riesgos antes de aprobar una operación.

313. No obstante, Pastor López avaló operaciones contra la delincuencia común aunque este no fuera un blanco del Batallón, sino que su objetivo debía ser el combate de las FARC-EP en la región. Es decir, la actuación del Batallón se estaba dirigiendo hacia objetivos distintos a los previamente planteados desde el nivel estratégico. También es cuestionable el rigor con el que se realizaban algunos informes de inteligencia y la información que daban ciertos informantes, situación que debió ser advertida por una persona con el conocimiento que tenía Pastor López.

314. Bien es cierto que el Manual de “Organización Estado Mayor y Operaciones” establece que el comandante tiene el ejercicio del mando y control, dando conclusiones, recomendaciones y guías, de modo que el comandante solo

<sup>125</sup> Corte Constitucional. Sentencia C-340 del 2019.

deba aprobar o desaprobar decisiones estudiadas para afrontar una situación, como mencionó Pastor López en su Versión voluntaria<sup>126</sup>. Sin embargo, esa no es una excusa para omitir su deber constitucional de velar por la protección de los bienes jurídicos de las personas en el país<sup>127</sup>, si una operación se sustentaba en bases sospechosamente frágiles e incoherentes, debía Pastor López desaprobala antes de que se ejecutara y llamar la atención de los subordinados que sugerían esa acción.

315. Ahora bien, además del control previo, el comandante tenía el deber de ejercer su mando y control sobre sus subordinados de las compañías y de las operaciones que se desarrollaban en el área asignada. Durante la ejecución de las operaciones, Pastor López tenía la facultad de ordenar el cese del uso de la fuerza si consideraba que podrían cometerse irregularidades o si se le informaba que estaban ocurriendo supuestos combates con grupos reducidos de personas que portaban armas cortas, patrón que era común según se mostró previamente; la experiencia de Pastor López debió llevarlo al menos a sospechar que podría tratarse de irregularidades y, en algún caso, detener la operación y ejercer su control para determinar si se trataba de hechos que fundamentaran el uso de la fuerza del Estado.

316. No obstante, a juicio de esta Sala, la omisión de control posterior es la muestra más evidente del actuar irregular de Pastor López; obligación que debía cumplirse mediante el **control material** de las carpetas en las que se reportaban las muertes en combate. Esas carpetas operacionales, conoce la Magistratura que se debían elaborar cuando las operaciones que realizaba el batallón producían muertes en combate.

317. En esos documentos se debía incluir documentación cuya elaboración tenía que ser realizada de manera previa o concomitante a las operaciones, tal como el informe de situación de tropas, el anexo de inteligencia a la orden de operaciones o el informe de patrullaje, el acta de gasto de munición y de pago de recompensa si se hubiera producido, el acta del material incautado y de levantamiento del cuerpo, así como los informes de necropsia. Además, debía enviarse una copia de las carpetas operacionales a la Brigada para que constaran en sus archivos dentro de plazos perentorios.

<sup>126</sup> Jurisdicción Especial para la Paz. Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Versión Voluntaria de Armado Jesús Pastor López. Expediente Legali Caso 03, Subcaso Putumayo: “dentro del manual de funciones yo solo tenía que aprobar frente a lo que me presentaba mi Plana Mayor, que eran personas de mi total confianza. Si decían que lo mejor frente a unos hechos de robos o extorsiones en una vereda era hacer una operación, yo escuchaba sus argumentos y aprobaba o no. Si esa información de inteligencia era mejor o peor es ya un asunto de mi Plana Mayor”.

<sup>127</sup> Ese deber se fundamenta en el artículo 217 de la Constitución Política, el artículo 1 de la Ley 1862 de 2017. También fue desarrollado por la Corte Constitucional. Sentencia SU-1184 de 2001, párr. 17.

318. En el recaudo del material probatorio, esta Sala evidenció que no todos los documentos contaban con la documentación completa, e indagando por ello en las diligencias de Versión Voluntaria, esta aseveración fue confirmada por los integrantes de la plana mayor. Incluso se conoció que el entonces Coronel solicitó completarlas después de que hubiera pasado un tiempo considerable del reporte de resultados. La Teniente Yanacona afirmó que Pastor López les solicitó a los oficiales de inteligencia y operaciones completar la documentación faltante de las carpetas operacionales:

Magistratura: ¿Usted hizo anexos de operaciones con posterioridad a las operaciones por esa orden del comandante?

Compareciente: Sí su señoría, yo reconozco que esa fue mí, ese fue mi error, eso fue mí y conozco y admito y por eso estoy aquí diciendo la verdad de lo que sucedió allá en el batallón. Yo no sabía su señoría, yo no sabía que eso, eso, sino que como eso inclusive yo hice, yo hice y firmé algunos, no yo los hice, o sea los hicieron y yo los firmé (...) entonces yo hice y firmé algunos. También me llegaban a mis informes de patrullaje con espacios en blanco y yo le indicaba al encargado de eso cómo llenarlo para que pareciera un combate real, pero en muchos casos era de verdad difícil.

319. En el marco del presente caso, el señor Pastor López manifestó que su deber en relación con las carpetas operacionales se limitaba a verificar que los documentos que las debían conformar estuvieran completos, es decir, control meramente formal, sin que le correspondiera adelantar un análisis sobre su contenido con el propósito de establecer la legitimidad de las muertes en combate registradas por las unidades tácticas bajo su mando<sup>128</sup>.

320. Al respecto se destaca que, a partir del análisis de las misiones tácticas, los informes de patrullaje y las actas de material incautado que integraban las carpetas de resultados operacionales reportados por los batallones, se hubiera podido detectar oportunamente que un cúmulo importante de los homicidios perpetrados correspondían a supuestas acciones en contra de la delincuencia común, sin que este fuera un blanco de operaciones ofensivas, de acuerdo con las

<sup>128</sup> Al respecto mencionó Pastor López en su versión voluntaria: Magistratura: ¿usted cómo realizaba su labor de revisión de las carpetas operacionales antes de mandarlas a la Brigada? RESPONDIDO: no, yo revisaba bien que cada carpeta tuviera los documentos que tocaba y que si estuvieran bien enumerados y no se mezclaran papeles, y pues que estuvieran firmados.”



órdenes de operaciones. Además, que se trataba de resultados con características similares, de grupos de personas pequeños que portaban en varios casos armas cortas; tal como se expuso previamente, esa situación denotaba un proceder irregular por parte de las unidades tácticas.

321. Por otro lado, Montaña Guamanga en su Versión Voluntaria comentó una situación que debió suponer el ejercicio del mando y control del comandante; frente a los hechos del día 12 de marzo de 2008 se empezó a escuchar entre miembros del batallón que el arma que supuestamente tenía la persona dada de baja en combate había sido incautada unos días antes por el pelotón Amanecer en un retén real. Al respecto, Yanacona narró que el comandante Pastor López lo llamó a su oficina y le preguntó si sabía del tema:

Estábamos hablando de unos temas de entrenamientos y me preguntó si sabía del tema, y pues le dije la verdad de lo que sabía. Yo no tenía cien por ciento la certeza, pero parecía que sí era el mismo revólver que se había incautado y de la ropa sí ni idea. Él guardó silencio y continuó con el tema del entrenamiento.

322. Además, a juicio de esta Sala, el señor Armando Jesús Pastor López contaba con todos los elementos para conocer que sus subordinados torturaron en 25 casos a las víctimas presentadas como bajas en combate. Si el comandante hubiera cumplido con su deber de control material de las mencionadas carpetas que reportaban las muertes en combate, puntualmente en los documentos de informes de medicina legal, hubiera notado una constante en esos casos, la anotación de que el cuerpo presentaba heridas.

323. El hecho ilustrativo ocurrido el 09 de agosto de 2006 muestra este punto; conforme se observa en el informe de Medicina Legal, los cuerpos de las tres víctimas presentaban diferentes golpes y costillas rotas. Un informe conjunto de tres ONGs, dirigido al señor Pastor López, denunció diferentes hechos de torturas a civiles cometidos por miembros de las compañías del BIHVG. Uno de los hechos mencionados en ese informe se refirió a los hechos del 09 de agosto de 2006:

[...] otro de los hechos que nos genera profunda preocupación ocurrió el 09 de agosto de 2006. Militares adscritos a su batallón detuvieron a tres sujetos que supuestamente portaban armas en el vehículo en el que se movilizaban. La comunidad vio cómo eran subidos a un camión con los militares y cómo los pusieron boca abajo.

Conforme se pudo conocer con la labor de las ONGs acá firmantes, esas tres personas fueron posteriormente asesinadas y presentadas como bajas de combatientes de las FARC-EP. Pero, además se tuvo acceso al informe de Medicina Legal del caso, donde muestra que los cuerpos sufrieron múltiples hematomas, politraumatismo y fracturas en costillas.

Como se muestra en este informe, existen casos en los que durante el actuar de los soldados adscritos al Batallón Héroes del Valle del Guamuez, los militares han propinado golpizas a civiles, y no se puede descartar que lo mismo hubiera ocurrido ese 09 de agosto, aunque este caso tenga mayor gravedad por tratarse de homicidios. Le pedimos Coronel que tome las medidas pertinentes para esclarecer los sucesos narrados y evitar que eso siga sucediendo.

324. De esta forma, se puede observar que el señor Pastor López debió conocer la denuncia remitida por las ONGs dirigida hacia él y omitió realizar alguna acción para investigar y sancionar esos hechos. Aunque como Comandante del Batallón tenía en su poder la posibilidad de iniciar de manera interna una investigación sobre esas torturas recibidas, guardó silencio y omitió realizar cualquier tipo de actuación al respecto.

325. Por otro lado, se pudo establecer que el señor Pastor López era la persona que ordenaba la movilidad de ciertos soldados profesionales entre compañías, como el caso del SP Carlos Montaña, que de Amanecer fue asignado temporalmente a Anochecer y también tuvo movilidad en la compañía Ocasio. También, está probado que soldados como Montaña eran trasladados entre pelotones para “dar ejemplo” a los demás soldados<sup>129</sup>.

326. Igualmente, durante la comandancia de Pastor López, al interior del BIHVG se hablaba de que efectivos de los pelotones que conformaban las compañías Amanecer, Anochecer y Ocaso estaban cometiendo homicidios con el

<sup>129</sup> Jurisdicción Especial para la Paz. Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Versión Voluntaria de Carlos Montaña Guamanga. Expediente Legali Caso 03, Subcaso Putumayo: “mi comandante Pastor me dijo que como tenía tan buenos resultados me iba a rotar por otros pelotones para dar ejemplo a los demás soldados. Yo no sé bien a que se refería, pero al menos en Anochecer 1, como nos presionaban para dar resultados y con la ayuda de la oficial Yanacona, nos dedicamos a perseguir la delincuencia común y a presentar bajas. A mis mayores no les gustaba que diéramos arrestos”.

Igualmente mencionó Montaña: “Magistratura ¿cree usted que el hecho de que usted hubiera participado ya en una muerte influyó para que lo movieran para integrar el grupo especial? Compareciente pues si usted le mete lo más lógico, la lógica es esa, como digo, claro, lo lógico es eso, si yo no me hubiera prestado para eso, si no hubiera caído en la ignorancia, yo no estaría aquí, ni detenido, ni tampoco en el grupo especial, estaría activo todavía, con eso le digo todo Magistratura la pregunta es si el hecho de que usted hubiera participado en ese hecho fue una razón para que su ingreso al grupo especial.”

fin de reportarlos como resultados operacionales legítimos. Al respecto, María Bertilda Yanacona, indicó en su Versión Voluntaria que tal situación era conocida, o al menos sospechada, por Pastor López y que, a pesar de ello, no adelantó ninguna acción en materia operacional con el fin de evitar que se presentaran los asesinatos investigados.

Magistratura: Con relación a las investigaciones que se abrían con ocasión de las bajas en combate, yo quisiera preguntarle ¿a qué cree que se debió que el Coronel Pastor López hubiera optado por abrir investigaciones formales en vez de abrir investigaciones preliminares como nos comentó ayer?

Compareciente: Pues yo pienso que él era consciente de que algo estaba pasando. Yo... yo no sé si sabía o no sabía, si tenía más conocimiento o menos, pero para mí la única respuesta es de que él..., o sea cuando yo determino y no dejo pues que se elabore un debido proceso tal cual como es y analizo exactamente que el funcionario de instrucción me analice y me dé una recomendación y me diga: “vea mi Coronel yo pienso que lo mejor es esto, porque encontré esto y esto” la abriría formal pero ni idea, pienso que él tendría algunas indicaciones ya directamente hablando con el funcionario de instrucción o lo que sea para tomar esas decisiones. Pero sí tendría que haber un indicio de algo para que él tomara esas decisiones.

327. En tal virtud, la Sala encuentra que el incumplimiento del deber de control posterior por parte de Pastor López, en calidad de comandante del BIHVG, de las operaciones militares en las que se reportaban bajas fue un aporte en la consolidación del patrón macrocriminal investigado. Esa omisión permitió que los asesinatos cometidos fueran presentados como resultados operacionales legítimos que significaban un aporte relevante al esfuerzo militar del Ejército Nacional. De acuerdo con ello, sus ejecutores percibieron que se trataba de un medio eficaz para responder a las presiones ejercidas por sus superiores y para acceder a los incentivos dispuestos para los efectivos que contribuyeran con el incremento de los resultados operacionales. Todo, bajo la inoperancia de los procedimientos dispuestos en la doctrina militar y el ordenamiento jurídico para detectar las irregularidades e implementar correctivos de manera oportuna.

328. El Comandante Pastor López tenía en su poder la capacidad legal de emitir órdenes y materialmente las hacía cumplir, logrando que sus subordinados

siguieran sus instrucciones. Todos los hechos priorizados fueron cometidos por pelotones adscritos a las compañías que componían el Batallón bajo la responsabilidad del compareciente y en áreas del Putumayo donde el Batallón desplegaba sus operaciones. El señor Pastor López tenía en su poder la potestad de tomar medidas antes, durante y después de las operaciones que culminaron con los ilícitos acá imputados, pudiendo evitar o reprimir esas conductas sobre las que contaba con elementos suficientes para detectar la existencia de irregularidades notorias en las bajas reportadas. Por ejemplo, podía haber ordenado cesar operaciones dirigidas a combatir supuestos casos de delincuencia común o haber denunciado ante sus superiores las situaciones o iniciado acciones disciplinarias. Sin embargo, pese a que una persona con su experiencia y pericia hubiera podido detectar la ilegalidad en el actuar de sus subordinados, el compareciente Pastor López se abstuvo de tomar las medidas necesarias y razonables para prevenir o aplacar esas conductas y no las sometió ante las autoridades competentes.

#### **E.3.1.1.5. El compareciente no ejerció en debida forma sus competencias en materia disciplinaria**

329. Conforme lo establecía la Ley 836 de 2003, a Pastor López le competía como comandante del BIHVG la sanción disciplinaria de sus subalternos, sin embargo, conforme con las irregularidades que rodearon las supuestas bajas reportadas desde dichas unidades, las cuales resultaban evidentes en los reportes operacionales remitidos o que fueron objeto de denuncias públicas, era procedente que Pastor López iniciara causas en dicha materia con el propósito de que se estableciera de manera oportuna su irregularidad. Según la información disponible, Armando Jesús Pastor López no adelantó acciones en tal sentido.

330. La postura del compareciente ante las denuncias o los cuestionamientos sobre las conductas irregulares que presentaba el BIHVG siempre fue de escepticismo o de desestimación. La señora Yanacona en Versión Voluntaria confirmó a esta Sala que Pastor López argumentaba que esas denuncias y el ruido en torno a los hechos era una “guerra jurídica” por parte de las FARC-EP para restarle importancia a la labor del Ejército.

Magistratura: Usted, hace un momento, mencionó que Pastor López habló de que las denuncias o las sospechas, digamos, relacionadas con la comisión de ejecuciones extrajudiciales por



los hombres bajo su mando, fueron calificadas como una “guerra jurídica”, ¿en qué contexto sucedió eso? Compareciente: Bueno, tal vez un momento donde no sé, de pronto, como en el 2008, a mediados del 2008, tal vez donde se empezó a hablar demasiado de guerra jurídica, como decir que el enemigo, hablémoslo de esta manera, haciendo alusión a las FARC, ¿cierto? A las FARC, o sea, a las guerrillas subversivas que teníamos en su momento, de que estaban aprovechando de cualquier tipo de resultado que se diera pues, lo mandaban a ser cuestionado, ¿cierto? Tratando de desprestigiar las fuerzas militares y se habló muchísimo de eso, de la guerra jurídica”.

331. Respecto de las actuaciones disciplinarias, Pastor López indicó que sí tuvo diligencia frente a la atención de las denuncias referidas a la comisión de homicidios por parte de sus subordinados, pues emitió orden referida al desarchivo de las investigaciones disciplinarias que versaban sobre ese tipo de casos en julio de 2008. La Sala considera que ese argumento es infundado y que el compareciente no ejerció en debida forma sus competencias en materia disciplinaria.

332. La decisión de reabrir las causas disciplinarias no obedeció a la voluntad de esclarecimiento y sanción de Pastor López, sino a un lineamiento proveniente directamente de la Brigada. Además, la reapertura de las investigaciones disciplinarias en realidad no constituía un esfuerzo genuino para el esclarecimiento de lo sucedido y la sanción de los responsables, pues no estuvo acompañada de las medidas de orden administrativo necesarias para que se contara con los recursos técnicos y humanos necesarios para que las actuaciones propias de dichas causas se desarrollaran de manera adecuada y oportuna. Así lo indicó en su Versión Voluntaria la señora Yanacona:

Magistratura: En ese momento, el Coronel Pastor López tenía los mismos elementos que acabo de describir, previamente. Es decir, ya sabía de las denuncias, conocía, pues tenía sospechas de lo que estaba ocurriendo. Desde esa perspectiva, ¿se pensó en impulsar las investigaciones disciplinarias que estaban pendientes? O, ¿cuál fue la razón por la que esas investigaciones no avanzaron y no llegaron a dar resultados concluyentes a pesar de que ya tenían tantos elementos para pensar que esas irregularidades, en realidad, sí habían existido? Compareciente: Bueno, ahí no sé. Yo pienso que la mejor decisión que tomó él fue empezar a abrir formales para todo lado, compulsar pliegos de cargos y demás, pero en realidad si

nos damos cuenta eso no funcionó para nada, o sea, emitir órdenes y emitir documentos y como en algún momento lo decía, a nosotros nos pagan, no sé, del 100% el 20% para tomar ordenes o tomar decisiones y el otro 80% para generar que esas órdenes se cumplan como deben ser y, tal vez ese pedazo no lo hicimos nosotros y nos dedicamos a no sé: Yo no sé, yo me hago el bobo, pero sin embargo, firmeme aquí que usted sabe que no puede hacer esto, firmeme aquí que usted no puede hacer esto, cuando todo el mundo lo estaba, de pronto, haciendo a su forma de ser y en su momento, con todo lo que hemos escuchado.

Magistratura: Pero, digamos, ¿cuál fue la razón específica para que esas actuaciones disciplinarias no concluyeran con sanciones, sino que quedaran como en el aire?, ¿había una intención o usted pudo notar una intención específica del Coronel, o de las personas encargadas del desarrollo de esas investigaciones, orientadas a que, realmente, no prosperaran, a que fueran un esfuerzo únicamente formal, pero no una acción real de esclarecimiento de lo sucedido?

Compareciente: Lo que pasa es que, doctor, yo pienso es que a nosotros nos falta mucho conocimiento y en el Ejército se hace eso: usted no tiene nada qué hacer, entonces lo ponen de funcionario de instrucción, cuando no tiene nada de conocimiento de derecho ¿cierto? Entonces, me imagino, que lo que hacen ellos es revisar, poner, mirar, el copie y pegue, y hacer exactamente la parte formal, como usted lo dice, claramente. O sea, es decir, ¿qué toca hacer? Abrir una investigación, hágalas, archívela y pásela, pero, en realidad, nosotros no teníamos un ente de investigación.

333. Esa versión muestra una realidad constatada por la Sala, ninguna de las investigaciones disciplinarias adelantadas al interior del BIHVG en relación con los homicidios investigados culminó con el esclarecimiento de lo sucedido y la imposición de una sanción. Por tanto, se insiste en que la reapertura de dichas causas en modo alguno puede ser interpretada con un esfuerzo genuino para desactivar los patrones macrocriminales que imperaban en el Batallón.

334. Se tiene que las falencias en las que incurrió el señor Pastor López en torno al ejercicio de sus competencias en materia disciplinaria constituyen un aporte esencial a la consolidación de los patrones macrocriminales identificados por la Sala. Tales actuaciones contribuyeron a que se continuara con los homicidios perpetrados por sus subalternos, pues evitaron que se esclareciera la ilegalidad

de las bajas reportadas y se sancionara a sus responsables, dejando sin consecuencia alguna la comisión de los ilícitos.

### **E.3.1.2. Calificación de la conducta del compareciente**

335. De conformidad con lo expuesto, la Sala encuentra bases suficientes para afirmar que Armando Jesús Pastor López, en calidad de Comandante del Batallón de Infantería Héroes del Valle del Guamuez, era consciente de la situación de conflicto armado que se presentaba en el departamento del Putumayo y de la existencia de irregularidades en las bajas reportadas por el BIHVG. A pesar de ello, de manera voluntaria ejerció presiones para la producción de bajas en combate, incentivó la producción de las mismas como resultado operacional tangible, no realizó un control efectivo para establecer la legalidad de las bajas reportadas y no ejerció en debida forma sus competencias en materia disciplinaria.

336. Esas actuaciones constituyen un aporte esencial al patrón macrocriminal descrito en la presente providencia. En relación con lo anterior, se destaca que el conjunto de omisiones desplegadas por Pastor López, de conformidad con la posición formal y material de mando que ejerció sobre el BIHVG, denotan un rol de liderazgo frente a la consolidación de los patrones macrocriminales identificados por la Sala. La atención oportuna de las denuncias referidas a la comisión de ejecuciones extrajudiciales y la adopción de medidas necesarias y razonables hubiera evitado la difusión, permanencia, encubrimiento y comisión a futuro de dichos ilícitos. Además, el compareciente tenía un conocimiento que podía ser actualizado sobre la existencia de estos delitos, pues había suficientes elementos para que un comandante pudiera inferir que se trataba de bajas en combates simulados, realizados sin ninguna prueba sólida de que las víctimas pertenecían a un grupo de delincuencia común o a milicianos de las FARC-EP.

337. De esta manera, la Sala encuentra que Pastor López, en calidad de Comandante del Batallón, estaba habilitado para realizar las actuaciones necesarias para detectar oportunamente la comisión de asesinatos y desapariciones, suspender las presiones e incentivos que figuran como su causa y prevenir o reprimir su conducta a partir del ejercicio de su mando y control. En síntesis, el compareciente, desde su rol de liderazgo, podía desactivar dichos patrones, evitando que se consolidaran mediante la constante reiteración de los delitos investigados y que pasaran desapercibidos desde una perspectiva operacional.

338. Por lo anterior, se le atribuirá la responsabilidad a título de responsabilidad del superior o responsabilidad de mando por los Crímenes de Guerra de Homicidio en Persona Protegida y Ataques contra la Población Civil; en concurso con los Crímenes de Lesa Humanidad de Asesinato, de Tortura y de Desaparición Forzada de Personas.

### **E.3.2. Teniente Coronel (r) María Bertilda Yanacona Olaya**

339. La teniente Coronel María Bertilda Yanacona Olaya, identificada con cédula de ciudadanía No. 45.789.032, fue miembro del Batallón de Infantería Héroes del Valle de Guamuez desde el año 1998 hasta el 2012. En ese periodo se desempeñó como Teniente Coronel en las tres compañías del Batallón Amanecer, Anoche y Ocaso. En este periodo se desempeñó como Teniente y fungió como Oficial de operaciones de dicho Batallón.

340. En adición, la señora Yanacona Olaya acudió voluntariamente ante la JEP mediante acta de sometimiento 45095 suscrita el 4 de febrero de 2018 en Mocoa, Putumayo, y fue escuchada en una sesión que se celebró el 26 de noviembre de 2018.

#### **E.3.2.1. Involucramiento en la ejecución de patrones criminales**

341. Durante su etapa como Oficial de operaciones, la unidad reportó 67 bajas en supuestos combates, todas estas corresponden al patrón macrocriminal de despliegue de las fuerzas militares para combatir supuestos fenómenos de delincuencia común. Esta Jurisdicción pudo comprobar que se trató de asesinatos, ataque contra la población civil y desapariciones presentadas como bajas en combate; actuaciones que Yanacona Olaya reconoció se llevaban a cabo.

342. En adición, Yanacona Olaya participó de manera determinante de un plan criminal por el cual asesinó a civiles por medio del equipo de operaciones bajo su mando. Los homicidios realizados conformaron ataques contra la población civil en el periodo que hizo parte del del BIHVG.

343. Así, Yanacona Olaya actuó ejerciendo liderazgo en la planeación, ejecución y encubrimiento de estas muertes pues, como se reseñó, participó de reuniones en las que se concertó la muerte de civiles, ordenó a sus subalternos buscar civiles que fueron asesinados y desaparecidos, ultimó a una de las víctimas, organizó a los miembros de su pelotón para que se ejecutaran los asesinatos, ataques y las desapariciones, alteró la escena del crimen, así como la información operacional,



dio falsas declaraciones sobre lo ocurrió y llevó a sus subalternos a declarar falsamente ocurrió

344. La señora Yanacona Oyala afirmó que al llegar al BIHVG su superior, el Coronel Armando Jesús Pastor López le señaló que para cumplir las metas trazadas, tendrían que recurrir a los medios necesarios para este fin. Sobre esta reunión, Yanacona Olaya señaló:

“(…) fui y me le presenté al Coronel Pastor López, ahí fue que me dijo, que los dos íbamos a trabajar.

Magistratura: ¿Y qué significaba ir a trabajar?

Compareciente: Pues dar resultados. PREGUNTADO: Pero usted nos acaba de decir que llegaba recomendado, ¿qué significa eso?

Magistratura: Que ya uno venía de un grupo donde se hacían muertes extrajudiciales (...).

Compareciente: el Batallón de Infantería Héroes del Guamuez no tenía, cuando yo llegué, no había dado todavía ninguna baja, pero yo llegué y me le presenté a mi Coronel y me dijo, usted, los dos vamos a trabajar y vamos a poner a trabajar a ese batallón (...).”

345. Derivado de este acuerdo, al presentarse ante el Batallón, Yanacona Olaya informó a sus subalternos que presentarían bajas irregulares y nadie se opuso, al contrario, varios soldados profesionales informaron que, al igual que Yanacona Olaya, ya habían participado en este tipo de conductas y ya sabían lo que debían hacer, participaciones que se derivaron de las diferentes interpelaciones realizadas por Montaña Guamanga.

346. En este contexto, además, a partir de 2005, Yanacona Olaya lideró operaciones que respondieron al patrón de macrocriminal descrito en este auto. En todos los casos, la señora Yanacona Olaya estuvo al mando de las operaciones ilegales.

#### **E.3.2.1.1. Aportes esenciales del compareciente en los patrones determinados por la Sala**

347. Con base en los análisis realizados en la presente providencia, a continuación se dará cuenta de la responsabilidad de Yanacona Olaya por la ejecución del patrón macrocriminal aquí identificado.

#### **E.3.2.1.1.1. Concertación de la presentación de asesinatos y desapariciones forzadas como muertes en combate**

348. Los días previos al resultado reportado el 12 de marzo de 2008, el Coronel Armando Jesús Pastor López llamó a la Teniente Coronel Yanacona para preguntarle por “el trabajo de [ese] mes” y la instruyó para que enviara a alguien al Batallón con el fin de entregarle el dinero necesario para organizar una operación. Así señaló:

“(…) me llama mi Coronel y me dice que, ahí es donde me dice por primera vez que, que lo están acosando por resultados operacionales, que fue lo que ya les comenté a los magistrados perdón. Me llamó una tarde y me dice palabras textuales, ‘me tienen acosado, que qué pasó con el trabajo de este mes’, yo ahí fue que le dije que no había dinero, yo le dije, pues mi Coronel no hay dinero, entonces él me dijo, pues usted coja a los soldados que van a ir, envíelos al Batallón que usted sabe que yo les doy todo lo correspondiente que lo que necesitan para los transportes y la movilidad, en ese momento para eso fue el soldado Carlos Montaña Guamanga al Batallón, mi Coronel les dio gasolina, aceite y transporte y lo que tenían que gastar en la operación.”

349. Atendiendo a este llamado, Yanacona Oyala ordenó a su subalterno Montaña Guamanga quien procedió a incautar el arma que se emplearía en esta operación.

#### **E.3.2.1.1.2. Emisión de órdenes para ejecutar maniobras militares que procuraban la muerte de civiles fuera de combate para presentarlos como resultados operacionales**

350. La señora Yanacona Olaya reconoce haber instruido, como Oficial de operaciones, a la tropa para asesinar a civiles fuera de combate. Respecto de lo ocurrido afirma que, en algunos casos, aun cuando no dio la orden de disparar a las víctimas era ella quien llevaba el mando y quien organizó a los soldados para poder reportar el resultado. Si bien su labor como oficial de operaciones era la de apoyar en la fase de planeación de la operación, y una vez aprobada por el comandante, organizar la ejecución, esta Sala constató que Yanacona dirigió su labor a la presentación de bajas en combate luego de supuestos combates simulados, dejando un resultado de 67 asesinatos durante su periodo como

Oficial de operaciones. Dentro de las operaciones planeadas por la compareciente era conocido por ella que se estaba actuando por fuera de la ley.

351. Además, a partir de las Versiones Voluntarias, esta Sala pudo constatar que la Teniente Yanacona llevaba un control de las operaciones que se realizaban a través de la comunicación por radio con los soldados. En el hecho ilustrativo 1 este punto fue mencionado por Carlos Montaña, quien afirmó en su Versión Voluntaria que Yanacona fue la persona que les indicó como proceder y presionó a los soldados para que le dispararan a la víctima una vez se hubiera cambiado la ropa, todo a través de la radio.

352. Por otro lado, la señora Yanacona Olaya incentivó la práctica de tortura a las víctimas antes de ser asesinadas y presentadas como bajas en combate. Al respecto, se reitera que en la Versión Voluntaria del Soldado Montaña, al referirse a los hechos del 09 de agosto de 2006, se menciona que Yanacona dijo “hagan lo necesario para retenerlos” ante la amenaza de que los tres sujetos se escaparan luego de la detención. A juicio de esta Sala, esa orden de la teniente fue la razón por la cual el informe de Medicina Legal menciona que los cuerpos tenían golpes y fracturas, los soldados golpearon a las víctimas para evitar que se escaparan y que no pudieran presentar el resultado presionado por los superiores, que luego terminó como el reporte de tres bajas en combate.

#### **E.3.2.1.1.3. Liderazgo de maniobras militares que procuraban la muerte de civiles fuera de combate**

353. María Bertilda Yanacona Olaya admitió que ordenó a sus subalternos el desplazamiento hacia el lugar de los hechos y asignó las tareas que debían desempeñarse, así reconoce que por consejo de sus subalternos instruyó a los soldados para que simularan un atraco que sirviera para justificar un presunto combate; Montaña Guamanga confirma que ello fue así. Este último, quien disparó a la víctima, afirma que lo sucedido fue consecuencia de una orden de Yanacona Olaya. Lo anterior, se evidenció a través de la Versión Voluntaria de Montaña, quien afirma:

Magistratura: ¿Pero se dijo que había sido un combate con la guerrilla? Compareciente: No, que había sido un combate con personas que estaban atracando en ese lugar. Magistratura: Y cuando se reportaron los hechos se dijo si la persona estaba sin identificar, es decir, ¿se la reportó como un nn muerto en combate? Compareciente: El conocimiento que tengo sí, la ropa que este sujeto llevaba, mi Teniente la hizo quemar, esa ropa la quemaron.

Magistratura: Cuéntenos por favor cómo pudieron sustentar la existencia de este atraco Compareciente: Simplemente mi Teniente nos dijo que todos nos mantuviéramos pase lo que pase en que fue un atraco y que hiciéramos el alboroto de que así fue.

#### **E.3.2.1.1.4. Responsabilidad por alterar el lugar de los hechos**

354. La señora Yanacona era consciente de que los supuestos combates en los que se presentaban las bajas eran simulados, y que para dar apariencia de legalidad en los reportes de las carpetas de operaciones era necesario alterar el lugar donde se cometían los homicidios.

355. Yanacona Olaya admite que en todas las operaciones que planeó y ejecutó para presentar bajas se alteró la escena del crimen al simular un combate, esa alteración se hacía cambiando la ropa de las víctimas, implantando armamento, siempre armas cortas o explosivos, y disparando las armas desde las manos de las víctimas ya fallecidas para que se encontraran restos de pólvora en los cuerpos.

356. Al respecto, la Versión Voluntaria del Soldado Montaña menciona:

Magistratura: ¿Qué hacían para que los hechos aparentaran combates reales?

Compareciente: Pues uno ya sabe cómo es un combate de verdad, y los superiores y la oficial de operaciones también saben, por eso es tan importante alterar la escena y dejar en los reportes pocas pistas que lo lleven luego a uno a un problema. Para el caso del BIHVG se tenían kits de legalización, siempre con arma corta o explosivos pequeños o granadas, a veces ropa de camuflado y botas o pancartas y escudos como de las FARC. Mi teniente Yanacona generalmente era la que cuadraba esos kits, y los llevábamos ya a la operación o nos lo hacía llegar.

Magistratura: ¿Pero puntualmente cómo alteraban la escena con ese kit?

Compareciente: Pues se le cambiaba la ropa, se disparaba al aire para que la comunidad escuchara el combate, y se disparaba el arma desde las manos de las bajas.



357. Para esta Sala está probado que la señora Yanacona, como Oficial de operaciones, participó en la alteración de los hechos, no solo desde la fase de instrucción de las operaciones para que aparentaran legalidad, sino siendo la persona que aportaba los elementos necesarios para ese encubrimiento con los llamados “kits de legalización”.

#### **E.3.2.1.1.5. Alteración de la información operacional y por concertar las declaraciones falsas en el marco de las investigaciones**

358. Como argumentó esta Sala previamente, se probó que dentro del BIHVG existían irregularidades evidentes en los informes de operaciones y en las carpetas de operaciones. La ya referida cita de la Versión Voluntaria de Yanacona muestra que ella misma firmó anexos de operaciones que se realizaron días después de ocurrida la operación. La finalidad de omitir espacios en esos informes y llenarlos con posterioridad era ajustar y dar apariencia de legalidad a operaciones donde se había violado la ley presentando bajas de falsos combates.

359. Una muestra de esto es el informe de patrullaje del hecho ilustrativo 3, que se adjunta en los anexos de esta providencia, donde, si bien no aparece la firma de la Teniente Yanacona, si aparece una constancia de su revisión. En ese documento se observan espacios en blanco que no fueron llenados y cambios en el color del esfero y tipo de letra en un mismo párrafo.

360. Al respecto, la Teniente Yanacona dijo en su Versión Voluntaria:

Magistratura: Ahora que ha mencionado que usted conocía y firmó algunos documentos de las carpetas de operaciones que tenían inconsistencias, ¿recuerda algún documento puntual que nos permita ver cómo hacían esos cambios días después de las operaciones?

Compareciente: Eran muchos documentos, unos más evidentes que otros. Pero me acuerdo mucho de un informe de patrullaje como del año 2008, unos miembros de Amanecer dieron de baja a tres personas que estaban extorsionando (...), me parece que tenían apellidos Contreras y Villamizar, no recuerdo bien, pero era como mediados del 2008. Me acuerdo muy bien de un informe de patrullaje que me mandaron antes de enviarlo a mi comandante Pastor López y que estaba con mucho espacio en blanco. Y puse a un

soldado que tenía ahí en la oficina a escribir en los papeles lo que le dictara. Y al final él lo mando a mi comandante. Y me acuerdo muy bien porque el chino le puso al final como “revisado por la teniente Yanacona”, y Pastor López se comunicó conmigo como a los 7 días y me preguntó que yo que hacía firmando esa vaina. Así se quedó al final porque ya nada que hacerle, pero fue una embarrada de ese pelado.

361. Además, a partir de la versión libre del Soldado Montaña, se vislumbra la injerencia que tenía Yanacona en las declaraciones que daban los soldados frente a las operaciones ocurridas.

Magistratura: Cuando les tocaba declarar ante autoridades judiciales luego de los hechos, ¿les daban algún tipo de instrucción o acordaban algún tipo de narrativa?

Compareciente: Sí magistrado. En verdad nos reuníamos antes los que habíamos dado la baja y decíamos “a ver, la cosa fue así, estábamos acá y nos dispararon desde ese desnivel, y luego de unos 10 minutos de disparos se les dio de baja y se encontraron estos revolver y demás” o así por el estilo. A veces también era Yanacona por radio que decía, cosas como “ya saben, si los empiezan a joder los judiciales ustedes ya tienen claro lo que pasó y les dicen que el informe de operaciones es directamente conmigo. Todos saben lo que pasó, nada de decir cosas contradictorias entre ustedes” o palabras similares, pero sí, ella estaba pendiente.

362. Lo anterior muestra una participación directa y esencial de Yanacona en el encubrimiento de los hechos dentro de este patrón. Su rol de liderazgo en este asunto permitió que la estructura siguiera reportando baja y encubriéndolas bajo supuestos combates reales.

#### **E.3.2.2. Calificación jurídica de la conducta del compareciente**

363. María Bertilda Yanacona Olaya participó de manera determinante de un plan criminal para dar muerte a civiles gracias al cual las compañías del batallón reportaron 67 hechos constitutivos de asesinatos y ataques contra la población civil, así como 37 desapariciones forzadas y 25 casos de tortura en el periodo en el que ésta hizo parte del Batallón de Infantería Héroes del Valle de Guamez.

Así, Yanacona Olaya actuó ejerciendo liderazgo en la planeación, ejecución y encubrimiento de estas muertes pues, como se reseñó, participó de reuniones en las que se concertó la muerte de civiles, ordenó a sus subalternos procurar a los civiles que fueron asesinados y desaparecidos, organizó a los miembros del Batallón para que se ejecutaran los asesinatos y las desapariciones, alteró la escena del crimen, así como la información operacional, dio falsas declaraciones sobre lo ocurrió y llevó a sus subalternos a declarar falsamente.

364. Yanacona Olaya era consciente de (i) la situación de conflicto armado en medio de la cual ejercía su labor en el departamento del Putumayo, (ii) que las muertes reportadas no habían ocurrido en el marco de un combate, que (iii) las víctimas no eran combatientes; sin su contribución, el equipo bajo su mando no hubiera podido presentar como bajas en combate el asesinato y desaparición de personas vulnerables, seleccionadas, engañadas y trasladadas y que (iv) estaba liderando operaciones en contra de poblaciones específicas caracterizadas por su pobreza y vulnerabilidad.

365. De conformidad con lo expuesto se tiene que la señora María Bertilda Yanacona Olaya, en calidad de Oficial de operaciones del Batallón de Infantería Héroes del Valle de Guamuez, contó con un rol de liderazgo frente al surgimiento y la consolidación de los patrones macrocriminales que han sido identificado por la Sala; es claro que sus aportes fueron esenciales para el diseño, difusión, permanencia y encubrimiento, por ende, se trata de una máxima responsable.

366. Por lo anterior se le atribuirá responsabilidad a título de coautora por los Crímenes de Guerra de Homicidio en Persona Protegida y Ataques contra la Población Civil; en concurso con los Crímenes de Lesa Humanidad de Asesinato, Tortura y Desaparición Forzada de Personas.

### **E.3.3. Soldado Profesional (r) Carlos Montaña Guamanga**

367. El soldado profesional Carlos Montaña Guamanga, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.345.678 de Bogotá D.C, fue miembro del Batallón de Infantería Héroes del Valle de Guamuez desde el año 1998 por lo menos hasta el 2010. En ese periodo se desempeñó como Soldado Profesional en las tres compañías del Batallón, Amanecer, Anochecer y Ocaso.

368. Por otro lado, el señor Montaña Guamanga acudió voluntariamente ante la JEP mediante acta de sometimiento 784632, suscrita el 9 de noviembre de 2023 en

La Hormiga, Putumayo, y fue escuchado en una sesión que se celebró el 26 de noviembre de 2018.

### **E.3.3.1. Involucramiento en los patrones macrocriminales**

369. Entre abril de 2004 y julio de 2008, como Soldado Profesional, el señor Montaña se involucró en 67 bajas, demostrados por medio de los casos ilustrativos presentados, en supuestos combates dentro del patrón macrocriminal evidenciado por la Sala, siendo este, operaciones ofensivas contra supuestas actividades de delincuencia común y/o milicias de las FARC. En específico, el Soldado Profesional fue parte activa de múltiples operaciones de las cuales esta Sala tomó tres para la ilustración del patrón mencionado.

370. Estos crímenes se dieron con ocasión de un plan para mostrar como resultados legítimos las muertes producidas en combates simulados. Mientras el señor Montaña Guamanga fue miembro del Batallón participó en la ejecución y en el encubrimiento de esas operaciones ilegales, ya que accionó su armamento de dotación en contra de las víctimas, las retuvo para que alguien las ejecutara, colaboró en la alteración de los escenarios donde se produjeron las bajas y promovió el patrón macrocriminal en las tres compañías del Batallón.

#### **E.3.3.1.1. Aportes esenciales del compareciente en los patrones determinados por la Sala**

371. En este aparte la Sala procederá a exponer las conductas que permitieron que se perpetrara en patrón macrocriminal identificado.

##### **E.3.3.1.1.1. Responsabilidad por participar en la ejecución de las operaciones ilegales**

372. Lo primero que la Sala quiere denotar es el grado de confianza del compareciente para sus superiores, por cuanto siempre mostró diligencia y completa obediencia al cumplir todas las órdenes que le fueron impartidas. Al respecto, indicó que:

Magistratura: Antes de llegar al levantamiento del cadáver de la víctima, le estoy preguntando ¿por qué cree que fue usted y no alguno de los otros cuatro soldados que estaba ahí al que le dieron la orden de dispararle a esa persona?

Compareciente: Porque ella me dio la orden

Magistratura: ¿Por qué usted y no a otro?



Compareciente: Porque ella me dijo “se queda usted”, “sí claro, me quedo”, o “se sube al cerro”, le dije “como quiera”, “no quédese ahí”, le dije “listo”, [...] a mí me dio la orden por la radio que disparara, lo demás que le diga es mentira, yo sé el momento en que me dijo a mí, yo salí a la carretera y le disparé, cayó la víctima<sup>130</sup>.

373. Al mismo tiempo sostuvo que se le añadió al Grupo Especial de Operaciones del Batallón por la confianza que tenían sus superiores y como premio por haber ejecutado sus directrices sin ningún tipo de oposición:

“Magistratura: ¿Cree usted que el hecho de que usted hubiera participado ya en una muerte de una persona influyó para que lo recomendara para integrar el grupo especial?.

Compareciente: Pues si usted le mete lo más lógico, la lógica es esa, como digo, claro, lo lógico es eso, si yo no me hubiera prestado para eso, si no hubiera caído en la ignorancia, yo no estaría aquí, ni detenido, ni tampoco en el grupo especial, estaría activo todavía, con eso le digo todo.

Magistratura: La pregunta es si el hecho de que usted hubiera participado en ese hecho fue una razón para que el cabo lo recomendara para ingresar al grupo especial.

Compareciente: Sí, para mí, en mi conocimiento poco, claro fue un hecho, que eso fue para pasar ahí”<sup>131</sup>.

374. El señor Montaña aseveró que participó en las ejecuciones de cuatro formas diferentes: (i) accionó su arma de dotación para causar la muerte a las víctimas, (ii) aseguró el área donde se estaba materializando la ejecución extrajudicial, (iii) retuvo a víctimas para ejecutar el patrón sobre las víctimas y (iv) difundió el patrón macrocriminal.

375. Referente a la primera contribución, accionó el arma empleada en el montaje de los hechos para causar la muerte a la víctima, tal como lo hizo en los hechos reflejados en el hecho ilustrativo 1, es decir el 12 de marzo de 2008. Sobre este hecho (el cual fue identificado por la Sala como uno de los ilustrativos del subcaso, supra), esta sala determinó que:

<sup>130</sup> Jurisdicción Especial para la Paz. Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Versión Voluntaria de Carlos montaña Guamanga. Expediente Legali Caso 03, Subcaso Putumayo

<sup>131</sup> Jurisdicción Especial para la Paz. Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Versión Voluntaria de Carlos montaña Guamanga. Expediente Legali Caso 03, Subcaso Putumayo

El Soldado Montaña y otros miembros de Amanecer llevaron al señor Eder Medina a un lugar sin concurrencia en la vereda El Águila. Rojas indicó dónde debían ubicarlo y cuando la Teniente Yanacona dio la indicación a través de comunicación radial, el soldado Carlos Montaña Guamanga abrió fuego, impactando en tres ocasiones a la víctima. Pese a los impactos recibidos, Eder Medina se encontraba con vida, ante lo cual cuando se reportó esta situación a la teniente Yanacona Olaya, ésta recalcó que era necesario lograr la baja, por lo que el Soldado Montaña Guamanga procedió a propinarle tres impactos adicionales para rematarlo

376. Además, el compareciente reconoció haber sido quien disparó a varias víctimas:

“(...) Pese a que le dimos, ese muchacho Eder Medina estaba con vida, ante lo cual cuando se reportó por radio esta situación a la teniente Yanacona, que nos dijo que era necesario lograr la baja, por lo que me tocó pegarle tres tiros más para rematarlo”<sup>132</sup>.

377. Esta versión fue corroborada por la Teniente María Bertilda, quien en Versión Voluntaria detalló el desarrollo de la operación ilegal así:

[D]espués ahí sí ya hago yo bajar las víctimas por medio del soldado Montaña Guamanga, que venía con ellos de El Águila que los había traído. Traía prendas, traía sudadera, de sus botas no recuerdo si botas, pero traía sudaderas y entonces ellos los visten y entonces yo voy y miró el sitio. Yo hice eso, yo fui, miré el sitio y entonces yo le dije “no, pero eso no se puede hacer acá todos los tres acá”. Entonces, les dije “mire hagan más o menos unos 50 metros”. Quedó una víctima y ahí en el sitio casi de la entrada quedó una víctima que fue la víctima del fusil. Yo di la orden de disparar porque pues yo estaba al mando de la de la unidad del pelotón o desarrollar lo que se iba a hacer el hecho que conllevó para quitarle la vida de estas personas. Entonces, yo di la orden.

<sup>132</sup> Jurisdicción Especial para la Paz. Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Versión Voluntaria de Carlos montaña Guamanga. Expediente Legali Caso 03, Subcaso Putumayo

### E.3.3.1.1.2. Responsabilidad por alterar el lugar de los hechos

378. En cuanto a este elemento, el señor Montaña aseguró que, además de ayudar en la ejecución de las víctimas, también prestó colaboración para encubrir la verdadera naturaleza de los operativos ilegales. Por ejemplo, en el hecho del 21 de agosto del 2008, hizo lo siguiente:

La Teniente Yanacona me llamó y me dijo que si el muerto estaba al revés usted tiene que voltearlo y acomodarlo bien. No nos vaya a hacer caer... [P]or eso le hablo muy claro, el cuerpo quedó medio atravesado le dije y me dijo “acomódelo, colóquelo que quede como cuando usted cae de frente como diagonal”. Pues yo lo moví, pues no lo moví de esquina, solamente enderezarlo un poquito, yo lo enderecé.

Después de un tiempo llegó el CTI a realizar el levantamiento de los cuerpos. El procedimiento incluyó entrevistas con los participantes y una recreación de sus posiciones y posibles trayectorias de los disparos, que les tomó a los investigadores varias horas, lo que fue señalado en versión voluntaria por el SLP Montaña Guamanga como inusual en los levantamientos que había presenciado.

379. También, ayudó a implantar el armamento a las víctimas (para simular que murieron en combate), este elemento se evidencia en los hechos y ilustrativos 1 y 3:

Hecho ilustrativo 1:

Algunos comparecientes fueron testigos del reporte de los hechos al batallón por medio del radio del pelotón. En su versión voluntaria, el soldado Carlos Montaña Guamanga mencionó que tras los disparos contra Eder Medina se reportó que se presentó un combate de encuentro con tres personas en el que se dio de baja a uno de los tres combatientes. El mismo soldado Montaña Guamanga mencionó que la teniente Yanacona Olaya fue quien le ordenó claramente poner un arma en las manos de Eder Medina y accionarla. De acuerdo con el relato de la teniente Yanacona, el arma fue conseguida por el soldado Carlos Montaña Guamanga.

Hecho ilustrativo 3:

[L]a orden de la teniente Maria Bertilda es que se debe dar de baja, nada de heridos”, entonces ninguno le quería disparar, yo le disparé a esa persona. Entonces yo le puse el arma a esa persona que yo le disparé y le disparé el arma en la mano de la persona.

380. Sobre lo ocurrido en el hecho ilustrativo 1, María Bertilda Yanacona confirmó que, por medio de una llamada, el soldado Guamanga le cambió la ropa a las víctimas. Además, admitió que una de las armas implantadas había sido decomisada por él en días previos en un retén real y guardada con el propósito de emplearla posteriormente en la simulación de un combate. Igualmente, Guamanga mencionó en su versión voluntaria:

Compareciente: yo le puse el arma porque la teniente Yanacona me lo dijo por el radio, y luego abandonamos la zona, no esperamos a la fiscalía, no esperamos tampoco la funeraria porque no éramos orgánicos de ese pelotón”.

381. Por otro lado, conforme a la orden de operaciones se tiene constancia de que Montaña era uno de los soldados asignados en los hechos del 09 de agosto de 2006. Como se ha referido anteriormente en este auto, a juicio de la Sala, los hematomas y fracturas de los cuerpos mencionados en el informe Medicina Legal fueron ocasionados por golpes propinados por los soldados durante el transporte en el camión hasta el sitio donde fueron asesinados. Luego de la detención de las tres víctimas en la que participó Montaña, se propinaron golpes que produjeron esos resultados presentados por Medicina Legal, evidenciando signos de tortura ocasionados por los soldados del BIHVG.

#### **E.3.3.1.1.3. Responsabilidad por difundir el patrón macrocriminal al interior del Batallón Héroes del Valle Guamuez**

382. En adición, el Soldado Profesional también difundió el patrón macrocriminal e incentivó a que lo replicaran otros integrantes del Batallón, puntualmente de las compañías: Amanecer, Anochecer y Ocaso, de las cuales hacía parte y que participaron activamente en el patrón macrocriminal. El método empleado por el señor Montaña Guamanga fue demostrar por los beneficios que adquiriría dentro del Batallón por llevar a cabalidad las ejecuciones extrajudiciales.



383. En este sentido, el Soldado Profesional Carlos Montaña, también informó que en el Batallón se daban 5 días de permiso por cada operación con resultados y que dicha disposición había sido comunicada a la tropa en una formación por parte de la señora María Bertilda Yanacona con el objetivo de que la gente se motivara:

Magistratura: ¿En qué momento le explicaron que usted iba a recibir días de permiso por estos hechos?

Compareciente: No porque vea, como, le voy a hablar de un relato cortico, dijeron bueno se dan 5 días de permiso por operación

Magistratura: ¿quién dijo eso?

Compareciente: Ahí directamente dijo fue Bertilda, 5 días de permiso por operación.

Magistratura: ¿Luego de eso usted se lo comunicó a sus compañeros?

Compareciente: Sí, así aumentábamos las bajas. Por eso yo me sentaba en las tiendas con mis compañeros y metía la cizaña porque me daban plata y vacaciones y a el resto también, era un gana-gana.

#### **E.3.3.2. Calificación jurídica de la conducta del compareciente**

384. El señor Carlos Montaña Guamanga participó de forma consciente en un plan criminal que tenía como fin asesinar a civiles y fingir que estos eran miembros de grupos al margen de la ley (delincuencia organizada o grupos guerrilleros). Además, su participación fue esencial con las actividades descritas en esta providencia, demostrado por medio los hechos ilustrativos, al ser un subalterno de confianza para sus superiores, quienes al incluirlo en el grupo ejecutor podían tener certeza de que sus órdenes iban a ser cumplidas y que la naturaleza ilegal de su actuar no se iba a divulgar, ya que Montaña Guamanga, cuando le fue ordenado, disparó en contra de las víctimas, las retuvo, prestó vigilancia en el sector donde se desplegó el operativo irregular, modificó los escenarios donde perpetraron los homicidios y difundió el patrón.

385. Además, era consciente de (i) la situación de conflicto armado que se presentaba en el departamento del Putumayo, (ii) las muertes reportadas habían ocurrido en el marco de un combate simulado y (iii) que las víctimas eran civiles. Sin su contribución, la unidad a la que pertenecía no habría podido presentar como bajas en combate el asesinato y desaparición de personas protegidas por el DIH.

386. De esta manera, se concluye que la actuación del señor Carlos Montaña Guamanga como Soldado Profesional adscrito al BIHVG, constituyó un aporte esencial para la ejecución del patrón que han sido identificado por la Sala. Esto tuvo lugar mediante (i) su participación constante en el desarrollo de las operaciones ilegales, (ii) la alteración de las escenas del crimen para encubrir la ilegalidad de las conductas y (iii) la difusión del patrón macrocriminal.

387. Adicional a la participación crucial, fue un miembro activo en las órdenes referentes a los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, evidenciados. Lo anterior debido a que difundió la idea criminal, convenciendo a sus compañeros de ejecutar el patrón macrocriminal descrito, lo que permitió la macrovictimización en el Putumayo. Es por esto que, debido a su papel fundamental en la instauración sólida de este patrón en el Batallón, será considerado como un máximo responsable. Por lo anterior se le atribuirá responsabilidad a título de coautor por los Crímenes de Guerra de Homicidio en Persona Protegida y Ataque a la Población Civil; en concurso con los Crímenes de Lesa Humanidad de Asesinato, Tortura y Desaparición Forzada de Personas.

## DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas:

### III. RESUELVE

**Primero. DETERMINAR** que los asesinatos y las desapariciones forzadas, cometidos entre 2005 a 2009 en el departamento de Putumayo para presentar ilegítimamente bajas en combate, por agentes del Estado colombiano configuran **CRÍMENES DE GUERRA Y CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD**, conforme al Código Penal Colombiano y al Estatuto de Roma, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia, la Sala decide **LLAMAR** a reconocer responsabilidad a Armando Jesús Pastor López, María Bertilda Yanacona Olaya y Carlos Montaña Guamanga.

1. A **ARMANDO JESÚS PASTOR LÓPEZ**, a título de **RESPONSABILIDAD DE MANDO**, por los crímenes de guerra de homicidio en persona protegida artículo 135 CP, en concordancia con el artículo 8.2.c.1 del ER y ataques a la población civil de acuerdo con el artículo 8.2.b.1 del ER; así, como crímenes de

lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada de personas, según el artículo 7.1.a y 7.1.i del ER y tortura conforme al artículo 7.1.f del ER.

**2. A MARÍA BERTILDA YANACONA OLAYA y CARLOS MONTAÑA GUAMANGA, a título de COAUTORES** por crímenes de guerra de homicidio en persona protegida, artículo 135 CP, en concordancia con el artículo 8.2.c.1 del ER, y ataques a la población civil en concordancia con el artículo 8.2.b.1 del ER; así como, crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada de personas, según el artículo 7.1.a y 7.1.i del ER y tortura conforme al artículo 7.1.f del ER.

**Segundo. – PONER A DISPOSICIÓN de** a los comparecientes, víctimas y el Ministerio Público los hechos y conductas determinados por esta Sala, así como todos los anexos y pruebas en los que se fundamenta la decisión y que obran en el expediente, para que decidan si reconocen o no su responsabilidad en los términos del artículo 79, literal h de la Ley 1957 de 2019 y del artículo 27B de la Ley 1922 de 2018. Para ello, la Sala de Reconocimiento les **OTORGARÁ** el plazo máximo hasta el día 5 de septiembre de 2024, con el fin de que los sujetos procesales manifiesten ante la Sala de Reconocimiento sus observaciones.

**Séptimo.- NOTIFICAR** esta providencia, a través de sus apoderados y representantes, a las víctimas acreditadas en el Caso No. 03, teniendo en cuenta los mecanismos previstos en la sentencia interpretativa TP-SA-SENIT 1 de 2019 de la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz y en el Código General del Proceso.

**Octavo.- COMUNICAR** esta providencia a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para lo de sus respectivas competencias.

**SALA DE RECONOCIMIENTO, VERDAD, RESPONSABILIDAD Y DE  
DETERMINACIÓN DE HECHOS Y CONDUCTAS**